# **JURISPRUDENCIA 20/2018**

|  |
| --- |
| **Santiago Vargas Hernández y otro** **vs.** **Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT y otros**  **Jurisprudencia 20/2018** |

**PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.-**De la interpretación sistemática de los [artículos 1º, 4° y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=JURISPRUDENCIA,20/2018); [3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=JURISPRUDENCIA,20/2018); así como [36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres](https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=JURISPRUDENCIA,20/2018), se desprende que los institutos políticos deben garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participación efectiva de las mujeres.

**Sexta Época:**

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.*[*SUP-JDC-369/2017*](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00369-2017.htm)*y acumulados.—Actores: Santiago Vargas Hernández y otro.—Órganos responsables: Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT y otros.—22 de junio de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala, Omar Espinoza Hoyo, Jesús González Perales y Carmelo Maldonado Hernández.  
  
Recurso de reconsideración.*[*SUP-REC-1319/2017*](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/REC/SUP-REC-01319-2017.htm)*.—Recurrentes: Agustín Nava Huerta y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.—18 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.*[*SUP-JDC-****20/2018***](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00020-2018.htm)*.—Actora: Diana Cosme Martínez.—Autoridad responsable: Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.—14 de febrero de 2018.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Disidentes: Mónica Aralí Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: Magali González Guillén y Jorge Armando Mejía Gómez.*

**La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.**

**Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 20 y 21.**

## **SENTENCIA** [**SUP-JDC-369/2017**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00369-2017.htm)

**JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO**

**EXPEDIENTES**: SUP-JDC-369/2017, SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 Y, SUP-JDC-468/2017, ACUMULADOS.

**ACTORES**: SANTIAGO VARGAS HERNÁNDEZ Y FLORENCIO TORRES ROMERO

**ÓRGANOS RESPONSABLES:**  COMISIÓN NACIONAL DE CONCILIACIÓN, GARANTÍAS, JUSTICIA Y CONTROVERSIAS DEL PT Y OTROS

**TERCERO INTERESADO.** ADALID MARTÍNEZ GÓMEZ.

**MAGISTRADA PONENTE**: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

**SECRETARIOS**: JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA, OMAR ESPINOZA HOYO, JESÚS GONZÁLEZ PERALEZ Y CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil diecisiete.

**VISTOS,** para resolver, los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano indicados al rubro, promovidos por Santiago Vargas Hernández y Florencio Torres Romero, en su carácter de militante del PT[[1]](#footnote-1), contra diversos actos y omisiones atribuidas a diferentes órganos partidistas, relacionados con la renovación de los entes directivos nacionales.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. Antecedentes.** De los hechos narrados en las demandas, así como de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

**1. Elección de dirigentes.** El diecinueve de febrero de dos mil once se celebró el Congreso Nacional Ordinario y se renovaron todos los órganos directivos del PT.

**2. Primer juicio ciudadano (SUP-JDC-198/2017)**. El treinta y uno de marzo pasado, Santiago Vargas Hernández promovió juicio ciudadano; solicitó que se conociera *per saltum* su impugnación.

Este Tribunal determinó que el juicio era improcedente y ordenó reencauzarlo a recurso de queja, competencia de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT[[2]](#footnote-2), en donde se registró con la clave CNCGJYC/01/NAL/17.

**3. Segundo juicio ciudadano (SUP-JDC-272/2017)**. El veintidós de abril siguiente, Santiago Vargas Hernández promovió juicio ciudadano en el que fundamentalmente reclamó la omisión de resolver el recurso intrapartidista al que se reencauzó su demanda inicial; la demanda fue desechada, por haber quedado sin materia, ya que el órgano partidista resolvió dicho recurso.

**SEGUNDO. Medios de impugnación**. En desacuerdo con la resolución de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT emitida el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, así como con diverso acto y omisión que más adelante se precisarán, relacionados con el Congreso Nacional que llevará a cabo el PT para elegir a sus dirigentes nacionales, Santiago Vargas Hernández promovió el presente juicio.

Asimismo, Florencio Torres Romero promovió tres juicios ciudadanos para impugnar diversas omisiones relacionadas también con el Congreso Nacional que llevará a cabo el PT para elegir a sus dirigentes nacionales, así como la Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT.

**TERCERO. Trámite y sustanciación**. Recibidas las constancias atinentes en esta Sala Superior, la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes SUP-JDC-369/2017, SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017, así como turnarlos a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La Magistrada instructora radicó y admitió a trámite los presentes medios de impugnación; y, en su oportunidad, cerró la instrucción.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. Competencia**. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios al rubro indicados, con fundamento en los artículos 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de juicios en los que se reclaman actos y omisiones relacionados con la renovación de los órganos nacionales de un partido político.

**SEGUNDO. Acumulación**. De la lectura integral de las demandas, se advierte que los casos tienen relación con la convocatoria para el Congreso Nacional ordinario del PT que tendrá lugar el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, además de que coinciden en reclamar la supuesta omisión de convocar y notificar las convocatorias a las sesiones de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, de levantar las actas correspondientes, así como por la indebida publicidad de la Convocatoria, entre otras cosas, haciendo valer agravios similares.

En ese sentido, al existir estrecha vinculación entre los juicios, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017, al diverso SUP-JDC-369/2017, por ser este medio de impugnación el que se recibió primero en la oficialía de partes de esta Sala Superior, según se advierte de las constancias de autos.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución, a los autos de los expedientes acumulados.

**TERCERO. Procedencia del *per saltum (SUP-JDC-399/2017,* S*UP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017)***. Florencio Torres Romero señala que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que el estudio *per saltum* se justifica, entre otras causas, por el riesgo de que el transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político-electoral presuntamente vulnerado.

Señala que en el caso, se encuentra exonerado de agotar los medios intrapartidistas previstos en los estatutos del PT, ya que dicho agotamiento podría representar una amenaza seria a los derechos sustanciales que son objeto del litigio, pues lo impugnado se relaciona con el 10° Congreso Nacional del citado partido político, que tendrá lugar el próximo veinticuatro de junio, por lo que si agotara el recurso de queja previsto en el artículo 55 Bis 1 del Estatuto, ya no podría impugnar la resolución que le recaiga, y por ende, las omisiones y determinaciones que ahora recurre, dado que el mencionado recurso debe ser resuelto en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días.

La Sala Superior considera que debe procederse, *per saltum*, al estudio de las demandas de los juicios SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017, por las razones que enseguida se exponen:

La litis en los juicios se relaciona con diversas omisiones que se atribuyen a la Comisión Coordinadora Nacional, a la Comisión Ejecutiva Nacional del PT y a la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, así como con la legalidad de la Convocatoria emitida para la celebración del 10° Congreso Nacional Ordinario del indicado partido político, por lo que atendiendo lo previsto en los artículos 51, primer párrafo; 53, primer párrafo, incisos a), b) y e); 54, primer párrafo, inciso a); y 55 Bis 1, primer y segundo párrafos, de los Estatutos del PT, quien tendría que pronunciarse en un primer momento al respecto, sería la Comisión de Justicia, a través del recurso de queja. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, del Pacto Federal.

No obstante, en cuanto a la definitividad del acto controvertido, se destaca que existen supuestos conforme a los cuales la parte actora queda exonerada de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local o en la normativa partidista, cuando las circunstancias del caso puedan implicar denegación de impartición de justicia o cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, en esencia, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo.

Esta Sala Superior ha concluido que en tratándose del cumplimiento del requisito de definitividad se considerará satisfecho, cuando el propósito o finalidad de agotar los medios de impugnación no signifiquen instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, el derecho del actor que se aduce conculcado, en el acto o resolución controvertido.

El criterio anterior ha sido sostenido reiteradamente por la Sala Superior, lo cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 9/2001, cuyo rubro es “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.”

En este sentido, en el caso, existen circunstancias especiales que conducen a tener por satisfecho el requisito de procedibilidad que se analiza, derivado de las peculiaridades del asunto.

Lo anterior se afirma, en razón de que para el próximo veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, está convocado el “10º Congreso Nacional Ordinario” del PT,y los actos y omisiones que se reclaman en los juicios citados, tienen estrecha relación con lo controvertido en el juicio ciudadano SUP-JDC-369/2017, ya que, por ejemplo, se aduce la ilegalidad de las asambleas del catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero del año en curso, y se alega la ilegibilidad de algunas personas.

Ahora bien, en el último juicio citado, el actor ya agotó la instancia intrapartidista, por tanto, en el caso, dada esa estrecha relación, entre todos los juicios, procede el estudio per saltum de aquéllos en los que no se ha agotado la instancia intrapartidista.

Atento a lo expuesto, la Sala Superior tiene por cumplido el requisito de definitividad de la impugnación, por lo que procederá a estudiar, *per saltum*, los agravios que plantea Florencio Torres Romero.

En consecuencia, se **desestima** la causa de improcedencia invocada por la Comisión Coordinadora Nacional del PT, relativa al incumplimiento del principio de definitividad y a que no se justifica el conocimiento *per saltum*.

**CUARTO. Tercero interesado.** Toda vez que, mediante escrito recibido en la Comisión Coordinadora Nacional del PT, el ocho de junio de dos mil diecisiete, Adalid Martínez Gómez, ostentándose como militante e integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del indicado partido político, compareció al juicio ciudadano SUP-JDC-399/2017, con el carácter de tercero interesado, se le reconoce tal calidad.

Lo anterior, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 17, numeral 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la siguiente manera:

**1. Forma.** En el escrito que se analiza, se hace constar el nombre de quien comparece como tercero interesado, así como la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta contraria a la del actor, así como su firma autógrafa.

**2. Oportunidad.** El escrito de tercero interesado fue presentado oportunamente, ya que se recibió en la Comisión Coordinadora Nacional del PT, dentro del plazo de setenta y dos horas que marca el artículo 17, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al efecto, la referida Comisión Coordinadora Nacional al remitir las constancias de publicitación del medio de impugnación, señaló que en el plazo conferido para tal fin se presentó el escrito referido, ya que el término de setenta y dos horas transcurrió de las veintidós horas del seis de junio, hasta las veintidós horas del nueve de junio del presente año.

Por lo anterior, si el escrito de comparecencia como tercero interesado fue presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete a las diecinueve horas con diez minutos, es inconcuso que su promoción fue oportuna.

**3. Legitimación.** Se reconoce la legitimación del ciudadano compareciente ya que lo hace en su carácter de militante del PT e integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que tiene un interés legítimo, ya que su pretensión es incompatible con la del actor, pues, en su concepto, no existen las omisiones reclamadas, además de que no se actualiza vulneración alguna al principio de paridad de género.

**QUINTO. Sobreseimiento.** En primer lugar, se debe precisar que, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-445/2017, se cuestionan las siguientes omisiones y actos:

**1.** La omisión de expedir la convocatoria por parte de la Comisión Coordinadora Nacional del PT para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT en fechas catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

**2.** La omisión de aprobar y publicar los supuestos acuerdos de las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional celebradas el catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

**3.** La omisión de aprobar y publicar la Lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT.

**4.** La Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT.

Ahora bien, esta instancia jurisdiccional electoral federal considera que debe sobreseerse respecto de las tres primeras omisiones reclamadas, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-445/2017, en razón de que el actor Florencio Torres Romero, agotó su derecho a impugnar las mismas omisiones, con la presentación del diverso juicio radicado en el expedienteSUP-JDC-399/2017.

Sobre el particular, debe tomarse en consideración el texto del artículo 9, apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que, a la letra, establece lo siguiente:

**“Artículo 9**.

…

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…**”**

Además, el artículo 11, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que procede el sobreseimiento cuando, una vez admitido el juicio o recurso correspondiente, aparezca o sobrevenga una causal prevista en el propio ordenamiento invocado.

Al respecto, ha sido criterio reiterado por este órgano jurisdiccional que, en materia electoral, salvo en circunstancias y particularidades excepcionales, no procede la ampliación de la demanda o la presentación de un segundo escrito de demanda, toda vez que si el derecho de impugnación, ya ha sido ejercido con la promoción de una demanda, no se puede volver a ejercer, válida y eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la presentación de otra u otras demandas.

Esto es así, en razón de que la promoción de un medio de impugnación electoral agota el derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para interponer, con un nuevo o segundo escrito de demanda, idéntico medio de impugnación para controvertir igual acto reclamado, emitido por la propia autoridad.

Ilustra lo anterior, *mutatis mutandis*, la jurisprudencia 06/2000, cuyo rubro, es del orden siguiente: **“DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SU AMPLIACIÓN O LA PRESENTACIÓN DE UN SEGUNDO LIBELO ES INADMISIBLE”**.

Ahora bien, en el caso, de las constancias que obran en autos, específicamente los que corresponden a los juicios ciudadanos citados en el presente apartado**,** se advierte que Florencio Torres Romero presentó dos escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de las omisiones antes precisadas.

La primera de las demandas fue presentada directamente en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos del primero de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior. El referido escrito dio origen al expediente identificado con la clave **SUP-JDC-399/2017**, el cual se mandó a tramitar mediante requerimiento de la referida fecha.

En cambio, el segundo de los escritos fue presentado a las dieciséis horas con dieciséis minutos, el doce de junio del año en curso, ante la propia Sala Superior, el cual dio lugar a la integración del expediente identificado con la clave **SUP-JDC-445/2017**.

Ahora bien, del análisis de los escritos atinentes, es posible concluir que los mismos son similares en cuanto a las omisiones reclamadas, pues, en ellos, se hacen valer una serie de alegaciones dirigidas a controvertir las referidas omisiones.

De hecho, ambos escritos fueron presentados por el mismo actor.

En esas condiciones, si el mismo enjuiciante presenta dos escritos de demanda, mediante los cuales controvierte, las indicadas omisiones, esta instancia jurisdiccional estima que debe sobreseerse respecto de las referidas omisiones impugnadas en el juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-445/2017, pues Florencio Torres Romero agotó su derecho a impugnar al haber presentado la demanda del juicio SUP-JDC-399/2017 directamente ante este órgano jurisdiccional.

Así las cosas, de conformidad con lo previsto en los artículos 9, apartado 3, y 11, apartado 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estima que lo conducente es sobreseer la demanda correspondiente al juicio ciudadano en comento, respecto de las aludidas omisiones, al haberse admitido la misma.

**SEXTO. Requisitos de procedibilidad**. **Forma**. Los medios de impugnación se presentaron por escrito ante esta Sala Superior, y en ellos se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa de los promoventes, así como la identificación de lo que impugnan, los hechos en que se basan y los agravios que se alega causan perjuicio.

No pasa inadvertido que al rendir el informe circunstanciado del juicio ciudadano SUP-JDC-468/2017, la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del PT hace valer como causa de improcedencia la prevista en el artículo 9, apartado 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a la falta de firma autógrafa en el escrito de demanda, porque la firma de Florencio Torres Romero no coincide con la que aparece en la copia de su credencial para votar y con la asentada en las demandas que dieron lugar a la integración de los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano: SUP-JDC-399/2017; SUP-JDC-445/2017; y, SUP-JDC-446/2017, motivo por el cual la firma no proviene del puño y letra del demandante y, por ende, debe desecharse el medio de impugnación.

Por ello, la referida Comisión Nacional ofrece la prueba pericial respecto a la firma del promovente.

Al respecto, esta Sala Superior considera que la causa de improcedencia es **infundada,** debido a que si el órgano partidista responsable considera que las firmas contenidas en las demandas de los presentes juicios ciudadanos no habían sido estampadas de puño y letra de Florencio Torres Romero debió haber ofrecido el medio de prueba idóneo para acreditar tal situación.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el órgano responsable se encontraba obligado a probar ante éste órgano jurisdiccional la no autenticidad de la firma impugnada.

Para demostrar los extremos de su afirmación, el órgano partidista responsable debió ofrecer la prueba pericial en grafoscopía cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 14, párrafo 7, incisos a), b), c) y d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sin embargo, esta Sala Superior estima que el órgano responsable no satisface los requisitos previstos en los incisos b) y d) del referido artículo, consistentes en señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes y señalar el nombre del perito que se proponga, exhibiendo su acreditación técnica.

Similar criterio se sostuvo al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-1783/2012, SUP-JDC-17/2011 y, SUP-JDC-2730/2008.-

En ese orden de ideas, toda vez que el órgano partidista responsable no cumplió con los requisitos señalados por la ley electoral adjetiva relacionados con el ofrecimiento de la prueba pericial y mediante una interpretación que resulte favorable para la protección más amplia de los derechos humanos (*pro homine*) y a favor de la procedencia de la acción (*pro actione*), en términos de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución federal, se estima que es **infundada** la causa de improcedencia que expone la responsable.

Máxime que, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, Florencio Torres Romero compareció ante esta Sala Superior para efecto de ratificar su escrito de demanda del juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano presentada el diecisiete de junio del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional electoral federal y, que dio lugar a la integración del expediente identificado con la clave SUP-JDC-468/2017.

**Oportunidad**. Tocante a este requisito, respecto del juicio SUP-JDC-369/2017, se determinará lo conducente en un apartado posterior, porque se reclaman diversos actos (una resolución y una notificación) y una omisión, cuyo cómputo del plazo es diferente, e incluso la oportunidad de impugnar la resolución, depende que le asista la razón al actor en cuanto a la notificación que impugna.

En los juicios SUP-JDC-399/2017 y SUP-JDC-468/2017, el actor reclama diversas omisiones que dada su naturaleza, se actualizan cada día que transcurre, por ser de tracto sucesivo, razón por la cual debe tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista la obligación a cargo de la responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de esta Sala Superior, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.

Por tanto, **se desestima** la causa de improcedencia hecha valer por la Comisión Coordinadora Nacional del PT, consistente en la inexistencia de las omisiones reclamadas, puesto que, en su concepto, las convocatorias y acuerdos fueron debidamente publicados en los estrados del aludido partido político y y notificadas a los integrantes de los órganos colegiados, de ahí que haya fenecido el plazo para impugnarlos y, se denote la extemporaneidad de la demanda de los juicios ciudadanos SUP-JDC-399/2017 y SUP-JDC-445/2017.

Lo anterior es así, porque en el referido medio de impugnación, se impugnan diversas omisiones, motivo por el cual a efecto de no incurrir en el vicio lógico de petición de principio, no es posible realizar un pronunciamiento previo respecto de la existencia o no de las mismas, cuando ello se debe determinar en el correspondiente estudio de fondo.

Por lo que hace, a la Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT se tiene que, en el diverso SUP-JDC-445/2017, Florencio Torres Romero refiere que tuvo conocimiento de la misma, el diez de junio del año en curso, a través de la página de Internet del aludido instituto político, mientras que la demanda del juicio ciudadano se presentó el inmediato doce de junio, es decir, dentro del plazo legalmente previsto para tal efecto, sin que exista algún elemento en autos que refute la afirmación del enjuiciante.

**Legitimación y personería**. Los actores están legitimados para promover los presentes juicios, en virtud de que reclaman actos y omisiones, que se relacionan con la elección de los integrantes de un órgano de dirección nacional del partido en el que militan los actores, lo cual aducen, viola sus derechos político electorales.

Asimismo, los juicios son promovidos en forma personal por los actores, razón por la cual se surte el segundo de los requisitos.

No pasa inadvertido que en el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-468/2017, la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del PT aduce como causa de improcedencia, la relativa a la falta de personería de Florencio Torres Romero, en razón de que exhibe una copia simple de su credencial de militante, la cual se encuentra ilegible y borrosa.

Al efecto, **se desestima** la causal de improcedencia formulada por la referida Comisión, toda vez que en el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-399/2017, aparece copia de la credencial de militante del PT a nombre de Florencio Torres Romero, de la cual se advierte el número de folio, la sección, clave de elector y la fecha de su membresía. Es decir, aparecen los datos relativos a la militancia del actor en el PT.

Además de que, la aludida Comisión responsable no refiere que el enjuiciante no aparezca en sus registros, o bien, que se encuentre afiliado a otro partido político, para efecto de demostrar que no es militante del PT.

**Definitividad**. Se satisface el requisito de mérito, porque no existe algún medio de impugnación por el cual resulte posible combatir la resolución que se reclama ante esta instancia, por lo que hace al juicio ciudadano SUP-JDC-369/2017.

Mientras que, en los diversos SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017, se encuentra debidamente justificado el *per saltum* invocado por Florencio Torres Romero, en términos de lo expuesto anteriormente.

**Interés jurídico**. Los actores tienen interés jurídico para promover los presentes juicios, ya que en el SUP-JDC-369/2017, el actor reclama, fundamentalmente, la resolución a un medio de impugnación, así como su notificación, en el que tuvo la calidad de recurrente, por lo que al haber sido él quien lo interpuso, tiene interés jurídico para impugnarlas, porque estima que son ilegales.

A su vez, en los juicios SUP-JDC-399/2017 y SUP-JDC-468/2017, reclama diversas omisiones que alega violan sus derechos político electorales, en tanto que, pretende participar como candidato a un cargo de dirección nacional, y tales omisiones le impiden hacerlo, razón por la cual cuenta con interés jurídico para impugnarlas.

Además de que, contrariamente a lo que aduce la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Florencio Torres Romero tiene interés jurídico para controvertir la falta de normas o reglas de paridad en la normativa partidaria para que las mujeres puedan participar en los órganos de dirección.

Asimismo, en oposición a lo sostenido por la citada Comisión y, por la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del PT, Florencio Torres Romero cuenta con interés jurídico para cuestionar actos que sucedieron con antelación a su afiliación al PT (dieciocho de mayo de dos mil diecisiete).

Lo anterior, pues se trata de un militante que, en términos del artículo 15, incisos a), de los Estatutos del PT tiene entre otros derechos el de postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como votar y ser votados y, exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido.

Esto es, el actor, en su calidad de militante se encuentra en aptitud de hacer valer que los actos y resoluciones de los órganos partidistas derivados de un procedimiento de selección interna, se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral, entre los cuales se encuentra el de paridad de género, sin que se advierta alguna disposición que le impida hacer valer la presunta exclusión de las mujeres en la integración de los órganos de dirección partidistas, así como que requiera de alguna temporalidad como militante para cuestionar actos previos a su afiliación, máxime que se encuentran relacionados con un proceso de renovación de órganos de dirección partidista a nivel nacional y, en el cual aspira a participar.

Mientras que, en el diverso SUP-JDC-445/2017, Florencio Torres Romero controvierte la Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT, sobre la base de que resulta ilegal y le impide el ejercicio de sus derechos de votar y ser votado en el proceso de renovación de los órganos directivos partidistas a nivel nacional.

**SÉPTIMO. Precisión de los actos y omisiones que se impugnan**. En el juicio **SUP-JDC-369/2017**, el actor impugna:

a) La resolución del recurso de queja intrapartidista identificado con la clave CNCGJYC/01/NAL/17, emitida por la Comisión el veintiocho de abril pasado.

b) La notificación de dicha resolución que le hizo el órgano partidista.

La notificación impugnada es del tres de mayo pasado; el actor aduce que es ilegal y expone los motivos con base en los cuales solicita se declare nula; afirma que se enteró de la resolución partidista el doce de mayo de dos mil diecisiete, cuando se le notificó la resolución del juicio ciudadano SUP-JDC-272/2017, por lo que promovió el presente medio de impugnación hasta el doce de dicho mes.

c) La omisión de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, de expedir la convocatoria “*para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT en fechas 14 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017, así como los acuerdos respectivos e inexistencia de los mismos*”.

En el juicio **SUP-JDC-399/2017**, el actor reclama la omisión:

a) De la Comisión Coordinadora Nacional, de expedir la convocatoria para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, del catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

b) De aprobar y publicar las listas de asistencia y los acuerdos de las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional, celebradas en esas fechas.

Ambas omisiones están relacionadas con la celebración del Congreso Nacional en que se elegirán a los órganos directivos del PT.

Respecto del diverso juicio ciudadano **SUP-JDC-445/2017**, Florencio Torres Romero controvierte:

La Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT.

En el juicio **SUP-JDC-468/2017**, el actor reclama la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del PT, de emitir la convocatoria para renovar a los órganos de dirección nacional del partido, en el Congreso que se realizará el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete.

Planteada así la controversia, en principio se analizará lo concerniente a la notificación reclamada en el SUP-JDC-369/2017, posteriormente se determinará lo concerniente a la resolución partidista y omisiones que se impugnan. A continuación, se abordará lo relativo a la Convocatoria del 10° Congreso Nacional Ordinario del PT, y a la supuesta omisión de emitir la convocatoria para renovar en dicho Congreso, órganos nacionales de dirección; y, por último, lo atinente a la presunta exclusión del principio de paridad de género en la normativa estatutaria.

En cuanto a la oportunidad para impugnar dicha notificación, cabe efectuar las siguientes consideraciones jurídicas.

Lo que se cuestiona en el presente asunto, no se relaciona con algún proceso electoral, por lo que, para el cómputo del plazo, sólo deben tomarse en cuenta los días hábiles, descontando sábados, domingos e inhábiles en términos de la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El actor afirma que se enteró de la notificación reclamada el doce de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, el plazo para impugnarla corrió del quince al dieciocho de ese mes, sin contar los días catorce y quince, por haber correspondido a sábado y domingo, respectivamente.

La demanda se presentó el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo que es oportuna su presentación.

No pasa desapercibido, que en el informe circunstanciado se aduce que debe desecharse la demanda, porque se presentó extemporáneamente, toda vez que la resolución partidista impugnada se le notificó al actor el tres de mayo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para impugnar corrió del cuatro al nueve de dicho mes, y la demanda se presentó hasta el dieciocho siguiente.

Es infundada la causa de improcedencia, toda vez que, si bien el actor reclama la resolución partidista, también cuestiona la validez de su notificación, por lo que ésta no puede tomarse en cuenta para hacer el cómputo del plazo para impugnar, pues de hacerlo se incurriría en el vicio lógico de petición de principio, porque precisamente el enjuiciante alega que, con dicha notificación, no conoció tal resolución partidista.

Por tanto, para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda, debe tomarse en cuenta el momento en el que el actor afirma que conoció la notificación de la resolución partidista, y de resultar oportuno el medio de impugnación, como sucede en el caso, estudiar la validez de dicha notificación y de ahí determinar lo conducente respecto de la oportunidad para impugnar la resolución partidista.

**OCTAVO. Estudio del fondo del asunto**.

**Análisis de lo concerniente a la notificación reclamada en el SUP-JDC-369/2017**.

**Síntesis de agravios hechos valer en contra de la notificación impugnada**.

El actor aduce que:

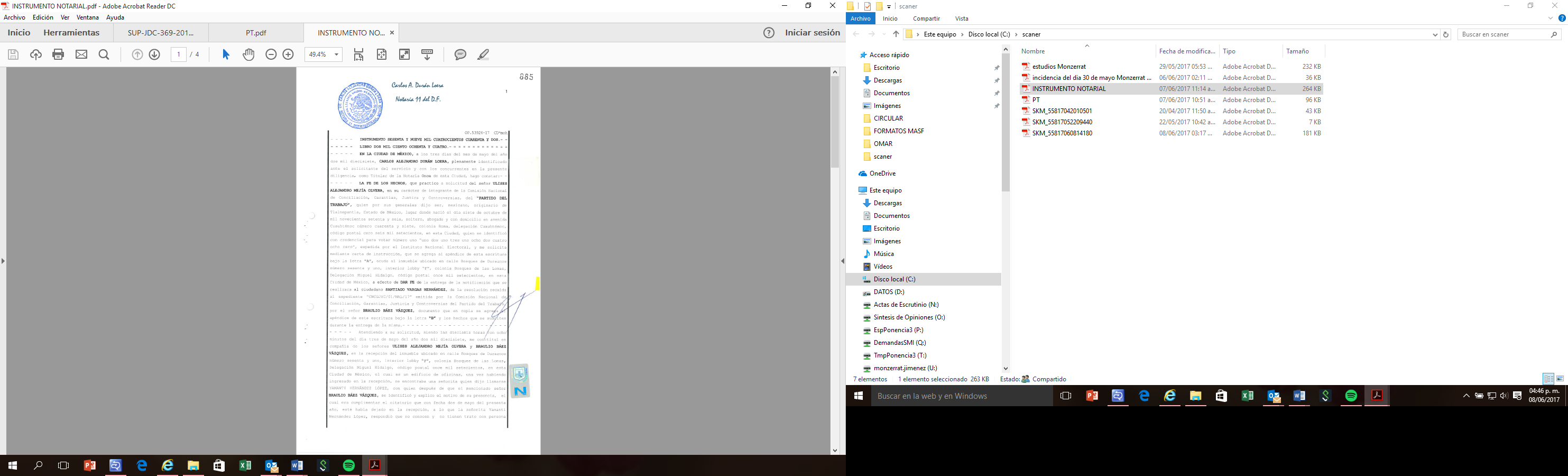
* Los Estatutos del PT establecen en forma genérica, que las resoluciones deberán ser notificadas a las partes en el domicilio que hayan manifestado en su escrito inicial, por lo que a falta de mayor regulación, debe aplicarse la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en el artículo 27, relativo a las notificaciones personales, prevé que en el supuesto de que la persona con la que se entiende la diligencia se niegue a recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará junto con copia de la resolución a notificar, en un lugar visible del local, asentará la razón correspondiente en autos y procederá a fijar la notificación en estrados.
* En el caso, la notificación que se le practicó incumple dichos requisitos, ya que de las constancias que la responsable allegó al juicio ciudadano SUP-JDC-198/2017, se advierte que la persona que atendió la diligencia, se negó a identificarse y a recibir la cédula de notificación, por lo que de conformidad con la normativa citada, la persona que practicó la notificación debió fijar la cédula de notificación, junto con copia de la resolución que se notificaba, en un lugar visible, lo que no sucedió.
* La notificación impugnada no se practicó con las formalidades de ley, máxime que nadie se identificó en el domicilio al que se acudió, como es que el notificador Braulio Báez Vázquez, consiguió otra credencial de elector diferente a la suya, lo que genera que la cédula de notificación carezca de certeza, toda vez que no se tiene conocimiento cierto si Braulio Báez Vázquez fue la persona con fe pública que realizó la notificación, o fue Ulises Alejandro Mejía Olvera quien la practicó.
* No se hace constar el número de fojas de la resolución que se notifica, pues si bien no es un elemento indispensable de una cédula de notificación, concatenado con las demás inconsistencias, genera más falta de certeza de la realización de la notificación.

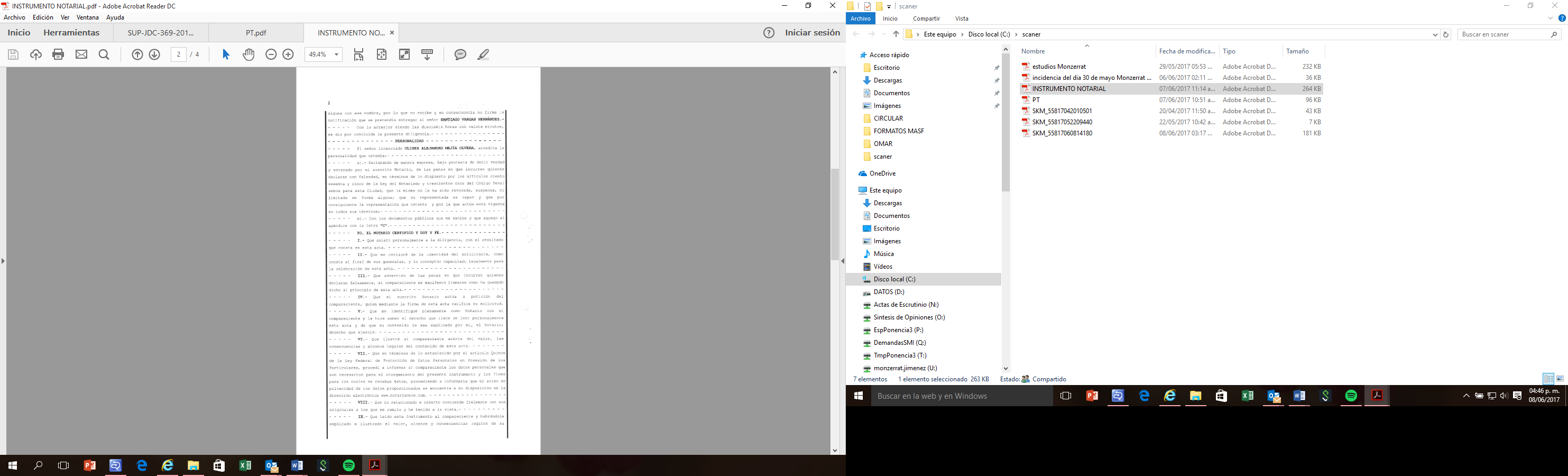
**Consideraciones de esta Sala Superior**. Son fundados los agravios en los que aduce que no se hace constar el número de fojas de la resolución que se notifica, lo que genera falta de certeza.

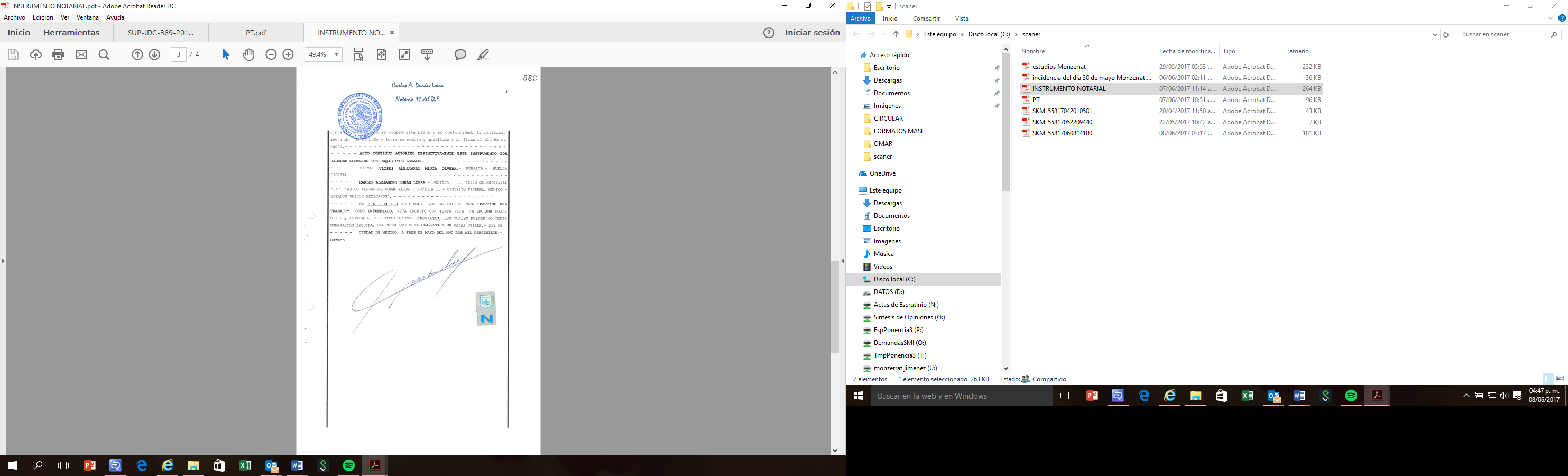
Al respecto, cabe mencionar que la cédula de notificación respectiva y el instrumento notarial sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos, que se allegaron a los autos del juicio ciudadano SUP-JDC-198/2017, que se encuentra en el archivo de este Tribunal, por lo que la información que se desprenda de sus constancias, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional.

Para mayor claridad, a continuación, se reproducirán las constancias que interesan en el justiciable.









De la cédula de notificación, se observa que no se precisa el número de páginas que integran la resolución que se notifica, lo cual es necesario que contenga, para tener certeza de que el acto se comunicó al justiciable de manera correcta, con la finalidad de garantizarle la posibilidad de conocer fehacientemente los razonamientos jurídicos que sustentan el acto que se le notifica y, por ende, que esté en aptitud de ejercer su derecho de acción.

Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis sustentada por este Tribunal, que dice:

*CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PÁGINAS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMUNICA.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 26 y 27, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que las cédulas de notificación de las resoluciones deben consignar, además de los requisitos legales exigidos, el dato correspondiente al número de páginas que integran la resolución y si cada una contiene información por el anverso y/o reverso, pues sólo de esa manera se tiene certeza que el acto se comunicó al justiciable de manera correcta. Lo anterior, con la finalidad de garantizar al enjuiciante la posibilidad de conocer fehacientemente los razonamientos jurídicos que sustentan los actos que se les notifican, para estar en aptitud de ejercer su derecho de acción.*

Pero además, ambos documentos hacen constar hechos diferentes, lo que no genera certeza de que efectivamente se hubiere realizado la notificación impugnada.

En efecto, en la cédula de notificación, el notificador hace constar, en lo conducente, que lo recibió una persona que dijo llamarse Yamanti Hernández López, pero que se negó a identificarse, y que recibía, a nombre de Santiago Vargas Hernández, el original de la resolución que se le notificaba, aunque no firmó de conformidad la cédula.

Por su parte, respecto del instrumento notarial, se advierte que el notario precisa que acudió al inmueble ubicado en la calle Bosques de Duraznos número sesenta y uno (61), interior lobby “F”, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El notario acudió a ese sitio a dar fe de la entrega de la notificación que se realizaría a Santiago Vargas Hernández, de la resolución que recayó en el expediente CNCGJYC/01/NAL/17, y hace constar, en lo conducente, que en el lugar se encontraba una señorita que dijo llamarse Yamanti Hernández López, con quien Braulio Báez Vázquez (quien es el notificador de acuerdo con la cédula de notificación), se identificó y explicó el motivo de su presencia, “*el cual era cumplimentar el citatorio que con fecha dos de mayo del presente año*”, había dejado en recepción, a lo que Yamanti Hernández López respondió que “*no conocen y no tienen trato con persona alguna con ese nombre, por lo que no recibe y en consecuencia no firma la notificación que se pretendía entregar*”.

De lo expuesto se advierte que ambos documentos hacen constar hechos diferentes, lo que no genera certeza de que efectivamente se hubiere realizado la notificación impugnada.

Por tanto, debe declararse la nulidad de la citada notificación.

Al resultar fundados lo anteriores agravios y suficientes para anular la notificación impugnada, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad relacionados con dicha notificación.

En consecuencia, debe tenerse como fecha del conocimiento de la resolución partidista combatida en el SUP-JDC-369/2017, la que señala el actor, esto es, el doce de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, el plazo para impugnarla corrió del quince al dieciocho de ese mes, sin contar los días catorce y quince, por haber correspondido a sábado y domingo, respectivamente.

La demanda se presentó el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo que es oportuna su presentación.

**Estudio de fondo, respecto de la resolución partidista y omisiones reclamadas, así como del supuesto incumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior en el SUP-JDC-2638/2008**.

**Cuestión preliminar. Justificación del estudio conjunto de la resolución partidista y omisión reclamada, así como del supuesto incumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior en el SUP-JDC-2638/2008**.

En el SUP-JDC-369/2017 se reclama la resolución que decidió el medio de impugnación intrapartidista registrado con la clave CNCGJYC/01/NAL/17, así como la omisión de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, de expedir la convocatoria “*para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT en fechas 14 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017, así como los acuerdos respectivos e inexistencia de los mismos*”.

Ambas cuestiones se analizarán en forma conjunta, por la estrecha relación que guardan entre sí.

En efecto, el actor, en su demanda primigenia, reclamó, entre otras cosas, la omisión de aprobar, emitir y publicar la convocatoria para celebrar el congreso nacional ordinario, en el que se debe renovar los órganos directivos del partido.

Los agravios atinentes se desestimaron por el órgano responsable, en razón de que la Comisión Ejecutiva Nacional prorrogó por cuatro meses la celebración de dicho Congreso, mismo que tendrá lugar el próximo veinticuatro de junio, lo cual acordó en sesiones que tuvieron lugar en esas fechas, mismas que, según el actor, se omitió emitir la convocatoria respectiva.

En consecuencia, lo que se decida respecto de tal omisión, podría incidir en lo que se considere en torno a la resolución controvertida, de ahí que sea necesario estudiarlas en conjunto, habida cuenta que, el juicio SUP-JDC-399/2017 se reclaman las mismas omisiones.

No pasa desapercibido que en ambos juicios se alude a un supuesto incumplimiento de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, en el SUP-JDC-2638/2008, sin embargo, tal supuesto incumplimiento, también está estrechamente vinculado con la resolución partidista reclamada y con la convocatoria al Congreso Nacional, por lo que también los agravios atinentes se estudiarán en forma conjunta, sin escindirlos a incidente de incumplimiento de sentencia.

Así es, en su demanda primigenia, el actor aludió a la sentencia dictada por esta Sala Superior, el veintisiete de enero de dos mil diez, en el citado juicio ciudadano, para después, refiriéndose a las incompatibilidades entre los cargos partidistas y los de elección popular, así como a la reelección, afirmó que las adecuaciones estatutarias (refiriéndose a las ordenadas por este Tribunal), tocante a las incompatibilidades “*no sucedieron*”, y respecto a la reelección, aseguró que “*donde no se establecieron límites fue en relación con los cargos legislativos. Y ahí también existe conflicto de intereses, porque, dado que la reelección es posible, y sólo puede darse si el partido al cual pertenece el representante popular que aspira a ser reelecto le otorga la candidatura, es inconcuso que no pueden ser miembros de la dirigencia quienes sean también representantes populares, porque existiría conflicto de interés*”.

La responsable consideró que el impugnante aludía a un presunto incumplimiento a la ejecutoria dictada en el citado juicio ciudadano, así lo estudió en la resolución reclamada, desestimando la inconformidad relativa.

En consecuencia, la inconformidad que ahora alega el accionante, es menester que se analice en el presente juicio, sin que se escinda a incidente de incumplimiento de sentencia, habida cuenta que, se insiste, tal inconformidad en la especie está más bien relacionada con la convocatoria al Congreso Nacional.

**Antecedentes que interesan en el justiciable en el SUP-JDC-369/2017**.

**a) Demanda**. El treinta y uno de marzo pasado, Santiago Vargas Hernández (actor en el SUP-JDC-369/2017), promovió juicio ciudadano, el cual fue registrado con la clave SUP-JDC-198/2017.

En su demanda, el impugnante reclamó, fundamentalmente:

I. La falta de renovación de los citados órganos directivos.

Afirmó que el diecinueve de febrero de dos mil once, se celebró el Congreso Nacional Ordinario, en el que se renovaron todos los órganos directivos del PT, por lo que al tomar en cuenta que tales órganos se deben renovar cada seis años, a más tardar el diecinueve de febrero del año en curso, se deberían elegir a los nuevos integrantes de dichos órganos, sin que ello haya sucedido.

II. Ad cautelam, pidió que se tuviera en cuenta la imposibilidad estatutaria de diversas personas que el actor precisó, para volver a postularse y ser elegidos como dirigentes partidistas.

El actor aludió a la sentencia dictada por esta Sala Superior, el veintisiete de enero de dos mil diez, en el citado juicio ciudadano SUP-JDC-2638/2008, y a las incompatibilidades entre los cargos partidistas y los de elección popular, así como a la reelección; afirmó que era probable que durante la sustanciación del juicio, “*la dirigencia omisa*” realizara actos encaminados a elegir nueva dirigencia.

En ese supuesto, “*ad cautelam, para el caso de que esa H. autoridad llegare a validar tales actos, es importante que se tenga en cuenta que los siguientes militantes están impedidos para volver a postularse y ser elegidos, puesto que se han perpetuado en la dirigencia …*

*1. Alberto Anaya Gutiérrez.*

*2. Ricardo Cantú Garza.*

*3. Alejandro González Yáñez.*

*4. Rubén Aguilar Jiménez*”.

Además, el impugnante manifestó que el Tribunal debería tomar en cuenta, que por así establecerlo los estatutos, no podría ser reelectos quienes practiquen el nepotismo, entre quienes se encontraban Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Oscar González Yáñez y Alejandro González Yánez, ya que entre los dos primeros existía una relación conyugal, y los últimos eran hermanos, por lo que no podían ser reelectos.

El accionante solicitó que se conociera *per saltum* su impugnación.

**b) reencauzamiento**. Este Tribunal determinó que el juicio era improcedente y ordenó reencauzarlo a recurso de queja, competencia de la Comisión, en donde se registró con la clave CNCGJYC/01/NAL/17.

**c) Resolución del medio de impugnación intrapartidista**. El órgano partidista declaró infundado el recurso de queja, desestimando los motivos de inconformidad del actor, al considerar, esencialmente, lo siguiente:

► Tocante a la omisión de emitir convocatoria para la celebración del Congreso Nacional Ordinario en que se renovara la dirigencia partidista, el agravio era infundado, en virtud de que la Comisión Ejecutiva Nacional determinó prorrogar la realización del Congreso Nacional Ordinario.

Para arribar a tal conclusión, el órgano partidista responsable tuvo en cuenta que obraba en autos:

▪ Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, de la que se advertía que dicha Comisión, de conformidad con el artículo 39, inciso c), de los Estatutos, aprobó prorrogar por cuatro meses la realización del Congreso Nacional Ordinario.

Los motivos que se tuvieron en cuenta para prorrogar la celebración del Congreso, fueron:

- La celebración de cuatro procesos electorales locales, lo que ameritaba dar prioridad a la realización de actos preparatorios internos, para estar en aptitud de hacer frente a dichos procesos.

- La realización de una campaña nacional de afiliación, a efecto de cumplir con la obligación del partido, de acreditar el número de afiliados previsto legalmente, para mantener su registro, máxime que se “*había atravesado por la compleja dinámica de pérdida del registro*”.

▪ El original del oficio REP-PT-INE-PVG-049/2017, a través del cual, el representante del PT ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se prorrogó la celebración del Congreso Nacional Ordinario en el que se renovarían los órganos directivos del partido, en términos del artículo 39, inciso c), de los Estatutos.

► Respecto la vulneración a su derecho de votar y ser votado alegado por el actor, el órgano responsable estimó que tal derecho lo podría ejercitar cuando se lleve a cabo el Congreso Nacional, que será el próximo veinticuatro de junio, de conformidad a lo acordado por la Comisión Ejecutiva Nacional el pasado veintidós de febrero, habida cuenta que, la convocatoria puede ser publicada a más tardar diez días antes de que se lleve a cabo el congreso, por lo que al no haber fenecido el plazo para emitirla, el actor no puede alegar vulneración a su derecho a ser votado.

► En relación con el incumplimiento a la sentencia emitida en el juicio ciudadano SUP-JDC- 2638/2008 y acumulados, los agravios son extemporáneos, en virtud de que el PT acató el diecinueve de febrero de dos mil once, lo ordenado en esa ejecutoria, ya que en esa fecha realizó el Octavo Congreso Nacional Ordinario, en el cual realizó las adecuaciones estatutarias ordenadas por la Sala Superior, mismas que fueron declaradas legales y constitucionales, en el Acuerdo CG171/2011, emitido por el entonces Instituto Federal Electoral.

► En cuanto a la imposibilidad de reelegirse de diversas personas integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, el órgano responsable desestimó el agravio, en virtud de que el Congreso Nacional tendrá lugar en fecha posterior, por lo que, al tratarse de un acontecimiento futuro, por lo que no puede prejuzgarse “respecto a su contenido”, ni pueden alegarse derechos adquiridos.

Asimismo, ninguno de los militantes que indica el actor, puede ser privado de sus derechos de votar y ser votado, sino mediante juicio en el que se les garantice su derecho de audiencia.

► Respecto a “*la declaratoria de impedimento de reelección*”, en relación a las personas que en concepto del actor se actualiza “*la causal de nepotismo*”, es infundado en razón de que tales personas fueron nombradas por el Congreso Nacional, que se integra por más de doscientos militantes, no por un familiar.

Asimismo, el actor parte de la falsa premisa de que los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional a quienes acusa por tener un parentesco, nombraron de manera directa a su familiar en el cargo de dirección partidista, lo cual es incorrecto, pues las personas que indica el actor, son militantes fundadores del partido, “cuya militancia se realizó de manera simultánea”, y como militantes en lo individual, tienen a salvo sus derechos político electorales, los cuales no pueden limitarse por un parentesco.

**Agravios**. Se hacen valer motivos de inconformidad que se relacionan con los temas siguientes:

• Invalidez de las sesiones de la Comisión Coordinadora Nacional de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

• Facultad de la Comisión Ejecutiva Nacional, de prorrogar o anticipar hasta por cuatro meses la realización del Congreso Nacional Ordinario, prevista por el artículo 39, inciso c), de los Estatutos del PT.

• Reelección e incumplimiento de los “fines” de la sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-2638/2008.

• Nepotismo y reelección en el PT.

• Los Estatutos del PT, no prevén requisitos mínimos que garanticen paridad de género en sus órganos directivos.

• La realización del Décimo Congreso Nacional Ordinario.

**Síntesis y estudio de los agravios hechos valer**. El estudio de los motivos de inconformidad, se hará conforme a los temas con los que se relacionan.

• **Agravios relacionados con la invalidez de las sesiones de la Comisión Coordinadora Nacional de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete**.

Tocante a esta temática, se solicita que sean requeridas al PT, la convocatoria, las listas y las actas de dichas Asambleas.

Resulta improcedente la petición, en virtud de que dichos documentos se acompañaron en copia certificada al informe circunstanciado, por lo que obran en autos; además, también obran en el expediente del juicio ciudadano SUP-JDC-198/2017, pues se allegaron, junto con la resolución dictada en el procedimiento intrapartidista, para informar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en dicho expediente, el cual, por cierto, el actor en el juicio SUP-JDC-369/2017, reconoce que revisó cuando se le notificó la resolución recaída en el diverso juicio SUP-JDC-272/2017, y que incluso entonces conoció la sentencia partidista que ahora combate.

Precisado lo anterior, se advierte que se alega, en resumen, que las aludidas sesiones de la Comisión Coordinadora Nacional, son contrarias a la normativa estatutaria y debe declararse de nulidad, en virtud de que no existe prueba de:

— La convocatoria de la Comisión Coordinadora Nacional, emitida con tres días de anticipación a la celebración de dichas sesiones.

— Actas y listas de asistencia relativas a tales sesiones.

— Difusión de los acuerdos a la militancia.

— No se cuenta con la notificación de las convocatorias a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, por alguno de los medios previstos en los Estatutos.

También se alega que se le impidió a los actores y a la militancia, así como a quienes simpatizan por el partido, tener conocimiento de tales convocatorias, y de los acuerdos tomados en las asambleas.

Ante tales irregularidades, se asegura que es ilegal el oficio REP-PT-INE-PVG-049/2017, a través del cual, el representante del PT ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se prorrogó la celebración del Congreso Nacional Ordinario en el que se renovarían los órganos directivos del partido.

**Consideraciones de esta Sala Superior**.

Son infundados los agravios, porque es inexacto que las citadas asambleas adolezcan de las irregularidades que se alegan.

En efecto, tocante a la sesión del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en autos del SUP-JDC-369/2017, se encuentran copias certificadas de:

- La convocatoria a dicha sesión, emitida el ocho del mismo mes y año (foja 175).

- Cinco acuses de recibo de dicha convocatoria (fojas 176-180), así como la impresión de un correo electrónico dirigido a una persona, en el que se dice que se convoca a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisionados Políticos Nacionales, a la citada sesión (foja 181).

- Listas de asistencia a la sesión del catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 184-201).

- Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 202-210).

Respecto a la sesión del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en autos se encuentran copias certificadas de:

- La convocatoria a dicha sesión, emitida el dieciséis del mismo mes y año (foja 227).

- Cinco acuses de recibo de dicha convocatoria (fojas 228-232), así como la impresión de un correo electrónico dirigido a una persona, en el que se dice que se convoca a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisionados Políticos Nacionales, a la citada sesión (foja 233).

- Listas de asistencia a la sesión del veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 235-252).

- Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 202-210).

Dichas pruebas ponen de relieve que opuestamente a lo alegado, la Comisión Coordinadora Nacional emitió convocatoria a dichas sesiones, con cuando menos tres días de anticipación, en tanto que, la convocatoria a la sesión del catorce de diciembre del año pasado, se emitió el ocho de ese mismo mes, mientras que la relativa a la sesión del veintidós de febrero del año en curso, se expidió el dieciséis de ese mes.

También demuestran la notificación de las convocatorias a algunos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional; y si bien no existe la prueba de la notificación a todos los miembros de dicha Comisión, ello no implica que se hubiera omitido notificarles, dado que asistieron ochenta y cuatro personas a ambas asambleas[[3]](#footnote-3), lo que implica que se enteraron de su celebración.

Igualmente, ponen de relieve que se levantó acta con motivo de la celebración de dichas sesiones, y que se tomó asistencia a quienes acudieron a las mismas.

Por otra parte, no hay prueba de que se le haya notificado a los actores y a las demás personas que militan o simpatizan con el partido, las convocatorias y los acuerdos tomados en las sesiones; sin embargo, ello no les causa perjuicio, en virtud de que no se advierte alguna norma que disponga la obligación de notificar las convocatorias, las listas de asistencia y los acuerdos tomados en las sesiones, a toda la militancia del partido, en tanto que, el artículo 37 Bis de los Estatutos[[4]](#footnote-4), lo que ordena que notifique de las reuniones, a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, sin que los impugnantes aleguen, menos demuestren, que son integrantes de dicha Comisión.

En consecuencia, al no actualizarse las irregularidades que se alegan respecto de las referidas asambleas, no es posible que se declaren ilegales y, por ende, tampoco el oficio mediante el cual el representante del PT ante la autoridad electoral administrativa, informó a ésta, que se prorrogó la celebración del Congreso Nacional Ordinario en el que se renovarían los órganos directivos del partido.

• **Agravios relacionados con la facultad de la Comisión Ejecutiva Nacional, de prorrogar o anticipar hasta por cuatro meses la realización del Congreso Nacional Ordinario, prevista por el artículo 39, inciso c), de los Estatutos del PT[[5]](#footnote-5)**.

**Consideraciones de esta Sala Superior**.

Son ineficaces los agravios, en virtud de que aun si le asistiera la razón al actor del SUP-JDC-369/2017, no podría alcanzar su pretensión, de que el Congreso Nacional Ordinario se celebre el veinticuatro de junio próximo.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente que el actor en el SUP-JDC-360/2017, respecto de su pretensión, manifestó lo siguiente: “*Pretensión última. La revocación del acto reclamado y declaración de indebida notificación del acto reclamado, así como la remoción de todos los obstáculos y omisiones a efecto de salvaguardar nuestro derecho de votar y ser votados en la renovación de los órganos de dirección del PT, para lo cual se deberá expedir y difundir la convocatoria respectiva a través de los medios idóneos a fin de que se realice el 24 de junio del presente año el Congreso Nacional Ordinario del PT*”.

De lo reproducido se desprende que la pretensión del inconforme es que se lleve a cabo el Congreso Nacional Ordinario del PT, el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete.

En esta tesitura, si la pretensión del actor en el SUP-JDC-369/2017, es que el Congreso Nacional Ordinario se celebre el veinticuatro de junio próximo, actualmente no le causa algún agravio el que se haya determinado la prórroga, porque finalmente ya se determinó que en esa fecha se celebrará el referido Congreso, así que aun si le asistiera la razón al actor, en cuanto a que incorrectamente la Comisión Ejecutiva Nacional, por las razones que expuso, haya prorrogado la celebración el Congreso Nacional Ordinario, ello en nada influiría en alcanzar su pretensión, de que dicho Congreso se celebre el veinticuatro de junio próximo.

En última instancia, están dirigidos a evidenciar la falta de justificación en la decisión de que se prorrogara la fecha prevista para la renovación de los órganos directivos del partido.

Siendo así, a ningún fin práctico conduce el análisis de tales planteamientos, porque de asistirle la razón, lo conducente sería revocar dicha determinación y ordenar que, a la brevedad, se llevara a cabo el proceso de renovación, lo cual ya está acordado.

Como ha sido indicado, el Congreso Nacional Ordinario del PT se celebrará el próximo veinticuatro de junio, por lo que a ningún fin práctico conduciría analizar si su celebración fue retrasada con justificación o, por el contrario, carecía de sustento estatutario.

Cualquier análisis al respecto seria inconducente, pues la pretensión esencial del actor es, precisamente, que cuanto antes se lleve a cabo la renovación de los órganos directivos del partido, y eso acontecerá el próximo veinticuatro de junio.

• **Agravios relacionados con la reelección e incumplimiento de los “fines” de la sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-2638/2008, así como con el nepotismo y reelección en el PT**.

Los agravios relacionados con dicha temática son inoperantes, en virtud de que parten de la base de que la convocatoria al referido Congreso no se había emitido, y la pretensión es que este Tribunal ordene al órgano partidista competente que al emitirla, prevea determinadas cuestiones.

Sin embargo, tal convocatoria ya se emitió y en el apartado correspondiente esta Sala Superior determinará lo conducente respecto de la referida convocatoria, lo que torna inoperantes los agravios de que se trata.

**• Agravios relacionados con el Décimo Congreso Nacional Ordinario (SUP-JDC-445/2017)**.

Se alega que:

• Es indebida la publicidad de la Convocatoria, porque de conformidad con el artículo 26, párrafo 5, de los Estatutos del PT, tiene que publicarse en un periódico de circulación nacional, al menos quince días antes del día del Congreso, por lo que si éste tendrá lugar el veinticuatro de junio del año en curso, la convocatoria tuvo que haberse publicado a más tardar el nueve de dicho mes, sin que hasta la fecha se hubiera hecho, habida cuenta que, la norma estatutaria no prevé que tuviera que publicarse en la página de internet del partido, además de que no se difundió en forma amplia en todas las instancias estatales, “*por lo que nos deja en estado de indefensión*”.

• La Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del PT, ha omitido expedir la convocatoria para renovar los órganos de dirección nacional del partido, en el Congreso Nacional Ordinario que se celebrará el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete.

**Consideraciones de esta Sala Superior**.

Contrario a lo que se alega, la convocatoria al Décimo Congreso Nacional sí fue publicada en un periódico de circulación nacional, al menos quince días antes de la fecha del Décimo Congreso Nacional, ya que se publicó el siete de junio de dos mil diecisiete, en el Sol de México.

En efecto, al rendirse el informe circunstanciado, se acompañó un ejemplar del periódico El Sol de México, de siete de junio del año en curso (es decir, dos días antes de la fecha límite para publicarla), observándose publicada la referida convocatoria, en la página “11 A”, de la sección “Nacional”, lo que demuestra que es inexacto que la misma no se hubiera publicado en un periódico de circulación nacional.

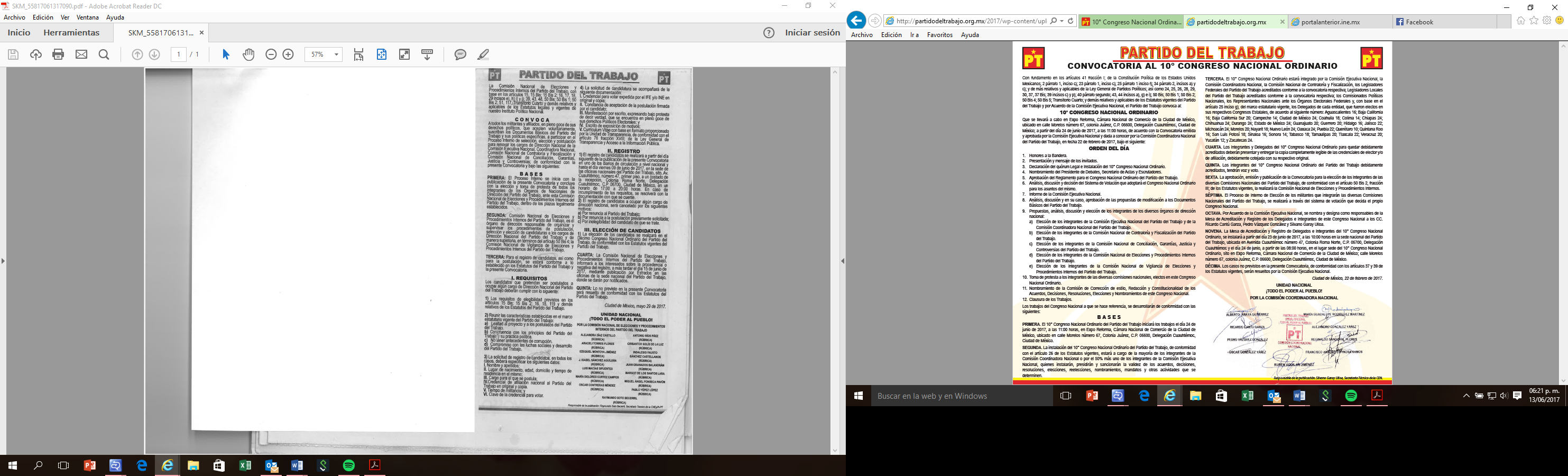
Por otro lado, el actor deja de explicar por qué le deja en estado de indefensión el que, en su caso, la convocatoria no se hubiera difundido en todas las instancias estatales, más aún que particularmente él sí la conoce, lo que se desprende de su demanda, en la que insertó dicha convocatoria; así, tal omisión torna inoperantes el agravio de que se trata.

Asimismo, se alega que la convocatoria debería tener como mínimo requisitos de elegibilidad, tanto negativos como positivos, para que la militancia tenga certeza de quienes cumplen con los mismos, a fin de formar parte de la nueva integración de la Comisión Coordinadora Nacional, lo que no contiene la Convocatoria al Congreso Nacional, por lo que debe tenerse en cuenta que Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, se encuentran impedidos para volver a postularse y ser elegidos, lo que recae de la ejecutoria dictada por este Tribunal, al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-2638/2008 y sus acumulados, en consecuencia, al haber estimado la Sala Superior “*que los militantes Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, están impedidos para volver a postularse y ser elegidos como miembros de la Comisión Coordinadora Nacional, en virtud de que se han perpetuado en la dirigencia y se han reelegido una y otra vez, se deberá ordenar a la autoridad responsable emita a la brevedad, y cuidando que no se vulneren los derechos de índole electoral y asociación del universo de militantes del partido, la convocatoria respectiva con los requisitos mínimos de elegibilidad*”.

**Consideraciones de esta Sala Superior**.

Son infundado los agravios, porque no es verdad que exista la omisión que se alega.

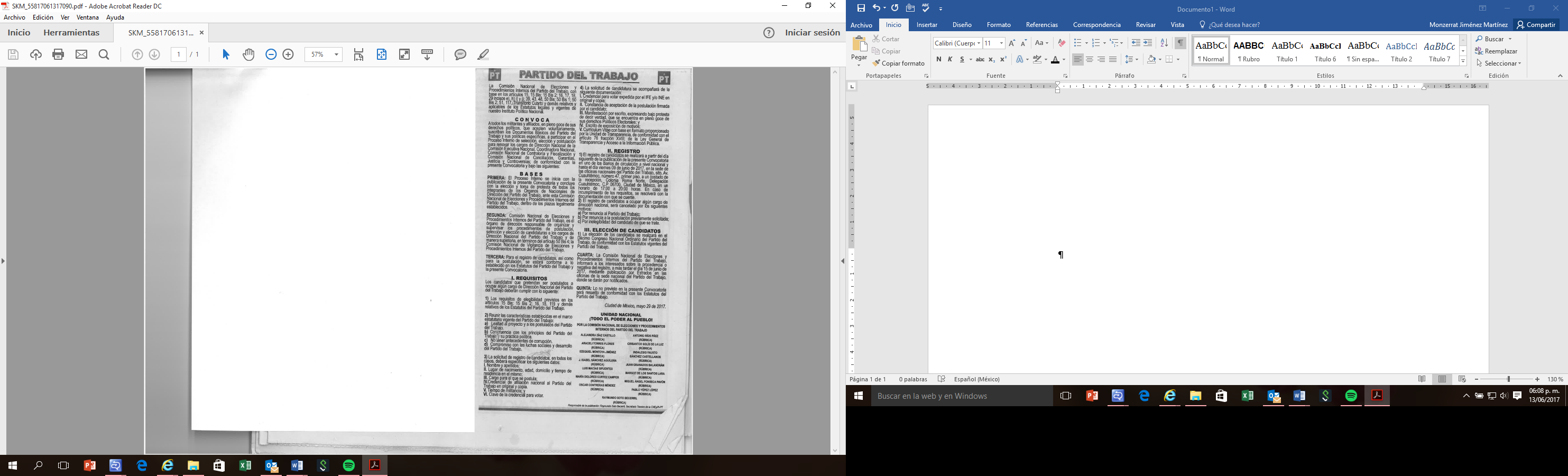
Para mayor claridad, a continuación se reproducirá la convocatoria al citado Congreso Nacional.



De lo reproducido se desprende que en dicho Congreso tendrán lugar diversas actividades, entre ellas, la elección de las personas que integrarán diversos órganos nacionales del partido.

Para tal elección, opuestamente a lo que se arguye, la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos emitió otra convocatoria que fue publicada previamente, esto es, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el periódico El Sol de México, lo que se acredita con un ejemplar de mismo que se acompañó al informe circunstanciado.

Enseguida se reproducirá dicha convocatoria.



De lo reproducido se desprende que dicha convocatoria establece que las personas interesadas en ser postuladas a algún cargo de dirección nacional, deberán reunir los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 15 Bis, 15 Bis 1, 15 Bis 2, 16, 18 y 119 de los Estatutos.

Así el artículo 15 Bis estatuye que serán elegibles para ocupar los distintos cargos de dirección y demás órganos del partido, las personas que, entre otras cosas, sean mayores de edad, militen o estén afiliadas al PT, no tengan antecedentes de corrupción, y estén comprometidos con las luchas sociales y con el desarrollo del partido.

Por su parte, el artículo 15 Bis 1, determina que no podrán ser reelectas, aquellas personas que, entre otras cosas, hayan realizado actos de corrupción, incumplan los acuerdos tomados en los distintos cargos de dirección y demás órganos del partido, practiquen una línea teórico-ideológica y una línea política diferente a la aprobada por el PT, no presenten, teniendo obligación de hacerlo, la declaración patrimonial, practiquen el nepotismo, hagan uso inadecuado del patrimonio del partido, entre otros.

En este orden de ideas, si la convocatoria establece que quien tenga interés en ocupar un cargo de dirección partido deberá reunir los requisitos previstos en dichos preceptos estatutarios, los cuales prevén los requisitos de elegibilidad (positivos y negativos), es claro que los está determinando.

Asimismo, una convocatoria no particulariza, es decir, no indica los nombres de las personas que son inelegibles, únicamente establece las bases para participar en la contienda, y con base en ello, en su oportunidad, el órgano decisor determina quienes son o no elegibles, por lo que no es posible que dicha convocatoria determinara de antemano las personas que son inelegibles.

Aunado a lo anterior, es importante precisar que, en oposición, a lo aducido por Florencio Torres Romero, la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos se instaló el doce de mayo de dos mil diecisiete, en términos de la copia certificada del Acta de Instalación respectiva y de la cual se advierte que se instaló y nombró tanto un consejo directivo, un coordinador y un secretario técnico.

Esto es, la instalación de la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos se hizo en términos del artículo 50 Bis 1, párrafo séptimo, de los Estatutos, en el cual se prevé que aquella se instalará una vez que la Comisión Ejecutiva haya acordado convocar al Congreso para renovar, elegir, reelegir o sustituir parcial o totalmente a los órganos nacionales del Partido, lo cual ocurrió el veintidós de febrero del año en curso.

Además, es inexacto que en la ejecutoria que dictó este Tribunal, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-2638/2008, se haya determinado que los ciudadanos a que se refiere el actor, se encuentra impedidos para postularse y ser elegidos.

En efecto, en dicha sentencia, en los conducente, se estableció que:

***OCTAVO. Efectos de la sentencia***

*Al resultar sustancialmente fundados los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de los Estatutos del PT en los aspectos materia del presente juicio, y toda vez que dichos estatutos dieron sustento normativo tanto al Séptimo Congreso Nacional Ordinario del referido partido político, realizado el veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como a los acuerdos y resolutivos tomados en el mismo, incluidas la elección de dirigentes nacionales y las modificaciones a sus documentos básicos, esta Sala Superior estima procedente decretar su revocación.*

*No es óbice a lo anterior que el veintinueve de septiembre de dos mil ocho se hubiese emitido el Acuerdo CG409/2008 relativo a la “RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL PT” (publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de ese mismo año), pues tal y como se argumentó al justificar la procedencia del presente medio de impugnación, las cuestiones sobre constitucionalidad de estatutos aquí abordadas no pudieron ser objeto de estudio y resolución por parte de la citada autoridad administrativa electoral, quien únicamente se limitó a analizar los acuerdos y resolutivos adoptados en el multicitado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del PT.*

*Ante ello, si los acuerdos y resolutivos partidarios aprobados por la autoridad administrativa electoral se encontraban viciados por derivar de la aplicación de estatutos inconstitucionales (tal y como se acreditó en el considerando séptimo de esta sentencia), es inconcuso que, como consecuencia de la presente ejecutoria, tanto la resolución emitida por dicha autoridad como los acuerdos y resolutivos del PT que fueron materia de tal proveído queden sin efectos.*

*Al respecto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá tomar las medidas que estime pertinentes y realizar los avisos necesarios a que en derecho hubiere lugar.*

*Asimismo, en virtud de que durante el año dos mil diez tendrán verificativo más de diez elecciones constitucionales locales en las que se renovarán, según cada caso, gobernador, diputados estatales e integrantes de ayuntamientos, y con el fin de preservar los principios de igualdad en la contienda, certeza y seguridad jurídica, esta Sala Superior determina que los plazos para la realización de los actos que se ordenan a continuación (ajustes normativos y elección de nuevos dirigentes nacionales por parte del PT), empezarán a computarse a partir del quince de julio de dos mil diez, fecha en que se habrá celebrado la casi totalidad de las aludidas jornadas electorales estatales.*

*Como consecuencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional federal determina que el citado partido político, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del quince de julio de dos mil diez, deberá modificar sus estatutos para que sean acordes con los puntos señalados en esta ejecutoria y, hecho lo anterior, los presente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para su aprobación.*

*Sobre el particular, dicho Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá dictar la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 38, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

*Para la realización de todos los actos tendentes a concretar la modificación estatutaria ordenada, el PT deberá aplicar los estatutos vigentes hasta antes del Séptimo Congreso Nacional Ordinario.*

*Asimismo, a efecto de subsanar las insuficiencias normativas objeto de estudio, los aspectos que el PT debe modificar en sus estatutos, en los términos que estime pertinentes conforme a su libertad de decisión política y derecho a la autoorganización, son los siguientes:*

*1) Establecer el o los mecanismos y procedimientos que considere pertinentes para llevar a cabo la elección de sus dirigentes en todos sus niveles, cuidando garantizar, tanto en el ejercicio del voto activo como pasivo de los militantes, la igualdad, certeza, imparcialidad y renovación efectiva de los integrantes de dichos órganos de dirección;*

*2) Prever un órgano independiente e imparcial, encargado de conducir los indicados procesos internos de elección de dirigentes;*

*3) Regular la reelección, evitando incurrir en prácticas de ejercicio indefinido o vitalicio en los cargos de dirección;*

*4) Prever casos de incompatibilidad;*

*5) Toda vez que se ha considerado inconstitucional, suprimir el voto por aclamación previsto en el artículo 29, inciso f), de los estatutos de mérito, y, en caso de establecer el voto indirecto y abierto, prever las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar el valor de la libertad en la emisión del sufragio;*

*6) Establecer órganos de impartición de justicia distintos a las instancias de dirección, de índole jurisdiccional y no política y, sobre todo, que garanticen suficientemente su autonomía, independencia e imparcialidad;*

*7) Regular los medios de defensa intrapartidarios en forma expresa, clara y precisa, estableciendo, respecto de cada uno de ellos, verbigracia: procedencia; requisitos de demanda; condiciones de procedibilidad; órganos competentes; reglas de tramitación; sustanciación; plazos; notificaciones y condiciones de emisión de resoluciones y sus efectos;*

*8) Establecer procedimientos claros y breves para la imposición de sanciones en que se respete el derecho de defensa y de aportar pruebas, de los supuestos infractores, y*

*9) Establecer causales expresas para la imposición de sanciones.*

*Hecho lo anterior, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a que quede firme la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral en que autorice, en su caso, las modificaciones ordenadas, el PT deberá elegir, con base en los estatutos aprobados, a los integrantes de sus órganos de dirección nacional.*

*Sobre el particular, se revoca el registro vigente de los integrantes de los órganos de dirección nacional del PT.*

*Al efecto, tales órganos quedarán integrados conforme lo estaban (con las mismas personas) antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta que el Instituto Federal Electoral registre a los nuevos dirigentes electos sobre la base de los estatutos modificados y aprobados por el Consejo General de dicho Instituto, lo que deberá ocurrir, a más tardar, al finalizar el indicado plazo de noventa días naturales.*

*Esto es, observando los plazos antes indicados:*

*i) Respecto al marco normativo, el PT deberá regir sus actos conforme a los documentos básicos (estatutos) vigentes antes del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta en tanto sean aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y queden firmes, las modificaciones estatutarias aquí ordenadas, y*

*ii) En relación con los órganos de dirección nacional, deben quedar integrados conforme lo estaban antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, permaneciendo así hasta en tanto sean registrados por la mencionada autoridad administrativa electoral federal los nuevos dirigentes electos conforme a las modificaciones estatutarias ordenadas y, en su caso, aprobadas y firmes, por parte del Instituto Electoral Federal.*

*La Comisión Coordinadora Nacional del PT y el Consejo General del Instituto Federal Electoral quedan vinculados a la presente ejecutoria y deberán informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la misma, en la medida en que se realicen los actos previstos en los párrafos precedentes.*

*Por lo expuesto y fundado se*

*R E S U E L V E*

*PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008 al expediente SUP-JDC-2638/2008. Al efecto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el expediente del juicio acumulado.*

*SEGUNDO. Unica y exclusivamente por lo que hace a Carolina Araceli Sánchez Esparza, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2639/2008.*

*TERCERO. Se revocan, tanto el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del PT celebrado el veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho en la Ciudad de México, Distrito Federal, como todos y cada uno de los actos relacionados, incluidos la convocatoria, los acuerdos y resolutivos adoptados en el mismo.*

*CUARTO. En términos de lo señalado en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia, en las partes materia de análisis, se declaran inconstitucionales los Estatutos del PT.*

*QUINTO. Se ordena al PT que, conforme a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria y en plena observancia a su libertad de decisión política y derecho a la autoorganización, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del quince de julio de dos mil diez, modifique sus estatutos, y, hecho lo anterior, los presente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para su aprobación.*

*Dicho Consejo General deberá dictar la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 38, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

*SEXTO. Una vez que el Consejo General del Instituto Federal Electoral apruebe las modificaciones ordenadas, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a que quede firme dicha resolución y con base en los estatutos aprobados, el PT deberá elegir a los integrantes de sus órganos de dirección nacional.*

*SEPTIMO. Se revoca el registro vigente de los integrantes de los órganos de dirección nacional del PT, al efecto, tales órganos quedarán integrados conforme lo estaban antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta que el Instituto Federal Electoral registre a los nuevos dirigentes electos sobre la base de los estatutos modificados y aprobados por el Consejo General de dicho Instituto, lo que deberá ocurrir, a más tardar, al finalizar el plazo indicado en el resolutivo anterior.*

*OCTAVO. Tanto el PT, a través de su Comisión Coordinadora Nacional, como el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quedan vinculados a la presente ejecutoria y deberán informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la misma en la medida en que se realicen los actos previstos en los resolutivos precedentes.*

De lo reproducido no se advierte que en dicha resolución, se haya determinado que las personas que cita el actor, no pueden postularse ni ser elegidas a un cargo directivo del PT, y si bien se hizo alusión a ellas en la sentencia, sólo fue para poner de relieve que entonces la normativa del partido no regulaba la reelección, pero no se determinó que estuvieran impedidas para postularse y ser elegidos para ocupar un cargo partidista, sin que esta resolución prejuzgue si actualmente lo están o no, porque no es posible pronunciarse al respecto, dado que su postulación y, en su caso, elección, es un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales no es posible hacer un juzgamiento.

No obstante lo anterior, en todo caso, los órganos internos del partido político, deberán tomar en cuenta el contenido de lo dispuesto en los artículos 10, inciso g) de los Estatutos en relación con los límites a la reelección de los integrantes de los órganos internos del partido político.

• Se alega que en el Congreso se discutirán y en su caso aprobarán las propuestas de modificación a los documentos básicos del partido, lo que menoscaba su esfera jurídica y la de todas y todos los militantes del partido, dejándolos en estado de indefensión, porque no conocen el contenido de las posibles propuestas de modificación, razón por la cual, durante el Congreso no podrán estar en aptitud de realizar pronunciamientos y posicionamientos al respecto, lo que vulnera su derecho de audiencia, pues cualquier modificación a los documentos básicos repercute en los derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación de los y las militantes del partido, por lo que la Sala Superior deberá ordenar que se pongan a disposición de toda la militancia, la propuesta de modificación a los documentos básicos del partido.

**Consideraciones de esta Sala Superior**.

Se considera **infundado** el motivo de disenso, toda vez que Florencio Torres Romero parte de una premisa inexacta, en tanto que sólo tienen acceso a las propuestas de modificación de los documentos básicos quienes tengan el carácter de Integrantes y Delegados del 10° Congreso Nacional Ordinario del PT y, por ende, el derecho a participar en el mismo y, no así los que tengan la calidad de militantes, como sucede en el caso del enjuiciante.

Al efecto, se debe tener presente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, de los Estatutos del PT, el Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión, cuyos acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todos sus órganos e instancias de dirección, militantes y afiliados.

A su vez, el numeral 25, de los indicados Estatutos, establece que el Congreso Nacional se integra por: a) La Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y, la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización; b) Legisladores Federales; c) Legisladores Locales; d) Comisionados Políticos Nacionales; f) Representantes Nacionales ante los Órganos Electorales Federales; g) Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva; y, h) Los delegados nombrados por la Comisión Ejecutiva Nacional.

En concordancia con lo anterior, la Base Tercera de la Convocatoria al 10° Congreso Nacional del PT, establece que estará integrado por la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional, la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, los legisladores federales y locales acreditados conforme a la Convocatoria, los Comisionados Políticos Nacionales, los representantes Nacionales ante los Órganos Electorales Federales y, los Delegados de cada entidad electos en sus respectivos Congresos Estatales.

Por su parte, el numeral 29, inciso d), de los indicados Estatutos, dispone que son atribuciones del Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario realizar las reformas y los cambios que se consideren convenientes en la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del PT.

Mientras que, en el punto 8, del Orden del Día de la indicada Convocatoria al 10° Congreso Nacional Ordinario del PT, se establece que se analizarán, discutirán y, en su caso, aprobarán las propuestas de modificación de los documentos básicos.

De conformidad, con lo anterior, no se advierte que las propuestas de modificaciones a los documentos básicos del PT, deban hacerse del conocimiento de los militantes, en tanto que las mismas sólo tienen que distribuirse entre aquellos que tengan la calidad de Integrantes y Delegados a participar en el aludido Congreso Nacional Ordinario (previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos respectivos), pues son quienes finalmente decidirán la aprobación o no de las citadas modificaciones.

Además, de que en el artículo 15, de los Estatutos no se establece alguna disposición en los términos referidos por el actor, quien tampoco acredita su derecho de participar en el Congreso de mérito, bien sea como Integrante o Delegado.

De ahí que no le asiste la razón al enjuiciante, pues la calidad de militante no le confiere la posibilidad de acceder a las propuestas de modificaciones a los documentos básicos del PT, en tanto que para ello es necesario cumplir con los requisitos atinentes y someterse a los procedimientos de designación respectivos, circunstancias que en el caso no se acreditan.

Aunado a que, el actor tampoco refiere de qué forma las modificaciones a los documentos básicos del PT le generan una afectación a sus derechos de votar y ser votado, cuando ni siquiera tiene conocimiento de las posibles reformas.

**• Omisión de los Estatutos de prever la paridad de género en la integración de los órganos directivos partidistas (SUP-JDC-399/2017 y SUP-JDC-468/2017).**

**I. Agravios de la parte demandante**

En el agravio “*CUARTO. Incumplimiento de la paridad de género para la integración de la Comisión Coordinadora Nacional y demás órganos directivos del Partido del Trabajo*” Florencio Torres Romero plantea, fundamentalmente, que:

* De una revisión integral de los estatutos del PT, se desprende la falta evidente del principio de paridad de género para que las y los militantes participen con certeza en los procesos de renovación de las instancias de dirección, por lo que tal omisión estatutaria genera dudas e incertidumbre que impiden conocer con anticipación las reglas en materia de paridad, y a las mujeres, la posibilidad de intervenir como candidatas a puestos internos de dirección.
* La normatividad del PT no prevé requisitos mínimos que garanticen la paridad de género, para ser considerados democráticos, por lo que se solicita a este órgano jurisdiccional que se determine y realice declaratoria sobre las normas y omisiones estatutarias que contravienen los principios constitucionales y legales y ordene su modificación y adaptación al nuevo régimen constitucional.
* Como miembro del PT, causa agravio a los derechos partidarios, la carencia de normas precisas que garanticen el desarrollo interno de las actividades del partido en un marco de legalidad y seguridad jurídica de tal manera de que haya paridad de género dentro del proceso de renovación de los órganos de dirección de dicho instituto político.
* Tal omisión estatutaria genera duda e incertidumbre, al impedir conocer con anticipación las reglas en materia de paridad y en consecuencias, a las mujeres la posibilidad de intervenir como candidatas a puestos internos de dirección.
* Dado que en los estatutos del PT no se establece la paridad de género para integrar los órganos de dirección, los mismos son inconstitucionales.

**II. Anotaciones previas**

Antes de emitir cualquier pronunciamiento, se considera pertinente realizar las anotaciones siguientes:

El examen los agravios listados se realizará en el contexto del proceso de elección de los integrantes de los órganos internos del Partido del Trabajo, de conformidad con la Jurisprudencia 4/99, con título: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.”[[6]](#footnote-6); el contenido y sentido de los demás agravios que se hacen valer en la demanda; y a partir de que en el punto petitorio segundo del escrito de impugnación se solicita que se remueva “*cualquier obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho de votar y ser votado, por los órganos internos del Partido del Trabajo, a efecto de que estos derechos sean eficaces y plenos*”.

Por otro lado, cabe señalar que los párrafos primero, segundo y penúltimo de la Base I del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los partidos políticos son entidades de interés público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; y que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Con relación a lo anterior, cabe apuntar que la Ley General de Partidos Políticos, en lo que interesa, establece lo siguiente:

“**Artículo 34.**

**1.** Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

**2.** Son asuntos internos de los partidos políticos:

[…]

**c)** La elección de los integrantes de sus órganos internos;

[…]”

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que de conformidad con el artículo 41, base I, del Pacto Federal, los partidos políticos tienen libertad de auto-organización, lo que implica que con el fin de promover la participación del pueblo en la vida democrática, en sus estatutos pueden fijar los programas, principios e ideas que los conformen como institutos políticos, de ahí que el legislador les reconozca dicha libertad de organización, con la obligación de que con sus estipulaciones no vulneren el contenido esencial de los derechos políticos y otros derechos fundamentales, como los de igualdad y no discriminación[[7]](#footnote-7).

Por lo que, de la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 41, Base I, párrafos primero y penúltimo; y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el diverso 34, párrafos 1 y 2, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, se colige que el Tribunal Electoral, en su carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación –con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 del ordenamiento constitucional–, válidamente puede intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, como lo es la elección de los integrantes de sus órganos internos, cuando se alegue, por ejemplo, que se incumple con el principio de paridad, pues en este caso, la afectación iría en detrimento de los principios de igualdad y no discriminación, los cuales rigen para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, mismos que, en el caso específico de los político-electorales, resultan esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática y el Estado de Derecho.

Por lo tanto, si en el contexto de la renovación de los órganos internos nacionales de un partido política, la parte demandante alega que las normas estatutarias omiten regular el principio de paridad en la integración de dichos órganos, como sucede en el caso concreto, habría lugar a examinar tal motivo de inconformidad, con el objeto de garantizar la eficacia de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

**III. Consideraciones de la Sala Superior**

Es **infundado** el agravio de la parte demandante, cuando sostiene que los Estatutos del PT omite establecer el principio de paridad de género, para los procesos de renovación de los órganos internos.

Lo anterior es así, porque Florencio Torres Romero parte de una premisa equivocada, en tanto que, en principio, no existe disposición constitucional y legal que establezca la obligación expresa y directa para los partidos políticos de incluir reglas específicas relativas a la paridad de géneros en la integración de sus órganos de dirección nacional, ni tampoco se advierte el deber de incluir tal reglamentación en los referidos términos en los Estatutos de los partidos políticos.

En efecto, en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el artículo 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal dispone, que los partidos políticos tienen como uno de sus fines, hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, entre otros factores, **mediante las reglas que garanticen la paridad entre los géneros, en las candidaturas a legisladores federales y locales.**

A su vez, en el artículo 25, párrafo 1, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos se establece como una obligación de los institutos políticos, **la de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales**.

Por su parte, en el numeral 39, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, se dispone que los estatutos establecerán las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades u obligaciones de los mismos.

De lo anterior, se advierte que no existe disposición constitucional o legal que establezca la obligación de incluir la paridad de géneros en la integración de los órganos de dirección partidista, en la normativa estatutaria de los partidos políticos.

De ahí que, no le asiste la razón a Florencio Torres Romero, al aducir que la norma estatutaria del PT deviene inconstitucional, por no incorporar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos de dirección, al no existir una obligación en tal sentido.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, esta Sala Superior advierte que el PT tiene el deber de observar la paridad de género, así como de promover la participación política de la militancia y la igualdad entre hombres y mujeres, a efecto de integrar los órganos de dirección partidistas, aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de la queja en el planteamiento del actor.

En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a la justicia en favor de todos los gobernados, el cual se traduce en un derecho público subjetivo, conforme al cual todo gobernado y gobernada puede acudir ante un órgano jurisdiccional, a fin de que estos se pronuncien respecto de una situación o hecho que a juicio de la parte accionante implique un menoscabo o restricción de algún derecho de que afirme ser titular.

La citada garantía fundamental además de traducirse en un derecho a favor de la ciudadanía, también implica el cumplimiento, ineludible, de una serie de obligaciones a cargo de los entes públicos responsables del servicio de impartición de justicia.

Conforme a esto, la norma fundamental establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa y expedita, lo cual implica la existencia normas y reglas mediante las cuales se establezcan procedimiento y plazos razonables para la promoción y resolución de los medios de impugnación, de tal forma, que la reparación del derecho transgredido pueda ser materialmente posible.

Por otra parte, la completitud en la impartición de justicia implica que la decisión de los órganos judiciales tenga el mayor alcance protector, tomando las medidas necesarias para remover todos aquellos formalismos que sean innecesarios para la resolución del caso. Asimismo, implica la necesidad de que los órganos judiciales tomen las determinaciones idóneas para el cumplimiento de sus resoluciones.

De lo señalado se concluye que el principio de acceso a la justica garantiza a la ciudadanía el acceso directo e inmediato a los tribunales para la defensa de sus derechos y demás intereses jurídicamente relevantes, derecho que se traduce en la obligación estatal de crear reglas y condiciones en ley tendientes a dar entrada efectivamente a las demandas en las cuales se plantee una controversia, así como a prever los mecanismos para procesar instrumentalmente los planteamientos formulados en tales demandas, hasta el dictado de un fallo en el que se aplique el derecho al caso concreto.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación de suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, entre otros, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, siempre que los mismos pueda ser deducidos con claridad de los hechos expuestos en la demanda.

Esta regla procesal, que se impone como una obligación de los órganos jurisdiccionales, tiene como finalidad la de remover aquellos obstáculos que puedan incidir en la adecuada tutela de un derecho que se afirma transgredido, sobre todo aquellos casos en los que se está en presencia de violaciones de derechos de grupos vulnerables, tradicionalmente discriminados o categorías sospechosas.

Al respecto, se considera como personas o grupos vulnerables a aquella *persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia[[8]](#footnote-8).*

La situación de vulnerabilidad se traduce en un impedimento para el pleno desarrollo individual y familiar de estos grupos sociales.

Por tanto, esta Sala Superior considera que en el caso, a efecto de cumplir con la garantía de acceso a la justicia, sustancialmente en cuanto a la impartición de una justicia completa, se debe suplir la queja, con la finalidad de dar un alcance protector suficiente, relevante e idóneo.

En el caso, del análisis del escrito de demanda, se aprecia que las manifestaciones formuladas por el actor están encaminadas a tratar de evidenciar el incumplimiento del partido político de una regulación en la normativa interna, de reglas mínimas para que en la integración de los órganos partidistas se cumpla con el principio de paridad de género.

En el caso, como ya se señaló se está en presencia de una serie de manifestaciones que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de derechos fundamentales como son los de igualdad y paridad de género previstos en los artículos 4º y 41 de la Norma Fundamental, en beneficio de las militantes del Partido del Trabajo, por lo que se debe hacer un análisis reforzado con la finalidad de generar un mayor impacto protector en caso de que asista la razón al actor.

En efecto, de lo alegado por el actor se observa que, si bien se duele de una omisión en los estatutos, esta autoridad, **en suplencia de la queja** deficiente, estima que lo que en realidad busca cuestionar es **la situación** consistente en que el PT, a lo largo del procedimiento para la designación de distintos cargos de dirigencia nacional del partido, no ha garantizado el principio de igualdad para la conformación de los órganos de dirigencia interna que habrán de renovarse, ello teniendo en cuenta que ni en los estatutos ni en la convocatoria relativa a dicho proceso electivo interno, se observa la existencia de reglas que delimiten la forma en que debe cumplirse con el aludido principio.

Tal disenso **se estima fundado**, pues esta Sala Superior considera que el PT está obligado a asegurar el principio de igualdad y, en concreto, la paridad, en la conformación de sus órganos de dirigencia interna; y que si bien las previsiones normativas que delimiten y generen certeza respecto a la forma en que se garantizará el referido principio no tienen que contenerse, de manera necesaria, en los Estatutos del partido, el instituto político sí debe contar con el instrumento que prevea las reglas correspondientes; lo anterior, tal como se expone enseguida.

En principio, esta Sala Superior observa que la paridad es exigible en la conformación de los órganos de dirigencia partidista por las razones siguientes:

Porque así se deprende de una interpretación sistemática de la normativa aplicable, en tanto que, en principio debe señalarse que el artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

El deber de los partidos de integrar de forma paritaria sus órganos de dirección interna se extrae de los elementos siguientes: **1)** del hecho de que la legislación sí impone a los institutos políticos la obligación de buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como la asegurar la representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de sus estructuras internas; **2)** Que si bien esas normas no definen expresamente cómo debe asegurarse una representación equilibrada, puede acudirse al único estándar constitucional vigente en el ordenamiento mexicano, esto es, **la paridad**.

En efecto, de los artículos 3, párrafo 3, y 37, párrafo 1, inciso e), ambos de la Ley de Partidos; y 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se obtiene lo siguiente:

- El artículo 3, párrafo 3, de la Ley de Partidos que señala los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

- El numeral 37, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Partidos que refiere que la declaración de principios de los partidos deberá contener la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

- El artículo 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres que dispone que las autoridades del estado están obligadas a promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos.

Además de que, es exigible la paridad: porque así se extrae del numeral artículo 3, párrafo 3, de la Ley de Partidos en relación con la constitución.

En efecto el citado numeral refiere que los partidos tienen el deber de buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

Al respecto, la constitución define que en la postulación de candidaturas los partidos están obligados a la paridad. Por lo que, si el numeral en cita impone dos obligaciones, y la única consecuencia disponible para la observancia de una es la paridad, se deduce que ante el vacío al segundo supuesto debe dársele la misma consecuencia.

Asimismo, el partido debe optimizar las condiciones necesarias para cumplir con su deber constitucional de postulación paritaria de candidaturas en procesos constitucionales, esto es, si los partidos tienen que postular candidaturas a cargos de elección popular paritaria, deben generar las condiciones necesarias para tener mujeres preparadas, lo cual se optimiza o potencia, por ejemplo, asegurando su participación en condiciones de igualdad en los cargos de dirigencia interna.

Por lo tanto, si bien los partidos tienen el deber de cumplir con la paridad en la conformación de sus dirigencias, ello no significa que las reglas que al respecto emitan deben contenerse, de forma necesaria, en los estatutos del partido.

Ahora bien, los artículos 1º, último párrafo, y 4º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocer los principios de no discriminación y de igualdad, respectivamente, disponen la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras causas, por el género; y que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley.

Asimismo, en diversos instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación de ésta en condiciones de igualdad en la vida política del país, a saber:

* El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto.
* El artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.
* El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
* El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de *Belém Do Pará*”), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.
* El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (*CEDAW, por sus siglas en inglés*), dispone que los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y la libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. Asimismo, el artículo 7, inciso b), de la CEDAW, dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
* En el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se acordó, entre otras cuestiones, adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad (poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) nacional y local.
* La Recomendación General 25 formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, precisa que la finalidad de las “*medidas especiales*” es acelerar la mejora de la situación de las mujeres para lograr su igualdad sustantiva o *de facto* con los hombres y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra las mujeres, así como compensarlas. De esa suerte, se precisa la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación, sino como forma de subrayar que las medidas especiales son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de *facto*.

Por otra parte, en dos mil once, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su informe titulado “*El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas”*, recomendó específicamente la adopción de medidas tendentes a la paridad en todos los niveles de gobierno, especificando su aplicabilidad al ámbito local (distinguiéndolo del estatal o provincial) y la obligación de los tribunales de exigir el cumplimiento de esas medidas (párrs. 168 y 169).

Derivado de lo anteriormente expuesto, se advierte que, la paridad de género incorporada en la Base I del artículo 41 Constitucional, tiene un sustento constitucional y convencional vinculado al principio de igualdad y a garantizar el acceso de las mujeres a los órganos de representación popular, en un mismo plano de oportunidades que los hombres.

En tal virtud, la paridad de géneros, se encuentra configurada, en principio, como una obligación para el Estado Mexicano, en el sentido de que los partidos políticos deben incorporarla en sus Estatutos y observarla, por cuanto hace a la postulación de candidatos a cargos de elección popular (legisladores federales y locales).

A su vez, en el artículo 25, párrafo 1, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos se establece como una obligación de los institutos políticos, **la de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales**.

Por otra parte, el artículo 2, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos establece que, son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los de votar y ser votados para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político.

Mientras que, el numeral 3, párrafo 3, del indicado ordenamiento legal, dispone que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes y, buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

El artículo 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que la declaración de principios contendrá, entre otras cuestiones, **la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.**

El numeral 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, prevé que **las autoridades correspondientes desarrollarán, entre otras acciones, la de promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos**.

Como ha quedado reseñado, la paridad de género incorporada en la Base I del artículo 41 Constitucional, tiene un sustento constitucional y convencional vinculado al principio de igualdad y a garantizar el acceso de las mujeres a los órganos de representación popular (Congresos federal y locales), en un mismo plano de oportunidades que los hombres.

Ahora bien, de las disposiciones legales se advierte, en esencia, que los partidos políticos tienen la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, así como de garantizar una representación equilibrada en las estructuras de los órganos de dirección partidistas.

En tal orden de ideas, conforme a los artículos 41, Base I, párrafo segundo constitucional; 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; y, 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se advierte que los partidos políticos tienen el deber de observar la paridad de géneros en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular y, a promover de manera efectiva, tanto la participación política, como la igualdad entre los hombres y mujeres que militen en ellos, a efecto de que puedan acceder a los órganos de dirección partidista sin restricción alguna por cuestión de género.

Por tanto, los partidos políticos se encuentran obligados a observar la paridad de géneros en la integración de sus órganos de dirección partidista, a efecto de garantizar una participación efectiva de las mujeres en los mismos.

Esto es, el principio de paridad de género, no se agota cuando los partidos políticos postulan sus candidatos a los cargos de elección popular, sino que, además, el mismo trasciende hacia la conformación de sus órganos internos, en concordancia con uno de sus fines constitucionalmente asignados, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, dado que la paridad de género en la participación política es una de las piezas fundamentales que enriquece la vida democrática.

En efecto, por disposición constitucional existe la obligación para los partidos políticos de cumplir con la paridad de géneros en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, y por disposición legal (artículo 3, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos[[9]](#footnote-9)) tienen una obligación común tanto para integrar sus órganos como para postular candidaturas, consistente en buscar la participación efectiva de ambos géneros. Entonces los institutos políticos tienen el deber de observar el aludido principio de paridad en los procesos de elección partidistas para integrar a los órganos de dirección, puesto que los militantes, tanto mujeres como hombres deben tener garantizado en todo momento su derecho de participar en condiciones de igualdad en los procesos de elección interna para designar candidatos, o bien, para conformar los órganos partidistas.

Asimismo, la regulación constitucional del principio de paridad de género no puede limitarse a ser objeto de aplicación y de observancia por los partidos políticos únicamente, respecto de las candidaturas a cargos de elección popular, sino que además debe trascender a la vida interna de aquellos, particularmente, a la integración de sus órganos directivos, en tanto que es necesario el establecimiento de condiciones que permitan una adecuada y efectiva participación de las mujeres en las actividades políticas de aquellos partidos en los cuales militan.

En tal orden de ideas, el establecimiento del principio de paridad de género a observar por los partidos políticos, representa una garantía mínima para las militantes de participar en condiciones de igualdad en todos los procesos de selección interno que se celebren al interior de los partidos políticos, puesto que resultaría por demás contradictorio el hecho de que sólo se les permitiera hacerlo para postularse a algún cargo de elección popular y no así para contender a un cargo intrapartidista, al no establecerse una limitación de esa naturaleza.

En este sentido, la Sala Superior llega al convencimiento, que la paridad de los géneros, así como la participación política y la igualdad entre hombres y mujeres, constituyen ejes centrales para materializar los derechos político-electorales, dentro de los cuales se encuentra el derecho de afiliación, mismo que comprende, entre otras cuestiones, la posibilidad de formar parte de los órganos internos de los partidos políticos[[10]](#footnote-10).

Esta interpretación es acorde a la obligación convencional de los órganos jurisdiccionales de impartir justicia con perspectiva de género, a fin de garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres a participar en condiciones de igualdad con los hombres en la vida política del país.

Conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos mil trece, las condiciones estructurales que constituyen un obstáculo al acceso a los derechos de las personas, a partir de su identidad sexo-genérica, demandan un especial compromiso de las y los jueces, quienes tienen en sus manos la posibilidad, mediante sus resoluciones, de hacer realidad el derecho a la igualdad.

En tal virtud, todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, habrá de verificarse si existe alguna situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

Además, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales.

Lo anterior queda de manifiesto, con las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas el siete de marzo de este año, en el Semanario Judicial de la Federación, con los siguientes datos de identificación y rubro siguientes: a) Tesis 1a. XXIII/2014 (10a.) **“PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES”**; b) Tesis: 1a. C/2014 (10a.) **“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”,** y c) Tesis: 1a. XCIX/2014 (10a.) **“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”**

Por tanto, la interpretación que hace esta Sala Superior es con base a una perspectiva de género, dada la obligación que tiene derivada de los artículos 1 y 4 Constitucionales, que imponen el deber de respetar, proteger y garantizar de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en virtud de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la obligación de los Tribunales de exigir el cumplimiento de las medidas tendentes a garantizar la paridad en todos los niveles, esta Sala Superior determina eliminar los obstáculos de hecho o de derecho, que impiden la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida interna de los propios partidos políticos y, por ende, deben garantizar la conformación paritaria en sus órganos de dirección.

Tampoco debe perderse de vista que, en México actualmente las mujeres representan más del 50% de la población de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadisfica y Geografía, dado que, del total de habitantes del país, es decir, 112,336,538 (ciento doce millones, trecientas treinta y seis mil quinientos treinta y ocho personas); 57,481,307, (cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y un mil trecientas siete) son del género femenino, lo que exige una participación y reconocimiento de estas capacidades para desarrollarse tanto en el sector público como privado de la sociedad mexicana.

Además, en México, es un hecho público y notorio que la participación de la mujer en la vida política es mucho menor que los hombres y que su representación en los cargos de gobierno interno de los partidos es inferior a los puestos de elección popular, pues en este caso, existen medidas legales que les obligan a cumplir con la paridad.

En ese sentido, los partidos políticos constitucionalmente, al ser catalogados como instituciones de interés público, de participación política, democráticos, plurales, deben ser los primeros interesados en atender la igualdad paritaria hacía el régimen interior, de manera que las mujeres accedan a los cargos directivos e intervengan en su funcionamiento, organización y toma de decisiones.

Tal cuestión, ha sido abordada por la “Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria” aprobada por el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), con intervención de ONU MUJERES, en que se estableció orientar a los estados miembros –del cual el Estado Mexicano tiene representación- en la adopción de medidas, institucionales y/o políticas, que promuevan y garanticen la consolidación gradual de la Democracia Paritaria como meta en la región, para emprender la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres en el marco del derecho internacional.

En efecto, en ese instrumento se contempló que los estatutos y reglamentos de las organizaciones políticas deben contemplar la participación de las mujeres en sus estructuras orgánicas con el objeto de promover la igualdad sustantiva y cuya observancia debe ser observada por el Estado Mexicano, a través del Poder Judicial.

Los artículos 14 y 22 del instrumento en análisis, establecen:

“**ARTÍCULO 14.** El poder judicial debería:

a. Promover el acceso a la Justicia desde el respeto y garantía de la igualdad de género. El fortalecimiento del Estado de Derecho debe expandirse con recursos hacia el logro de la igualdad de género, ya sea a través de reformas legales específicas, asistencia jurídica direccionada, ventanillas únicas para reducir el abandono de casos en la cadena de justicia y la capacitación de jueces y juezas, fiscales y abogados, junto con el seguimiento de sus sentencias.

b. Garantizar y promover una conformación paritaria en todos los niveles. ”

“**ARTICULO 22.** Marco estatutario. Los estatutos y reglamentos de las organizaciones políticas jurídicamente habilitadas contemplarán la constitución y composición de estructuras orgánicas que respeten y promuevan la igualdad sustantiva. A ellos les incumbe:

1. Garantizar la libre e igual participación política de hombres y mujeres, así como la composición paritaria (paridad) en todas las instancias de dirección interna, tanto en la estructura de poder como en la toma de decisiones, incluidos los organismos responsables de velar por el desempeño ético, en todos los niveles jerárquicos, funcionales y territoriales.

…”

Así, tal documento, tiene como finalidad que las democracias de los estados miembros, apuesten sólida y decididamente por el logro de la igualdad de género, la paridad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe, lo que se cumple invariablemente abriendo accesos de participación de las mujeres hacía los órganos interiores de gobierno de los partidos políticos, a través de la igualdad paritaria, efectiva y de decisión.

**Efectos.**

En consecuencia, al considerarse fundados los agravios examinados, lo procedente es ordenar al PT, por conducto de los órganos partidarios competentes, que lleve a cabo los actos necesarios para que, en la elección de las y los integrantes de los órganos directivos se garantice la paridad de géneros en su integración.

Sin embargo, actualmente, está previsto que tal elección tenga lugar durante el desarrollo del Décimo Congreso Nacional Ordinario que se llevará a cabo el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, razón por la cual, dada la proximidad con la fecha en que se resuelve, que dificultaría garantizar dicha paridad, en virtud de la falta actual de reglas al respecto, lo procedente es diferir todo lo relativo a los puntos 9 y 10 del orden del día de la convocatoria respectiva, con el fin de dar al partido el tiempo suficiente para que dentro de su libertad de autodeterminación, emita las reglas atinentes, previo a la elección correspondiente, pudiendo llevar a cabo los demás actos previstos en el orden del día.

La reanudación del Congreso Nacional deberá llevarse a cabo dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al veinticuatro de junio próximo, fecha en que, inicialmente está prevista la realización de dicho congreso.

Además, el Partido del Trabajo, durante la realización del congreso, deberá difundir los efectos de la presente ejecutoria, para que la militancia esté en posibilidad de conocer el contenido del fallo.

Asimismo, el Partido del Trabajo en su oportunidad, deberá implementar, de forma permanente, en su normativa interna, reglas de paridad de géneros en la integración de sus órganos directivos.

**Ofrecimiento de pruebas**. No pasa desapercibido que los actores ofrecen diversas pruebas, que no resultan necesarias para resolver el presente medio de impugnación, en tanto que, incluso con ellas, el sentido de la presente ejecutoria no podría variar, por lo que no ha lugar a admitirlas.

En efecto, dichas pruebas son las siguientes:

“…

2.-TÉCNICA, así como la inspección de este órgano jurisdiccional de la página del PT en el cual publican sus convocatorias, mediante el enlace siguiente: <http://partidodeltrabaio.orq.mx/2017/convocatorias/>. Mismo que constituye un hecho notorio.11[[11]](#footnote-11) La cual se relaciona con los agravios identificados como la omisión de expedir la convocatoria por parte de la Comisión Coordinadora para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional en fechas 14 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017, así como de los acuerdos el incumplimiento a los fines de la sentencia SUP-JDC-2638/2008 y sus acumulados, en relación con las causas de Incompatibilidad.

…

4.- TÉCNICA, así como la inspección de este órgano jurisdiccional de la página del  
PT en la cual deben cumplir con sus obligaciones de transparencia, mediante el enlace siguiente:

http://partidodeltrabaio.org.mx/2017/transparencia/.Mismo que constituye un hecho notorio.13[[12]](#footnote-12) La cual se relaciona con los agravios identificados como la omisión de expedir la convocatoria por parte de la Comisión Coordinadora para las sesiones de la Comisión Ejecutiva Nacional en fechas 14 de diciembre de 2016 y 22 de febrero de 2017, así como de los acuerdos el incumplimiento a los fines de la sentencia SUP-JDC-2638/2008 y sus acumulados, en relación con las causas de Incompatibilidad.

…

5.- DOCUMENTALES. - Mismas que obran en poder del PT y hoy autoridad responsable la cual deberá anexarlas al respectivo informe circunstanciado, consistentes en actas atinentes a la elección de los candidatos por el principio de representación proporcional al PT, tanto para el Senado de la República como para la Cámara de Diputados de los procesos electorales federales; 2014-2015; 2011-2012; 2008-2009 y 2005-2006. La cual se relaciona con el agravio identificado como Incumplimiento a los fines de la sentencia SUP-JDC-2638/2008 y sus acumulados, en relación con las causas de Incompatibilidad.

5.- DOCUMENTAL. Relativa al ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIODE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, identificado con la clave INE/CG162/2015, el cual fue aprobado en sesión especial del Consejo General, celebrada el 4 de abril de 2015, páginas 120 a 124, mismo que se ofrece como hecho notorio 14[[13]](#footnote-13)y consultable en el link:

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recusos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/04 Abril/CGesp201504-04/CGesp201504-4 ap 1pdf La cual se relaciona con el agravio identificado como Incumplimiento a los fines de la sentencia SUP-JDC-2638/2008 y sus acumulados, en relación con las causas de Incompatibilidad.

7.-DOCUMENTAL. Solicito se gire atento oficio a la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, a fin de que informe respecto a cada una de las personas que se indican a continuación, con apego a las inscripciones realizadas en el libro a que se refiere el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la información relativa a todos los cargos que ocupan y han ocupado, indicando los periodos de ejercicio, así como las fechas de cada una de las designaciones o elecciones de que han sido objeto tales personas para integrar los órganos directivos del PT, desde la fecha de constitución de dicho instituto político hasta el presente:

|  |
| --- |
| C. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ |
| C. MARlA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ |
| C. RICARDO CANTÚ GARZA |
| C. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ |
| C. REGINALDO SANDOVAL FLORES |
| C. PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ |
| C. ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ |
| C. RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ |
| C. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS |
| C. JOSÉ NARRO CÉSPEDES |
| C. MARCOS CRUZ MARTÍNEZ |
| C. JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA |
| C. NEFTALÍ IGNACIO PÉREZ FLORES |
| C. SILVANO GARAY ULLOA |
| C. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL |
| C. MARÍA ISIDRA DE LA LUZ RIVAS |

…”.

Como se dijo, incluso con dichos medios de convicción, el sentido de la presente ejecutoria no podría variar, por lo que no ha lugar a admitirlas.

Por lo expuesto y fundado, se

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO**. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-399/2017, SUP-JDC-445/2017 y SUP-JDC-468/2017, al diverso SUP-JDC-369/2017. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los autos de los expedientes acumulados.

**SEGUNDO.** Se sobresee respecto de las omisiones reclamadas en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-445/2017, en términos del considerando QUINTO.

**TERCERO**. Se declara la nulidad de la notificación que el tres de mayo pasado se le hizo al actor, de la resolución del recurso de queja intrapartidista identificado con la clave CNCGJYC/01/NAL/17, emitida por la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT, el veintiocho de abril de 2017.

**CUARTO**. Se confirma la resolución emitida el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT, al resolver el recurso de queja intrapartidista identificado con la clave CNCGJYC/01/NAL/17.

**QUINTO**. El PT deberá cumplir con la presente ejecutoria, en los términos precisados en la parte final del último considerando.

**Notifíquese** como en derecho corresponda.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Secretaria General de Acuerdos autoriza y da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADA PRESIDENTA**  **JANINE M. OTÁLORA MALASSIS** | |
| **MAGISTRADO**  **FELIPE DE LA MATA PIZAÑA** | **MAGISTRADO**  **FELIPE ALFREDO**  **FUENTES BARRERA** |
| **MAGISTRADO**  **INDALFER INFANTE GONZALES** | **MAGISTRADO**  **REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN** |
| **MAGISTRADA**  **MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO** | **MAGISTRADO**  **JOSÉ LUIS VARGAS**  **VALDEZ** |
| **SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**  **MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO** | |

## **SENTENCIA** [**SUP-REC-1319/2017**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/REC/SUP-REC-01319-2017.htm)

recurso de reconsideración

EXPEDIENTE: SUP-rec-1319/2017

RECURRENTES: Agustín Nava Huerta y María Hortencia macías evaristo

autoridad responsable: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADo PONENTE: indalfer infante gonzales

SECRETARIO: ALEJANDRO PONCE DE LEÓN PRIETO

colaboró: rAFAEL gERARDO rAMOS cÓRDOVA

Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

**VISTOS,** para resolver los autos del recurso de reconsideración indicado al rubro, interpuesto por Agustín Nava Huerta y María Hortencia Macías Evaristo, en su carácter de militantes del Partido Socialista, partido político local en el Estado de Tlaxcala, a fin de impugnar la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México dictada en el expediente identificado con la clave SCM-JDC-1248/2017 y acumulado,que confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal Electoral de la aludida entidad federativa que anuló la reforma a los estatutos y la elección de integrantes de diversos órganos de dirección del mencionado instituto político, además de que ordenó reponer su Tercer Congreso Estatal Ordinario.

R E S U L T A N D O

**I. Antecedentes.** De la narración de hechos que los recurrentes exponen en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

**1. Convocatoria.** El treinta de junio del dos mil diecisiete, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista emitió la convocatoria para la celebración de su Tercer Congreso Estatal Ordinario en Tlaxcala.

**2. Congreso Estatal.** El treinta de julio del dos mil diecisiete, se llevó a cabo el referido Congreso, en el que se aprobaron reformas a los Estatutos del Partido Socialista, además de la nueva integración de su Comité Ejecutivo y de la Dirección Política, además de las Comisiones de Contraloría y Fiscalización, así como de Garantías, Justicia y Controversias.

**II. Juicio ciudadano local (TET-JDC-043/2017)**

**1. Demanda.** El tres de agosto del dos mil diecisiete, inconformes con lo anterior, diversos militantes del Partido Socialista promovieron, *per saltum,* juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

**2. Terceros interesados.** El catorce de agosto posterior, María Hortencia Macías Evaristo y Agustín Nava Huerta, así como otros militantes del Partido Socialista, comparecieron con el carácter de terceros interesados, calidad que les fue reconocida mediante acuerdo del veinticuatro de agosto siguiente.

**3. Sentencia local.** El treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral de Tlaxcala declaró procedente el conocimiento *per saltum* de la impugnación, anuló las decisiones tomadas en el Tercer Congreso Estatal Ordinario del Partido Socialista y ordenó la reposición del propio congreso.

Lo anterior, sustancialmente, porque el referido congreso se celebró sin contar con el quorum previsto en el estatuto del partido.

Por otra parte, en un análisis exhaustivo de los motivos de agravio, determinó que para la integración de sus órganos internos el partido político debía garantizar la paridad entre géneros.

**III. Juicio ciudadano federal (SCM-JDC-1248/2017 Y ACUMULADOS).**

**1. Demanda.** El tres de agosto del dos mil diecisiete, inconformes con la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, María Hortencia Macías Evaristo y Agustín Nava Huerta, promovieron juicio ciudadano federal, el cual fue radicado en la Sala Regional Ciudad de México con la clave de expediente SCM-JDC-1248/2017.

**2. Sentencia.** El cinco de octubre siguiente, la referida Sala Regional resolvió el juicio ciudadano y confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala.

**IV. Recurso de reconsideración.**

**1. Demanda.** El ocho de octubre del dos mil diecisiete, María Hortencia Macías Evaristo y Agustín Nava Huerta interpusieron el recurso de reconsideración que se resuelve, para impugnar la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México.

**2. Turno.** Mediante acuerdo de nueve de octubre del dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior ordenó formar el expediente SUP-REC-1319/2017 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

**3. Trámite.** En su oportunidad, el Magistrado instructor admitió a trámite la demanda y, al no existir diligencias pendientes de practicar, declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A C I O N E S

**PRIMERO. Competencia.**

La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 186, fracción X; y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3 párrafo 2, inciso b), 4 y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración promovido para impugnar una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, supuesto reservado expresamente para conocimiento y resolución de esta Sala Superior.

**SEGUNDO. Requisitos de procedencia.**

El presente medio de impugnación satisface los requisitos previstos en los artículos 8, 9,13, párrafo 1, inciso b), 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, 63, 65 y 66, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

**a) Forma.**

El recurso se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la demanda se hace constar el nombre de los recurrentes, su domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que les causa y las disposiciones presuntamente violadas, se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de quienes promueven.

**b) Oportunidad.**

El recurso de reconsideración se presentó oportunamente, porque se interpuso dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello, porque la sentencia impugnada se emitió el cinco de octubre de dos mil diecisiete, la cual se notificó a los recurrentes en la misma fecha, de manera que, si la demanda se presentó el ocho de octubre siguiente, ello se hizo dentro del plazo legal.

**c) Legitimación.**

El recurso de reconsideración al rubro indicado, fue promovido por parte legítima, dado que derivado de la reforma constitucional de dos mil siete y legal de dos mil ocho en materia electoral, se advierte que a fin de dotar de funcionalidad al sistema de impugnación electoral y con la finalidad de garantizar a los sujetos de Derecho un efectivo acceso a la justicia constitucional en materia electoral, es estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la competencia de las Salas de esta Tribunal Electoral para analizar la constitucionalidad de leyes, a partir de un acto concreto de aplicación.

Una de las finalidades del recurso de reconsideración es que la Sala Superior revise las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras, cuando determinen la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución federal. En ese sentido, el recurso de reconsideración constituye una segunda instancia constitucional electoral, que tiene como objetivo que esta Sala Superior revise el control de constitucionalidad de leyes que hacen las mencionadas Salas Regionales.

Por cuanto hace a los sujetos de Derecho legitimados para promover el recurso de reconsideración, el artículo 65, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, faculta a los partidos políticos y, por excepción, a los candidatos.

No obstante, a fin de garantizar el ejercicio al acceso efectivo de la impartición de justicia tutelado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a juicio de este órgano jurisdiccional, se deben tener como sujetos legitimados para promover el recurso de reconsideración a aquéllos que tengan legitimación para incoar los medios de impugnación electoral en la primera instancia federal, es decir, ante las Salas Regionales.

De lo contrario, se haría nugatorio el derecho de acceso efectivo a la impartición de justicia de los sujetos de derecho distintos a los partidos políticos y candidatos en los supuestos aludidos, puesto que no estarían en posibilidad jurídica de impugnar las sentencias dictadas por las Salas Regionales que pudieran afectar sus derechos subjetivos, tutelables mediante el control de constitucionalidad o convencionalidad.

Por tanto, a juicio de la Sala Superior, María Hortencia Macias Evaristo y Agustín Nava huerta están legitimados para interponer el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC1319/2017.

**d) Interés jurídico.**

En este particular, resulta evidente que los recurrentes tienen interés jurídico para interponer el medio de impugnación que se resuelve, en razón de que controvierten una sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México de este Tribunal Electoral, dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SCM-JDC-1245/2017 y acumulado, que confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, misma que declaró la nulidad del Tercer Congreso Estatal del Partido Socialista y, como consecuencia, todas las decisiones habían sido aprobadas.

En concepto de los recurrentes, quienes fueron actores ante la referida Sala Regional, la sentencia de dicho órgano jurisdiccional vulnera sus derechos político-electorales, ya que consideran que afecta sus derechos como militantes del Partido Socialista.

**e) Definitividad.**

Se cumple con este requisito, porque la única instancia para impugnar las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el recurso de reconsideración.

**f) Requisito especial de procedencia.**

El recurso de reconsideración cumple con los requisitos especiales de procedencia previstos en los artículos 62, párrafo primero, inciso a), fracción II, y 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con las siguientes consideraciones.

Esta Sala Superior ha privilegiado un acceso efectivo a la tutela judicial, el cual, ha permitido, en atención a las particularidades de cada caso, que el ámbito de protección del recurso de reconsideración materialice de manera efectiva, una interpretación en aras de privilegiar la fuerza normativa de la Constitución.

En este sentido, la procedencia del recurso de reconsideración se ha enmarcado, consecuentemente, en una idea de progresividad para salvaguardar tanto los derechos fundamentales consagrados en la norma suprema, como aquellas otras disposiciones que se erigen como directivas del orden constitucional y que conviven en un esquema de complementariedad con los derechos humanos, encontrando un balance y dotando así de sentido a lo previsto en la norma fundamental.

Bajo este contexto, se ha fortalecido la procedencia de dicho medio de impugnación, lo que ha motivado la emisión de criterios relativos al tema en donde, se han observado las normas constitucionales y legales a partir de los casos concretos con el propósito de darle eficacia y operatividad al recurso de reconsideración.

Es criterio de este órgano jurisdiccional que resulta procedente el recurso en los casos en que la Sala Regional se hubiera pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma en materia electoral, de manera expresa o implícita, o respecto de la interpretación de un precepto constitucional, mediante el cual se orienta la aplicación o no de normas secundarias, conforme a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 26/2012, consultable a foja seiscientas veintinueve a seiscientas treinta de la "Compilación 1997-2013, de Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", publicada por este Tribunal Electoral, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

**RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES**.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, el recurso de reconsideración procede no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sino también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional.

En la sentencia que se controvierte, la Sala Regional Ciudad de México realizó una interpretación del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la propia Constitución, en cuanto al alcance del principio de paridad de género al interior de los partidos políticos, en relación con los artículos 3, párrafo 3, y 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos.

En efecto, la responsable indicó lo siguiente:

En concepto de esta Sala, la interpretación del artículo 3, párrafo 3, de la Ley de Partidos**, a la luz de lo previsto en los artículos 1;4;41, base I, párrafo 2 de la Constitución**; 3 y 7, inciso b), de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y 1, 4, 5, 13, 14, 23 y 24 de la Convención Interamericana para Prevenir, Denunciar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, por “**participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos”** debe entenderse como la obligación de los partidos políticos de generar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres al interior de sus órganos directivos por lo que la integración del principio de paridad en su conformación se convierte en un imperativo para conseguirla, toda vez que a través de ésta se puede lograr que en las decisiones del Partido participen por igual ambos géneros.

Como se advierte de la transcripción, la Sala Regional Ciudad de México realizó una interpretación del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer los alcances del principio de paridad en la integración los órganos de dirección del Partido Socialista.

Esta Sala Superior considera que lo resuelto por la Sala Regional responsable implica la interpretación del principio de paridad establecido en el citado precepto constitucional, lo cual puede suponer una eventual vulneración de los principios de autodeterminación y auto-organización que rige la vida interna del Partido Socialista, porque la normativa interna podría ser aplicada de diversa manera a la prevista.

Por su parte, el recurrente aduce que la Sala Responsable, al dictar la sentencia impugnada, hizo una indebida interpretación del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la propia Constitución, en cuanto al alcance del principio de paridad de género al interior de los partidos políticos, en relación con los artículos 3, párrafo 3, y 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, ya que, sostienen, se les vincula a aplicar dicho principio al interior de sus órganos de dirección sin que exista una norma legal o estatutaria que expresamente lo prevea, con lo que, desde su perspectiva, ello conduce a inaplicar los Estatutos del partido que libremente les permiten integrar sus órganos sin tener la obligación de hacerlo paritariamente, lo que a su vez implica, en su concepto, el desconocimiento de los diversos principios de autodeterminación y auto-organización reconocidos también en la Ley Fundamental.

Por tanto, al evidenciarse que la Sala Regional realizó una interpretación directa del artículo 41 Constitucional, ante la ausencia de disposición estatutaria que establezca expresamente si el principio de paridad debe aplicarse en la integración de sus dirigencias, en la especie, se satisface el requisito especial de procedencia del presente recurso de reconsideración[[14]](#footnote-14).

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación[[15]](#footnote-15) ha sostenido que la interpretación directa de un precepto constitucional implica desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la disposición constitucional, lo cual puede lograrse a través de los métodos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico.

Por tanto, estaremos frente una interpretación directa del texto constitucional cuando el órgano jurisdiccional dote de significado, alcances y contenidos al texto normativo constitucional.

Ello quiere decir, que la actividad realizada por el juez, busca darle sentido a formulaciones previstas en la norma que no se encuentran del todo claras en función de aquéllas de carácter electoral que se plantean como posiblemente inconstitucionales.

Para ello, el ejercicio hermenéutico avanza más allá de la mera aplicación de criterios previamente establecidos, lo cual se traduciría no en una interpretación directa como tal, sino como la invocación argumentativa que sirve de motivación para la decisión tomada en el caso concreto.

La reflexión anterior, cobra importancia, porque en el caso se debe dilucidar el alcance del artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en relación a la forma en que conviven los principios de paridad, auto-determinación y auto-organización de los partidos políticos.

**TERCERO. Estudio de fondo.**

**I. Materia de la controversia.**

**a) Acto impugnado.**

En la sentencia impugnada, la Sala Regional Ciudad de México confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, misma que declaró la nulidad del Tercer Congreso Estatal del Partido Socialista y, como consecuencia, todas las decisiones que habían sido aprobadas.

Al efecto, consideró que, contrario a lo que adujeron los ahora recurrentes ante la referida Sala Regional, el Tribunal Electoral de Tlaxcala sí analizó las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades primigenias y los terceros interesados y justificó la procedencia del juicio local *per saltum*, es decir, sin agotar los medios de impugnación intrapartidistas.

Asimismo, sostuvo que fue correcta la interpretación del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hizo el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el sentido de que los órganos de dirección del Partido Socialista se deben conformar con paridad de género, dado que son cargos de designación.

Lo anterior, no obstante que ni en sus estatutos ni en la convocatoria respectiva se hubieran previsto reglas que delimitaran la forma en que se debían cumplir tales principios, toda vez que desde el ámbito constitucional y convencional existe la obligación de proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las mujeres.

Aunado a que la Ley General de Partidos Políticos les impone el deber de promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida política del país, en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

**b) Planteamiento de los recurrentes.**

En primer término, los recurrentes sostienen que la Sala Regional Ciudad de México omitió estudiar el concepto de agravio que hicieron valer respecto al indebido análisis de la acción vía *per saltum* por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala, con lo cual, habría revocado la sentencia local, a fin de que se agotara la instancia intrapartidista, tal como lo dispone el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, aducen que la Sala Regional responsable interpretó erróneamente el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal, toda vez que, al sostener que los partidos políticos deben cumplir el principio de paridad de género en la integración de sus órganos dirigentes, dejó de considerar el principio de autodeterminación previsto en ese precepto constitucional, el cual dispone que los partidos políticos tienen la libertad de establecer, organizar y elegir a sus órganos directivos de conformidad con sus estatutos.

Aunado a lo anterior, afirman que no existe precepto legal alguno que establezca porcentajes de participación política entre ambos géneros, por lo cual es incorrecto que, a partir de una interpretación constitucional y convencional, la Sala responsable haya concluido que los órganos intrapartidistas deban ser paritarios, lo que vulnera el principio de autodeterminación de los partidos políticos.

**II. Determinación de esta Sala Superior.**

**a) Omisión de estudiar el concepto de agravio relativo al indebido análisis de la acción vía *per saltum* por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala*.***

Este órgano jurisdiccional considera que es **inoperante** este concepto de agravio, toda vez que no se dirige a controvertir alguna cuestión relacionada con temas de constitucionalidad, sino que únicamente se refiere a temas de legalidad.

Lo anterior es así, toda vez que el recurso de reconsideración es un medio de impugnación de estricta constitucionalidad, motivo por el cual, sólo son objeto de estudio y pronunciamiento, aquellos temas subsistentes vinculados con la validez constitucional de normas jurídicas.

En el caso, la omisión alegada en forma alguna plantea la posible inconstitucionalidad de preceptos o interpretación del alcance de algún precepto constitucional, es decir, definir su se actualizaba la procedencia *per saltum* constituye un planteamiento de mera legalidad, lo que no es materia de estudio del recurso de reconsideración.

**b) indebida interpretación del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal.**

Es **infundado** el agravio de los recurrentes, ya que, contrario a lo que sostienen, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal[[16]](#footnote-16) se interpretó correctamente, toda vez queel principio de paridad de género sí es aplicable en la integración de los órganos de dirigencia del Partido Socialista, sin que esto vulnere su derecho a autodeterminación, tal como se demuestra a continuación.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala declaró la nulidad del Tercer Congreso Estatal del Partido Socialista, sustancialmente, porque se celebró sin el quorum previsto en el estatuto del mencionado partido político. Como consecuencia de lo anterior, dejó sin efectos todos los acuerdos que habían sido aprobados, entre ellos, diversos nombramientos para integrar su Comité Ejecutivo y la Dirección Política, así como las Comisiones de Contraloría y Fiscalización, además de la de la Garantías, Justicia y Controversias.

Asimismo, vinculó al referido instituto político para que emitiera una nueva convocatoria para la celebración de su Congreso Estatal Ordinario, en la que debía establecer las reglas que considerara pertinentes para garantizar la observancia del principio de paridad de género en la integración de sus órganos partidistas.

Ello, al considerar que ese principio de base constitucional y configuración legal se debe aplicar de manera transversal, con el fin de alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política, lo que implica su reconocimiento necesario en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos. Lo cual, además, consideró necesario para erradicar las prácticas discriminatorias en la participación política del género femenino.

Al efecto, consideró que resultaría incongruente que únicamente se exigiera a los partidos políticos la paridad en la postulación de sus candidaturas y no así en la conformación de sus órganos de dirección.

Inconformes con tal determinación, Hortencia Macías Evaristo y Agustín Nava Huerta, en su calidad de militantes del Partido Socialista, promovieron juicio ciudadano, el cual fue resuelto por la Sala Regional Ciudad de México en la sentencia que ahora se impugna.

Al respecto, la ahora responsable confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, al considerar que el principio de paridad de género sí es aplicable en la integración de órganos internos de los partidos políticos.

Para llegar a dicha conclusión razonó que el artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una reserva de ley para determinar los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes de los partidos políticos, calificándolos como entidades de interés público.

Es por ello que, a fin de establecer cuáles son los deberes, derechos y prerrogativas de los partidos políticos, el legislador debe tener en consideración las reglas y principios que prevé la Constitución.

En ese sentido, sostuvo que el legislador federal dispuso en el artículo 3, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos[[17]](#footnote-17), que estos deben buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, lo cual, en concepto de la Sala Regional Ciudad de México, se traduce en que estos deben encontrar la fórmula para que haya igualdad material en la integración de sus órganos.

En consecuencia, estimó correcta la conclusión del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el sentido de que los órganos de dirección del Partido Socialista se debían conformar de manera paritaria, dado que se trataba de cargos por designación.

Como se anticipó, esta Sala Superior considera que carecen de razón los recurrentes cuando afirman que la responsable interpretó de forma incorrecta el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal, porque tal como lo sostuvo la responsable, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, los cuales, entre otras cuestiones, deben atender las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

El mismo precepto constitucional dispone que los derechos, obligaciones y prerrogativas de tales institutos políticos serán determinadas por la ley.

En ese sentido, el artículo 3, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos prevé que los partidos políticos deben buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos.

Por su parte, el artículo 37, párrafo 1, inciso e) del citado ordenamiento[[18]](#footnote-18), establece que la declaración de principios de los partidos políticos debe contener, cuando menos, la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Como se puede advertir, el legislador federal determinó, en ejercicio de la facultad otorgada por el Constituyente Permanente, que los partidos políticos deben promover la participación política en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como garantizar una representación equilibrada de sus órganos.

Lo anterior, toda vez que el principio de paridad de género no se agota cuando los partidos políticos postulan sus candidatos a los cargos de elección popular, sino que este principio también trasciende hacia la conformación de los órganos intrapartidistas, en concordancia con uno de sus fines constitucionalmente asignados, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática.

Es decir, por disposición constitucional existe el deber para los partidos políticos de cumplir con la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, y por disposición legal, además, el deber de integrar sus órganos con la participación efectiva de ambos géneros.

Es así que los institutos políticos tienen el deber de observar el aludido principio de paridad en los procesos de elección partidistas para la integración de sus órganos de dirección, puesto que los militantes, tanto mujeres como hombres, deben tener garantizado en todo momento su derecho de participar en condiciones de igualdad en los procesos de elección interna para designar candidatos, o bien, para conformar los órganos partidistas.

En este contexto, sería indebido sostener que la regulación constitucional del principio de paridad de género se limita únicamente a las candidaturas a cargos de elección popular, ya que este principio debe trascender al interior de los partidos políticos, particularmente en la integración de sus órganos directivos, en tanto que es necesario establecer condiciones que permitan una adecuada y efectiva participación de las mujeres en las actividades políticas de los institutos en que militan, lo que no contraviene el principio de autodeterminación de los partidos políticos, toda vez que éste es susceptible de delimitación, en aras de que se respete el núcleo básico o esencial de algún derecho fundamental, el cual, en el caso, lo constituye la paridad entre los géneros.

En similar sentido se pronunció esta Sala Superior al resolver el juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-369/2017 y acumulados.

En efecto, en el precitado caso, la Sala Superior, precisó que de una interpretación sistemática de los artículos 1º, 4° y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se advierte, que los partidos políticos tienen:

* El deber de observar la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular;
* La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
* Así como de garantizar una representación equilibrada en las estructuras de los órganos de dirección partidistas.

Por tanto, los partidos políticos se encuentran obligados a observar la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección partidista, a efecto de garantizar una participación efectiva de las mujeres en los mismos, sin que sea necesario que las reglas de paridad estén contenidas necesariamente en los Estatutos, pues basta que se enuncien en su normativa.

Es por ello que esta Sala Superior considera que la sentencia impugnada se ajusta a Derecho, en el sentido de que el principio de paridad de género es aplicable en la integración de los órganos directivos del Partido Socialista.

En consecuencia, al haber sido desestimados los planteamientos formulados por los recurrentes, esta Sala Superior concluye que lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

R E S U E L V E

**ÚNICO.** Se **confirma**, en lo que fue materia de impugnación,la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México en el expediente identificado con la clave SCM-1248/2017 y acumulado.

**Notifíquese** conforme a derecho.

Devuélvase los documentos que correspondan y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **unanimidad** de votos lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADA PRESIDENTA**  **JANINE M. OTÁLORA MALASSIS** | |
| **MAGISTRADO**  **FELIPE DE LA**  **MATA PIZAÑA** | **MAGISTRADO**  **FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA** |
| **MAGISTRADO**  **INDALFER INFANTE GONZALES** | **MAGISTRADO**  **REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN** |
| **MAGISTRADA**  **MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO** | **MAGISTRADO**  **JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ** |
| **SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**  **MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO** | |

## **SENTENCIA** [**SUP-JDC-20/2018**](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00020-2018.htm)

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-20/2018

ACTORA: DIANA COSME MARTÍNEZ

AUTORIDAD rESPONSABle: COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADO PONENTE: indalfer infante gonzales

sECRETARIOS: Magali gonzález guillÉn Y JORGE ARMANDO MEJÍA GÓMEZ

COLABORÓ: MÓNICA DE LA MACARENA JUÁREZ HERNÁNDEZ

Ciudad de México,a catorce de febrero de dos mil dieciocho.

**VISTOS**, para resolver el expediente **SUP-JDC-20/2018**, promovido por Diana Cosme Martínez, a fin de controvertir la resolución emitida el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, que declaró infundada la queja QO/NAL/347/2017, presentada por la actora para controvertir la validez de la elección de la Presidencia y Secretaría General, realizada en el Décimo Tercer Pleno Extraordinario, con carácter electivo, celebrado el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, al estimar que incumplió con el principio de paridad de género.

**RESULTANDO**

**PRIMERO. Antecedentes.** De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, y de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente.

**1. Convocatoria.** El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió la convocatoria al Décimo Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, con carácter electivo, del Partido de la Revolución Democráticapara la elección de la Presidencia, la Secretaría General e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del referido partido, así como para elegir a los integrantes de las Comisiones Nacionales establecidas en el artículo 130 del estatuto y del instituto nacional de investigaciones, formación política y capacitación en políticas públicas y gobierno, en cumplimiento a la resolución recaída al incidente de imposibilidad de incumplimiento de sentencia identificado con la clave SUP-JDC-633/2017.

**2. Elección de la dirigencia nacional.** El nueve de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el Décimo Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, con carácter electivo, del Partido de la Revolución Democrática, en el que se eligió a la dirigencia nacional e integrantes de las comisiones del Partido de la Revolución Democrática.

**3. Interposición de la queja contra órgano.** La actora interpuso queja contra órgano, en la que impugnó la elección del Presidente y del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, al estimar que se incumplió con las reglas de paridad de género. El medio de defensa intrapartidista quedó registrado con el expediente QO/NAL/347/2017.

**4. Resolución impugnada.** El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática consideró infundada la queja y declaró la validez de la elección de los titulares de la dirigencia nacional del citado partido político.

**SEGUNDO. Juicio ciudadano.**

**1. Demanda.** Inconforme, Diana Cosme Martínez promovió juicio ciudadano ante esta Sala Superior el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

**2. Turno a Ponencia.** Mediante proveído de esa propia fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar el expediente **SUP-JDC-20/2018** y turnarlo a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales.

**3. Radicación, admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad, el Magistrado instructor emitió el acuerdo correspondiente.

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERO. Competencia.**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el juicio al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio ciudadano, donde se controvierte una resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional que está relacionada con la elección de los titulares de la dirigencia nacional, que resulta de la competencia de esta Sala Superior.

**SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad.**

El juicio ciudadano reúne los requisitos previstos en los la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[[19]](#footnote-19) de conformidad a lo siguiente:

**1. Forma.** El juicio se promovió por escrito, en el que se hace constar el nombre y firma autógrafa de la actora, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado; menciona los hechos en que se basa su impugnación, los agravios y los preceptos presuntamente violados.

**2. Oportunidad.** El juicio debe tenerse por presentado en forma oportuna, porque la resolución impugnada se dictó el dieciséis de enero del presente año, la actora tuvo conocimiento de ella el diecisiete siguiente y promovió el medio de impugnación el diecinueve del presente mes y año.

**3. Legitimación**. El requisito señalado está satisfecho, toda vez que el juicio fue promovido por una ciudadana, por propio derecho y en su calidad de militante afiliada al Partido de la Revolución Democrática, y en él hace valer presuntas violaciones a la normativa interna del partido político.

**4. Interés.** Se satisface este requisito, en la medida que la promovente concurrió como parte actora en la queja contra órgano, la cual fue resuelta por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, y su pretensión es que se revoque la resolución impugnada.

**5. Definitividad.** La resolución combatida es definitiva y firme, toda vez que en la normativa interna del Partido de la Revolución Democrática y en la legislación federal, no está previsto medio de impugnación, susceptible de ser agotado previamente, por el cual se pueda revocar, anular, modificar o confirmar, la resolución partidaria controvertida.

Además, en términos de lo previsto en el artículo 137, de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, las determinaciones emitidas por la Comisión Nacional Jurisdiccional son definitivas e inatacables.

**TERCERO. Estudio de fondo.**

**1. Materia de la controversia.**

Diana Cosme Martínez es una ciudadana afiliada al Partido de la Revolución Democrática que acude a esta Sala Superior a controvertir la resolución emitida el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por la Comisión Nacional Jurisdiccional del citado partido político, en el expediente QO/NAL/347/2017.

En la resolución impugnada, la Comisión Nacional Jurisdiccional se ocupó de dos temas: la transgresión al principio de paridad en la designación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, prevista en la normatividad partidista, porque las personas designadas para tales cargos fueron hombres, así como la toma de protesta a las personas electas, en la misma sesión del Consejo electivo, en contravención a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.

El agravio relacionado con la vulneración al principio de paridad fue desestimado por el órgano responsable, con apoyo en la ejecutoria SUP-JDC-832/2013, al considerar que en la elección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General no operaban las reglas de género, al tratarse de cargos unipersonales con funciones otorgadas al dirigente partidario en lo individual; asimismo, al estimar que su designación depende del resultado de un proceso electivo realizado por un Consejo Nacional Electivo y porque la elección derivó de la participación de la fórmula única.

Por ello, concluyó que fue intención del *legislador* interno que la paridad de género vertical y horizontal no abarcara a tales cargos partidistas, ya que, en su concepto, tal principio sólo aplica en la elección de los veintiún integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a que refiere el artículo 101, inciso d), del Estatuto y no respecto de los titulares de la dirigencia nacional.

En cuanto al motivo de disenso relacionado con la toma de protesta del Presidente y Secretario General en contravención al artículo 123, del Reglamento General de Elecciones y Consultas, el cual dispone que la toma de protesta e instalación de los órganos de dirección y representación del partido político se realizará una vez que la Comisión Nacional Jurisdiccional hubiere resuelto todas las impugnaciones de la elección respectiva, el órgano responsable sostuvo que tal precepto no era aplicable al caso concreto.

Lo anterior, al considerar que el supuesto establecido en ese artículo es aplicable en elecciones realizadas a través de votación secreta y directa recibida en urnas y no en aquellas elecciones efectuadas por candidatura única, cuyo método es a través de mano alzada del Consejo electivo como aconteció en la especie; aunado a que el partido político estaba obligado a realizar todos los actos jurídicos para renovar su dirigencia nacional dentro del plazo de sesenta días concedido por esta Sala Superior en el incidente de incumplimiento de sentencia relativo al juicio ciudadano SUP-JDC-633/2017.

En consecuencia, confirmó la validez de la elección de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Ahora, en el presente juicio ciudadano, la actora **únicamente cuestiona las consideraciones relacionadas con el tema de la paridad de género en la elección del Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática**, al afirmar que la resolución impugnada no garantizó tal principio, ya que los cargos partidistas fueron ocupados por dos hombres, sin haber incluido a una mujer en alguno de ellos.

Como parte de sus agravios, agrega que la Comisión Nacional Jurisdiccional debió resolver su controversia garantizando la paridad de género consagrada como principio en las leyes generales de la materia y el propio Estatuto, a fin de que se respetara el derecho de igualdad entre hombres y mujeres que señala el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En suma, la actora cuestiona que en ese proceso electivo no se garantizaron las reglas de paridad, en virtud de haberse electo a hombres en los cargos de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática.

Por tanto, quedan intocadas las demás consideraciones de la resolución impugnada, al no haberse controvertido.

**2. Consideraciones de la Sala Superior.**

La Sala Superior considera que procede **confirmar** la resolución impugnada por razones diversas a las expuestas por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.

Ello, al considerar que **le asiste razón** a la actora, porque el principio de paridad de género no se garantizó en la integración y elección de la fórmula para la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ya que debió integrarse por personas de distinto género, en atención a lo dispuesto por el artículo 8, inciso e), del Estatuto de ese partido político.

No obstante, **resulta inviable** su pretensión, respecto a que se revoquen los nombramientos para que se elija una fórmula compuesta por un hombre y una mujer, ya que, en aras de otorgar seguridad jurídica y protección a los principios que rigen los procesos electorales, la obligación de que se cumpla el principio de paridad de género se exigirá para el próximo proceso de renovación de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, con el objeto que se continúe la ejecución de las actividades propias del partido político para el logro de sus fines y de aquéllas necesarias para el desarrollo de los procesos electorales que actualmente se encuentran en curso (proceso federal y locales para elegir al titular de la Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones Federales, Gubernaturas de diversas entidades federativas, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos)[[20]](#footnote-20), como a continuación se explica.

**2.1. Marco normativo de los derechos político electorales.**

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que *“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,**cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”[[21]](#footnote-21)*

El segundo párrafo el precepto constitucional en cita, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, **favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**.[[22]](#footnote-22)

El último párrafo del citado precepto constitucional dispone el principio de no discriminación, entre otras cuestiones, por razón de género, con el objeto de garantizar que no se atente contra la dignidad humana o se tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas por esa causa.

El artículo 4°, de la propia Constitución Federal, reconoce la igualdadentre hombres y mujeres. Con fundamento en este precepto constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres.[[23]](#footnote-23)

Los artículos 1 y 2, de la citada ley general[[24]](#footnote-24), señalan que su objetivo es regular y **garantizar la** **igualdad de oportunidades** **y de trato entre mujeres y hombres**, así como proponer mecanismos institucionales orientados hacia el cumplimiento de laigualdad sustantivaen los ámbitospúblico y privado, al amparo de los principios rectores de igualdad, no discriminación, equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De tales artículos se logra advertir que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, tienen obligación de respeto, protección y garantía de los derechos, entre ellos los político- electorales, lo cual implica, entre otras cuestiones, adoptar medidas que permitan el efectivo goce de los derechos humanos sea una realidad para hombres y mujeres.

Ahora, el artículo 35 constitucional[[25]](#footnote-25) establece los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. Entre los derechos que encuentran expresión en tal precepto constitucional, se encuentra el de **afiliación** como la facultad ciudadana para adherirse de manera formal a una determinada agrupación o partido político.

Dentro del derecho de afiliación se encuentra el relativo a **ocupar algún cargo interno** del partido político, dado que en él está inmersa la oportunidad de contar con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, como se advierte de la jurisprudencia de rubro: DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.[[26]](#footnote-26)

**2.2. Paridad en la renovación de las dirigencias partidistas.**

La participación de la mujeres al seno de los órganos decisorios de los partidos políticos ha sido escasa; incluso, su presencia en las estructuras organizativas sigue un padrón piramidal, ya que en la base es donde se concentran un mayor número de mujeres (aproximadamente 50%), mientras que en los cargos de liderazgo de los Comités Ejecutivos de los partidos políticos siguen subrepresentadas, dado que no ha rebasado más del 20%.[[27]](#footnote-27)

Por ello, ha existido la necesidad de implementar medidas para garantizar su pleno goce y ejercicio. En ese sentido, el artículo 41, de la Constitución Federal, establece la lógica de inclusión del **principio de paridad** **en materia electoral**, el cual se proyecta como una extensión el principio de igualdad entre hombres y mujeres establecido en el artículo 4° de la propia Carta Magna.

La parte proporcional del precepto constitucional en cita, en lo que al caso importa, dispone:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, **así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros,** en candidaturas a legisladores federales y locales.

Cabe mencionar que la paridad se ha optimizado no sólo para lograr un equilibrio en la postulación de candidaturas e integración de órganos de representación popular (como expresamente se indica en el texto constitucional), sino que **se ha orientado como un principio que irradia en toda participación política de la mujer y en todos los ámbitos de la vida política como ocupar un cargo partidista.**

Ello, en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia y criterios emitidos por esta Sala Superior.

En efecto, a consecuencia de la inclusión del principio paritario a nivel constitucional, se encomendó al legislador ordinario –conforme a la fracción II del artículo segundo transitorio del Decreto de reformas y adiciones constitucionales de 2014- regular el principio de igualdad en materia política.[[28]](#footnote-28)

En el artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos dispone que los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación de la ciudadanía en la **vida democrática**, contribuir a la integración de los órganos de representación políticay, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

El párrafo 3, del citado precepto legal indica que los partidos políticos promoverán la cultura democrática de la ciudadanía y buscarán la **participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos partidistas**.

El artículo 37, párrafo 1, inciso e), de la mencionada ley general, refiere que la declaración de principios de los partidos políticos deberá contener la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En los artículos 35 y 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se dispone que para la participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas, las autoridades del Estado están obligadas a **promover la participación y representación equilibrada entre géneros dentro de las estructuras de los partidos políticos**.[[29]](#footnote-29)

Por otro lado, en diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar una mejor y mayor participación política de las mujeres, así como eliminar barreras u obstáculos para el logro de una participación en condiciones de igualdad en ese ámbito.

El artículo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto.

El artículo 24, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.

El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de *Belém Do Pará*") dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.

El artículo 3, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (*CEDAW, por sus siglas en inglés*) señala que los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de mil novecientos noventa y cinco[[30]](#footnote-30) incluyó como uno de sus objetivos estratégicos para lograr la efectiva igualdad de las mujeres *“la adopción de medidas para garantizar a la mujer la igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones”*.

En ella, se puso énfasis en las medidas que debían ser adoptadas por los partidos políticos, a los que se les llamó a examinar sus estructuras y procedimientos para eliminar las barreras que discriminan directa o indirectamente la participación de las mujeres, así como a establecer iniciativas para que las mujeres participen en **todas sus estructuras de decisión, incluida la dirección de los partidos políticos** y en los procesos de nombramiento por designación y elección.

En el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, entre otras cuestiones, acordaron desarrollar políticas permanentes para que los partidos políticos **incorporaran el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos, así como la participación igualitaria**, el empoderamiento y liderazgo para alcanzar la paridad de género como política de Estado.

A ello, se sumó la búsqueda de un compromiso para que los partidos políticos adoptaran **acciones positivas,** estrategias y reformas organizativas internas para alcanzar una **participación paritaria de la mujer en las estructuras internas**.[[31]](#footnote-31)

En armonía con lo anterior, la Sala Superior recientemente ha determinado que el principio de paridad es exigible en la conformación de los órganos de dirigencia partidista.

En el juicio ciudadano **SUP-JDC-369/2017 y acumulados**[[32]](#footnote-32) este órgano jurisdiccional efectuó la interpretación sistemática de la normativa electoral,[[33]](#footnote-33) por la que concluyó que el establecimiento del principio de paridad de género que deben observar los partidos políticos en la renovación de sus dirigencias representa una **garantía mínima para la militancia de participar en condiciones de igualdad en todos los procesos de selección que se celebren al interior de los partidos,** puesto que no encontraría explicación, el hecho de que solamente se les obligue a cumplir la paridad en la postulación de algún cargo de elección popular y no así para contender a un cargo intrapartidista.

En este sentido, este órgano jurisdiccional llegó al convencimiento que la paridad de los géneros, la participación política y la igualdad entre hombres y mujeres constituyen ejes centrales para materializar los derechos político electorales, dentro de los cuales se encuentra el derecho de afiliación, el cual comprende, entre otras vertientes, la posibilidad de formar parte de los órganos internos de los partidos políticos.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41, segundo párrafo de la Base I, de la Constitución Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.[[34]](#footnote-34)

Es decir, nuestro sistema electoral reconoce a los partidos como entidades de interés público por medio de los cuales (además de las candidaturas independientes), se ejercita la democracia y se concretan los derechos político electorales de la ciudadanía.

Además, el propio precepto constitucional[[35]](#footnote-35) reconoce el principio de auto organización y auto regulación de los partidos políticos, el cual exige a los partidos políticos una estructura democrática electa bajo criterios democráticos delineados por la propia legislación electoral vigente.

En lo que al caso interesa destacar, el 43, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos[[36]](#footnote-36) dispone que los partidos políticos deben contar con una estructura organizativa y territorial permanente, así como con órganos de representación en cada nivel nacional, estatal y municipal.

Un aspecto relacionado con su estructura democrática, consiste en la obligatoriedad que tienen los partidos políticos de renovar sus dirigencias conforme a criterios democráticos.

De los artículos 3, párrafo 3; 37, párrafo 1, inciso e) y artículos 39, incisos d) y e), de la citada ley general[[37]](#footnote-37), se advierte que la declaración de principios y los estatutos de los partidos políticos deben contener las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, garantizando la participación efectiva de ambos géneros en su integración y promoviendo la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

En ese sentido, es obligación de los partidos políticos respetar y garantizar la paridad de género en la renovación de las dirigencias (nacionales, estatales y municipales) en todos sus cargos partidistas.

**2.3. Principio de paridad en la fórmula para la renovación de las o los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Partido de la Revolución Democrática.**

El principio de paridad de género establecido en el artículo 8, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, le es aplicable a la fórmula para la elección de la o el titular de la Presidencia y Secretaría Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, al tratarse de uno de los órganos máximos a nivel nacional del partido político.

En el citado precepto estatutario, incisos a), e), primer párrafo, y j), se establece que las reglas democráticas que rigen la vida interna del partido se sujetarán, entre otros, a los siguientes principios básicos:

a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los mismos derechos y obligaciones;

e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los órganos de dirección en todos sus niveles, así como en sus Comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos autónomos y en todas las candidaturas de elección popular, garantizando en todos los casos la citada paridad.

j) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las acciones afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo jóvenes, indígenas y migrantes;

La porción estatutaria revela que el Partido de la Revolución Democrática cuenta con una regla particular que garantiza la paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles, lo cual debe interpretarse armónicamente con otras normas de dicho instituto político, principalmente aquéllas que prevén la forma de elección de los órganos directivos del partido.

La paridad de género en la integración de los órganos de dirección responde a la línea política de inclusión y tutela que el partido promueve como base de sus ideales y propuestas políticas, como puede verse en su Declaración de Principios y Programa de Acción:

*- Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática.*

*4.3.4. El Partido y las mujeres.*

Las y los militantes del PRD, así como sus dirigencias en todos sus niveles y representantes populares, asumimos, con base en nuestra vocación igualitaria, el respeto y obligación a llevar a cabo todas nuestras acciones y programas bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva, transversalidad y paridad de género, así como el principio de despatriarcalización.

Por igualdad sustantiva entendemos la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho formal. Luchamos por modificar las circunstancias que impiden a las personas el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales y de política pública.

Por perspectiva de género, la eliminación de las causas de la presión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas sobre la base del género. En este sentido promovemos la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, para contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

La transversalidad de género, la aceptamos como el proceso de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y programas, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres.

Por paridad de género, el reconocimiento como uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, así como, en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, para lograr erradicar la exclusión estructural de las mujeres. En particular se hace indispensable obligarnos a la paridad de género de manera integral en las candidaturas que deben abarcar tanto las de mayoría relativa, las de representación proporcional y ayuntamientos, así mismo en la conformación de las estructuras de los distintos niveles de gobierno.

Por tanto, pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo.

Además, nuestro Partido asume el compromiso de transformar las dinámicas, rutinas, normas, así como la organización y liderazgo masculino y femenino que prevalece en la vida política interna y externa de nuestro Partido. Nos comprometemos a respetar estrictamente los principios arriba señalados a todos los niveles de nuestra organización partidaria, en su representación popular y en la elección de candidaturas y nos oponemos a cualquier conducta engañosa y simuladora que impidan el avance a una verdadera equidad entre mujeres y hombres.

*- Programa del Partido de la Revolución Democrática.*

*INTRODUCCIÓN*

El objetivo fundamental del Partido de la Revolución Democrática es la conquista de una sociedad democrática, libre, incluyente, justa, con igualdad social, en el marco de la independencia nacional y el respeto a los derechos y la diversidad humanos, a la equidad entre los géneros y a la naturaleza.

[…]

*I. UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS*

*20. Transversalidad en la perspectiva de género y paridad*

La transversalidad y la paridad en la perspectiva de género deben ser políticas de Estado en respuesta al compromiso adquirido por nuestro país al firmar y ratificar tratados y convenciones internacionales que incorporan las acciones afirmativas como instrumento fundamental para tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales, a través de la armonización de leyes y de políticas públicas de aplicación obligatoria, que garanticen el acceso de todas las mujeres y las niñas al pleno goce de todos sus derechos, así como el avance en el ejercicio de su ciudadanía y sus libertades.

Por lo anterior, el PRD y sus gobiernos deberán asegurar la igualdad sustantiva y efectiva, así como la no discriminación y una vida libre de violencia de las mujeres durante todo su ciclo de vida a través de las políticas públicas.

[…]

Esta Sala Superior observa que, además de sus obligaciones constitucionales y legales en la materia, es intención del Partido de la Revolución Democrática garantizar en la mayor medida posible la paridad de género, no sólo en la postulación de cargos de elección popular, sino también en la integración de sus órganos de dirección, entre los que se encuentra el Comité Ejecutivo Nacional.

En efecto, de conformidad con el artículo 34, fracción X, del Estatuto, el Comité Ejecutivo Nacional es un órgano nacional de dirección en términos del citado precepto, el cual señala que la estructura orgánica del partido contará con las instancias colegiadas de dirección, representación y ejecutivas, entre otras, incluyendo al Comité Ejecutivo Nacional.

Cabe destacar que esta Sala Superior ha sostenido que se debe distinguir entre órganos formalmente directivos del partido[[38]](#footnote-38); esto es, los que se encuentran expresamente reconocidos como tales en la normativa partidaria, y los órganos materialmente directivos, lo cuales dadas sus funciones, características y requisitos para ser miembro del mismo, se considera que realiza **funciones relevantes y determinantes en la vida interna del partido político**.

En ese sentido, en términos de lo establecido en el artículo 256 del Estatuto, son requisitos para ocupar cualquier cargo de dirección dentro del partido, ser afiliada o afiliado con todos sus derechos vigentes, y estar al corriente en el pago de las cuotas, además de los requisitos que exige cada cargo.

Para el caso de la *Presidencia* y *Secretaría General* del Comité Ejecutivo Nacional, el inciso a), del citado precepto estatutario exige, además, cubrir por lo menos uno de los siguientes requisitos: haber formado parte de un órgano ejecutivo a nivel Estatal o Nacional, haber sido miembro del Consejo Nacional, haber ocupado un cargo de elección popular del Partido o contar con el aval del veinticinco por ciento de los Consejeros Nacionales.

Ahora, de conformidad con el artículo 101 del propio Estatuto, el Comité Ejecutivo Nacional se integra por un titular de la Presidencia Nacional; otro de la Secretaría General; por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido en el Congreso de la Unión; y veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional, mediante el sistema de Planillas.

Igualmente, en el Estatuto del partido se señala que el Comité Ejecutivo Nacional realiza funciones relevantes y determinantes en la vida interna del partido político, porque, entre otras cuestiones, en el artículo 103 del Estatuto se prevé que será el representante del partido político, con facultades ejecutivas, de supervisión y de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas.

Con apoyo en lo anterior, interpretando las normas estatuarias del Partido de la Revolución Democrática con perspectiva de género, la Sala Superior considera que si el partido político, expresamente señaló en su normativa que se debe garantizar la paridad vertical de género en los órganos de dirección en todos sus niveles, tal circunstancia incluye a las o los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, al tratarse del máximo órgano de representación del partido político y porque **el método, forma de elección y funciones también permiten que le sean aplicables los principios de paridad**.

En efecto, dentro de las atribuciones del o la titular de la*Presidencia Nacional*[[39]](#footnote-39) destacan: presidir el Comité Ejecutivo Nacional y conducir sus trabajos; convocar a las reuniones; representar legalmente al partido; adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional; presentar ante el Consejo Nacional o al Pleno del Comité los casos políticos de urgente resolución; ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional, así como las emitidas por el propio Comité; manejar las finanzas y buscar la construcción de consensos y políticas públicas.

En tanto que, las correspondientes al titular de la *Secretaría General*[[40]](#footnote-40) son las siguientes: coordinar y organizar, en acuerdo con el Presidente Nacional, el trabajo de las Secretarías y comisiones del Comité Ejecutivo Nacional; sustituir al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo en sus ausencias temporales, mientras éstas no sean mayores de un mes; coordinar la actividad interna del Partido en a nivel nacional; y manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Se observa que, con independencia de la distribución de funciones y atribuciones de cada uno de los cargos partidistas en cita, su ejercicio, de modo alguno, está condicionado a algún género en particular; por el contrario, dada la importancia de las funciones, ambos géneros deben compartir la titularidad los cargos de liderazgo al seno del Partido de la Revolución Democrática como una expresión del ejercicio paritario del derecho de afiliación de la militancia de ese partido político, ya que garantiza que tanto hombres como mujeres accedan realmente a tales cargos partidistas.

En este punto, resulta necesario destacar que la circunstancia relativa a que en el último párrafo del artículo 101, del Estatuto en cita, señale que, en los veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional por el sistema de planilla, siempre se respetará la paridad de género, no debe interpretarse en el sentido de que tal obligación de postulación paritaria resulta de exclusiva observancia para las planillas.

Lo anterior, porque la norma referida en lo tocante a la paridad, debe entenderse en armonía con el artículo 8, de los propios estatutos, en tanto, las disposiciones del mismo ordenamiento coexisten y, por ende, son exigibles a las elecciones de los distintos cargos partidarios, incluyendo a los órganos cupulares.

Ello, porque la finalidad de la paridad es el adecuado equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, en el caso, en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos y, con ello, lograr la participación política efectiva en la toma de decisiones del partido, en un plano de igualdad sustancial, con el objetivo de consolidar la paridad de género como práctica política del partido.

Ahora, respecto a la forma de elección, el artículo 269, del propio Estatuto[[41]](#footnote-41) establece los parámetros para los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.

Señala que la postulación será mediante **fórmula,** la cualserá electa mediante Consejo Electivo de por lo menos el sesenta por ciento de votos aprobatorios de las y los Consejeros presentes.

Asimismo, establece como **métodos** de selección, los siguientes:

1. Por *votación universal, directa y secreta* de todos los afiliados del ámbito correspondiente. En este caso, la fórmula que obtenga al menos el sesenta por ciento de la votación válida le corresponderá la asignación de ambos cargos directivos. De no ser así, ocupará la Presidencia quien obtenga la mayoría de los votos y la Secretaría General quien obtenga la primera minoría de votos.

2. Por *votación de los Consejeros.* En el caso de este método la elección de los titulares serán electos por medio de votación libre, directa y secreta en urna por los Consejeros del ámbito respectivo por al menos el sesenta por ciento de las y los Consejeros presentes y mediante el sistema de rondas. Si en la primera ronda ninguna fórmula obtiene el porcentaje establecido por el presente inciso, se procederá a realizar nuevas rondas de votación hasta que se alcance el citado porcentaje de votación, sin que se cuenten las abstenciones.

3. Por *candidatura única* presentada ante el Consejo. Ahora, en estricta observancia a sus propios principios, declaraciones y estatutos –interpretados con perspectiva de género y con una visión progresista-, el Partido de la Revolución Democrática debe implementar las medidas tendentes a lograr la integración paritaria de sus órganos partidistas.

Para el caso concreto, es relevante mencionar que la forma de elección mediante fórmula de candidatura única –que fue la que se usó-, puede garantizar la integración paritaria en los cargos de liderazgo del partido político, ya que permite la postulación de un género para el cargo de presidente y, el otro, para la Secretaría General, sin que se altere alguna de las reglas para la elección previstas en el citado artículo 269, estatutario.

Al contrario, esta circunstancia optimiza el principio constitucional de paridad tanto en un aspecto cuantitativo y cualitativo, puesto que lo que busca es la participación política efectiva en la vida política del país de hombres y mujeres, en un plano de igualdad sustancial, sin favorecer a un género u otro en particular, dado que lo que procura es un equilibrio razonable entre ellos.

Ello, porque, como se ha expuesto, la paridad es una exigencia de la democracia representativa y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad; por tanto, busca lograr una situación permanente en la que el poder político sea compartido por hombres y mujeres a través de medidas especiales que logren tal objetivo.

En ese sentido, conforme con el artículo 8, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el propio instituto político se encuentra vinculado al cumplimiento del principio de paridad de género en la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.

Sin que pase inadvertido que, al resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-832/2013 y su acumulado, la Sala Superior, en su anterior integración, haya sostenido que, dada la naturaleza de los cargos de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática, no podía considerarse que en su designación operara el principio de paridad de género.

Ello porque, por una parte, en aquel asunto la problemática consistió en dirimir si debía tomarse en cuenta al Presidente y al Secretario General de ese instituto político, para efectos de conformar la paridad de género en la integración del Secretariado y Comisión Política Nacional, órganos de dirección de los cuales son integrantes dichos funcionarios partidistas; empero, no se analizó el punto concreto a si en la renovación específica de los cargos de presidente y secretario general debía observarse el principio de paridad.

Además, con independencia de las diferencias antes apuntadas, la nueva integración de la Sala Superior se aparta del criterio de que los cargos de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática son unipersonales y que, por ello, no puede considerarse que en su designación opere el principio de paridad de género.

Lo anterior, porque, como se ha establecido, al analizar el punto concreto que es materia de este juicio ciudadano (no examinado en aquel precedente), la nueva integración de la Sala Superior, juzgando el asunto con perspectiva de género y con una visión progresista encaminada a lograr la paridad sustantiva, llegó a la conclusión de que las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática deben interpretarse en forma armónica, considerando también la línea política de inclusión y tutela en favor de las mujeres, a fin de garantizar en la mayor medida posible la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección.

Cabe agregar que este nuevo criterio también encuentra justificación, porque en la fecha en que se resolvió el asunto SUP-JDC-832/2013 y su acumulado, en el artículo 8°, párrafo primero, inciso e), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática se establecía, en forma genérica, que el Partido garantizaría la paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles[[42]](#footnote-42).

Sin embargo, el aludido instituto político reformó el invocado Estatuto en el XIV Congreso Nacional Extraordinario[[43]](#footnote-43) celebrado en la ciudad de México, los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil quince y, en el artículo 8°, párrafo primero, inciso e), en su parte conducente, con motivo de dicha reforma, se dispuso que *El Partido garantizará la paridad de género* ***vertical y horizontal****, tanto en los órganos de dirección en todos sus niveles, así como en sus Comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos autónomos y en todas las candidaturas de elección popular, garantizando en todos los casos la citada paridad.*

Lo anterior implica que, si bien en el dos mil trece ya se preveía en el referido Estatuto que se debería garantizar la paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles, lo cierto es que la reforma al mencionado ordenamiento efectuada en el dos mil quince, tuvo como propósito robustecer y precisar que dicha paridad de género debería ser vertical y horizontal en todos los niveles de los órganos de dirección.

Por tanto, se advierte que la intención de ese instituto político, con motivo de esa reforma, era garantizar formal y materialmente que todos los órganos de dirección del Partido de la Revolución Democrática (incluyendo la Presidencia y la Secretaría General), se rigieran en su integración, con la plena observancia del principio de paridad de género, y exista certidumbre para la militancia de que dichos órganos no tienen excepción para no integrarse paritariamente.

En efecto, la actual normativa estatutaria de ese instituto político, es categórica en establecer que la paridad de género, deberá observarse en la integración de todos los niveles de los órganos de dirección, lo que la hace diferente a lo regulado en el dos mil trece, precisamente porque la normativa actual, es vinculatoria en aplicar dicha paridad de manera vertical y horizontal, lo que denota una puntualización que no se preveía explícitamente antes de esa reforma, de ahí que tal cuestión, sea un aspecto que evidentemente no fue tratado al resolverse el asunto SUP-JDC-832/2013 y acumulado, al ponerse de relieve que, la actual normativa estatutaria, no deja ningún resquicio de exclusión para aplicar, sin excepción alguna, la paridad de género en todos los órganos directivos.

**2.3. Caso concreto.**

En la especie, de las constancias del expediente se advierte esta Sala Superior, mediante la resolución del juicio ciudadano SUP-JDC-633/2017, ordenó a la Mesa Directiva del Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática para que realizaran los actos tendentes a la elaboración, emisión y publicación de la convocatoria relacionada con el proceso de renovación de cargos de dirección de dicho instituto político.

Posteriormente, actuando de oficio en el citado juicio ciudadano, esta Sala Superior abrió un incidente de imposibilidad de cumplimiento de la ejecutoria y, en esencia, consideró que el proceso electoral federal inició el pasado ocho de septiembre, razón por la que, ante la contumacia del Partido de convocar en tiempo y forma la renovación de sus órganos internos, era necesario indicarle plazos ciertos para la realización de su proceso interno.

En ese sentido, se señaló que el partido político contaba con sesenta días naturales para desarrollar los actos establecidos en su norma interna, desde la emisión de la convocatoria, preparación de la elección, jornada electoral, escrutinio y cómputo (en su caso) resolución de conflictos *intra* partidistas, así como la toma de protesta de la nueva dirigencia nacional.

En cumplimiento a lo anterior, el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó la convocatoria para la elección de la Presidencia y Secretaría General e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.[[44]](#footnote-44)

Tomando en cuenta el contexto extraordinario, se estableció que el periodo de duración sería por un año y el método de elección para los cargos de Presidente y Secretario General sería el de Consejo Nacional Electivo, mediante fórmula de candidatura única, establecido en el artículo 269, inciso c), del Estatuto[[45]](#footnote-45).

Ahora, del punto *resolutivo del Décimo Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, con carácter electivo, relativo a la elección de Presidente Nacional y Secretario General Nacional del Partido de la Revolución Democrática,* celebrado el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, se advierte que se realizó el registro único de la fórmula integrada por Manuel Granados Covarrubias para Presidente y Ángel Clemente Ávila Romero para Secretario General. Asimismo, observa que dicha fórmula resultó electa por votación unánime de los Consejeros presentes.

Con lo expuesto, esta Sala Superior arriba a la conclusión que, como lo afirma la actora, en la instrumentación del marco normativo aplicable para la renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática no se observó ni se garantizó el principio de paridad, puesto que la fórmula mencionada se integró con dos hombres y, conforme con el artículo 8, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el propio instituto político se encontraba obligado al cumplimiento del principio de paridad de género en la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.

Sin que sea óbice, la circunstancia de que se hubiese tratado de fórmula única, ya que tal mecanismo no puede servir de sustento para pretextar el cumplimiento paritario, ya que se trata de dos distintos cargos partidistas que pueden postularse en fórmula mixta para cumplir con la paridad.

No obstante, como se adelantó, en el caso concreto, resulta inviablela pretensión de que se revoquen los nombramientos para que se elija una fórmula compuesta por un hombre y una mujer, porque, en aras de otorgar seguridad jurídica y protección a los principios que rigen los procesos electorales, la obligación de que se cumpla el principio de paridad de género se exigirá para el próximo proceso de renovación de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Esta conclusión encuentra apoyo en las consideraciones siguientes:

En principio, debe tenerse presente que, en septiembre de dos mil diecisiete, inició el proceso electoral en el ámbito federal; además, en la fecha en que se dicta la presente sentencia, también han iniciado los respectivos procesos electorales en diversas entidades federativas.

Así, el Partido de la Revolución Democrática, al igual que los demás partidos políticos, debe tener enfocados sus esfuerzos en este momento al logro de sus fines y al desarrollo de los citados procesos electorales que se encuentran en curso.

En consecuencia, con el objeto de que el Partido de la Revolución Democrática continúe con la ejecución de las actividades antes indicadas –que en la actualidad se consideran prioritarias-, se estima que no es viable ordenarle que lleve a cabo de inmediato la renovación de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional.

Aunado a lo anterior, debe ponderarse que, entre la fecha en que culminará el proceso electoral federal en curso (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho) y aquélla en que concluye el periodo de un año para el que fueron electos el presidente y el secretario general de ese partido político[[46]](#footnote-46), se contará con aproximadamente tres meses para organizar todo el procedimiento de la elección interna de la aludida dirigencia partidista. Es por ello que se considera que el presidente y el secretario ejecutivo designados deben concluir con su encargo.

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, se establece que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Asimismo, en esa Base I, se señala que se reconoce el derecho a los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.

En esa virtud, se puede advertir que, por disposición constitucional, los partidos políticos nacionales tienen reconocido el derecho de participar en las elecciones estatales y municipales, lo cual es congruente con su finalidad primordial, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Por ende, las elecciones son el centro de atención de los partidos políticos, porque en ellas se permite de manera ordinaria, pero no de forma exclusiva, una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, sea tanto en el ejercicio del derecho de votar como el de ser votado a un cargo de elección popular, caso en el cual los partidos políticos están interesados en que los ciudadanos accedan a los mismos.

En consecuencia, es evidente que, ante la proximidad de las elecciones, durante la preparación, desarrollo y calificación de las mismas, los partidos políticos destinan los recursos humanos y materiales que están a su disposición, a fin de posicionar a sus candidatos y obtener los mejores resultados.

En este sentido, el inicio del proceso electoral implica que los partidos políticos nacionales, en ejercicio del derecho que la Constitución Federal les reconoce para participar en las elecciones federales, estatales y municipales, inician una serie de actos que tienen como propósito la elección de sus candidatos, hecho lo cual centran su atención en la promoción de sus documentos básicos y candidatos que contenderán el día de la jornada electoral, para lo cual, a fin de obtener el mayor número de votos posibles, realizan las campañas electorales conducentes.

Una vez que se realiza la elección, los partidos políticos están al pendiente de los resultados electorales y, de ser el caso, preparan los medios de impugnación que correspondan en el ámbito estatal y federal. Asimismo, durante la preparación de la elección, los partidos políticos están al pendiente de las actuaciones de las autoridades electorales, así como de los actos que llevan a cabo otros partidos políticos y candidatos, para, en su caso, impugnar las irregularidades que, en su concepto, vulneran los principios rectores de toda elección.

Esto es, las etapas de inicio, desarrollo y conclusión de una elección, son momentos en los cuales los partidos políticos centran su atención en elegir a sus candidatos, resolver controversias derivadas de sus procedimientos internos de selección, hacer actos de precampañas y campañas electorales, revisar las actuaciones de las autoridades electorales y demás actores políticos, así como elaborar los medios de impugnación estatales y federales que correspondan.

En la especie, el Partido de la Revolución Democrática, como partido político nacional que es, tiene el derecho a participar en la elección a celebrarse en el ámbito federal y en los procesos electorales de las distintas entidades federativas, con el consecuente desarrollo de los procedimientos atinentes que tienden a elegir los candidatos a los respectivos cargos de elección popular.

Luego, el Partido de la Revolución Democrática como partido político y entidad de interés público, tiene como propósito promover la participación del pueblo en la vida democrática, permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y contribuir a la integración de los órganos de representación popular.

En tal virtud, el actual proceso electoral que se desarrolla tanto en el ámbito federal como en otras entidades federativas, implicará que el aludido instituto político centre su atención en el fin principal para el que fue creado; es decir, permitir que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder público, motivo por el cual, desde el inicio de esos procesos electorales participará en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones.

Incluso, es de destacarse que llevará a cabo actos de precampaña, concluidos los cuales, centrará su atención en la campaña electoral en miras de la jornada que se celebrará el primer domingo de julio de dos mil dieciocho y, posteriormente, elaborará o atenderá, de ser el caso, los medios de impugnación en los cuales se controviertan los resultados de las elecciones.

En ese periodo, es decir, desde el inicio de los procesos electorales hasta la resolución del último medio de impugnación, el Partido de la Revolución Democrática estará, además, al pendiente de las actuaciones de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, nacionales, federales y estatales, a fin de vigilar que se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad.

Por tanto, el Partido de la Revolución Democrática destinará la mayor parte de sus ministraciones al cumplimiento de su fin primordial; esto es, a la participación en las elecciones que se llevarán a cabo precisamente durante el presente año.

Con base en lo expuesto, se considera que el citado instituto político en este año, y por lo menos hasta la conclusión de los referidos procesos electorales, no debe destinar recursos humanos y materiales en la renovación de su actual dirigencia, como lo es la Presidencia y la Secretaría General, ya que implicaría una carga excesiva y una distracción en el ejercicio de su derecho a participar en la elecciones federales, estatales y municipales.

Lo anterior, porque el procedimiento de renovación de una dirigencia partidista es complejo, debido a que para ello es necesario una serie de actos, como son: la emisión de la convocatoria, la definición del método para renovar la dirigencia, de ser el caso, los actos de campaña de los candidatos para obtener la preferencia de la militancia, la realización, en su caso, de la jornada electoral, y la resolución de los medios de impugnación partidista que se pudieran presentar.

En esta tesitura, se puede advertir que, en el asunto de mérito, es preferible que no existan procedimientos simultáneos (electorales constitucionales e internos de dirigentes), porque ello atiende además a que, los militantes del Partido de la Revolución Democrática se enfoquen a la elección y participación de una candidatura de elección popular y no desvíen su atención en la elección de una dirigencia partidista, de tal manera que no se confundan ambos procedimientos.

Por ende, la finalidad de evitar la concurrencia de ambos procedimientos (de renovación de dirigentes y de los de índole constitucional), obedece también a la necesidad de que los militantes tengan la certeza en cuál de ellos van a participar, conozcan qué propaganda atañe a cada procedimiento y qué actos están vinculados de manera específica con cada uno de ellos.

De tal manera que, en razón de la temporalidad o del periodo electoral que transcurre en el país, es necesario que dicho instituto político centre su atención en las elecciones que se han aludido y, posteriormente, su militancia se centre en la elección de los cargos partidistas en su respectiva conformación, con la aplicación de la perspectiva de género.

Por tanto, dado que en este año se desarrollan los referidos procesos electorales federal, estatales, municipales, en los que el Partido de la Revolución Democrática, como partido político nacional tiene el derecho de participar y destinará de manera primordial y principalmente los recursos humanos y materiales de los que dispone, a fin de hacer efectivos los propósitos de promover la participación del pueblo en la vida democrática, colaborar en la integración de los órganos de representación popular y facilitar a los ciudadanos el acceso al poder público, es que existe una justificación para que, por lo menos hasta que fenezca el periodo para el cual fueron electos los actuales presidente y secretario general de ese instituto político, sea factible un cambio de dirigencia, observando al respecto en su integración, la paridad de género.

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, en el cual se reconoce el derecho de los partidos políticos nacionales, como lo es el Partido de la Revolución Democrática, de participar en los mencionados procesos electorales, de ahí que, el mencionado partido centrará sus actuaciones en las finalidades constitucionalmente previstas, motivo por el cual, exigir de nueva cuenta, en este momento, una renovación de su Presidencia y su Secretaría General, implicaría, como se sostuvo con antelación, una carga excesiva y una distracción a esos fines.

Asimismo, lo expuesto se encuentre conforme con lo sostenido por esta Sala Superior, al resolver el expediente identificado con la clave **SUP-JDC-12/2007**, en el cual se estableció que, por la naturaleza especial de los partidos políticos como entidades de interés público, en términos de lo que establece el artículo 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las representaciones partidistas deben continuar en el ejercicio de su encargo a efecto de que puedan llevarse a cabo las finalidades que la Constitución y las leyes encomiendan a dichos institutos políticos; criterio que también se sostuvo en la sentencia dictada en el expediente número **SUP-JRC-222/2004**.

Más aún, esta Sala Superior, al resolver el expediente con clave **SUP-JRC-33/2009**, analizó la renovación del Comité Directivo Estatal de Convergencia en Veracruz (para tal efecto, se nombró *ex profeso* una Comisión Ejecutiva Estatal por un año, entre otras cuestiones, para hacerse cargo de las elecciones que estaban en curso y de la renovación de esa instancia partidaria) y, se determinó que el aludido partido tenía razón cuando afirmó que, para fijar el plazo en que debían realizarse los actos tendentes a nombrar a los dirigentes partidistas en ese Estado, se debía atender al hecho de que se estaba celebrando el proceso electoral federal para la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados; por lo que, en todo caso, los cuatro meses que le fueron concedidos se debían fijar a partir de la conclusión de los cómputos distritales de la elección de diputados federales.

En este sentido, en dicha ejecutoria, se estableció que, lo **fundado** de ese concepto de agravio devenía en que, al estar en curso el proceso federal para la elección de diputados al Congreso de la Unión, tal evento implicaría que el partido requiriera enfocarse en buena medida, a realizar todas aquellas actividades que le permitieran obtener un mayor número de votos para ganar la elección de que se trata, y su eventual impugnación en caso de estimarse necesario, evidentemente, sin que esto significara que habría de descuidar sus actividades ordinarias; empero éstas las debería programar de tal manera que no se alterara su eficaz participación en los comicios indicados.

Por tanto, en esa sentencia se indicó que, el término de cuatro meses establecido por la responsable, era dable que debía contabilizarse a partir de que le fuera notificado de dicha ejecutoria, tomando en cuenta que para ese momento habrían concluido las etapas más activas del proceso electoral, como son, básicamente, la elección de precandidatos y candidatos, así como las campañas electorales.

Incluso, se destaca que esta Sala Superior, al resolver el expediente identificado con la clave **SUP-JDC-14/2007**, analizó aspectos vinculados con el proceso de selección de la dirigencia nacional y los de los consejos locales del Partido Revolucionario Institucional, en el cual se determinó que, con base en la normativa partidista, era dable garantizar que no concurrieran actos fundamentales del aludido proceso de selección, por la posible afectación y obstáculos que pudieran representar para tales procesos, la distracción de los esfuerzos materiales y humanos de los integrantes del partido en una demarcación, en más de un proceso electivo, de ahí que ello tuviera por objeto impedir que los procesos de elección de los órganos locales que tenían el imperativo de renovarse, no afectaran el proceso nacional.

En este sentido, del aludido precedente se desprende que, en concepto de este órgano jurisdiccional, es preferente que la militancia se aboque a un determinado procedimiento electivo intrapartidista, en caso de coexistir dos procedimientos internos y, evitar la posible afectación y obstáculos que pudieran representar para tales procesos, la distracción de los esfuerzos materiales y humanos de los militantes.

De lo expuesto, se infiere que, por mayoría de razón, cuando exista la concurrencia de diversos procedimientos electorales de índole constitucional y de manera concomitante una elección de dirigencia intrapartidaria (como ocurre en el asunto de mérito), también se debe privilegiar que la militancia se concentre en el procedimiento de elección constitucional, precisamente, porque se debe cumplir el fin de los partidos políticos, previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, relativo al derecho de participar en las elecciones estatales y municipales, lo cual es congruente con su finalidad primordial, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Por las razones aducidas, es que en el asunto de mérito, se considera que se debe cumplir el plazo por el cual fueron electos el presidente y el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que la militancia se enfoque en buena medida, a realizar todas aquellas actividades que le permitan obtener un mayor número de votos para ganar la elección de que se trate, y su eventual impugnación en caso de estimarse necesario; empero, una vez concluido tal periodo, en la próxima elección intrapartidista, se deben elegir de manera paritaria tales cargos, con objeto de que se continué la ejecución de las actividades propias de ese partido, para el logro de sus fines y de aquéllas necesarias para el desarrollo de los citados procesos electorales que actualmente se encuentran en curso.

Es importante reiterar que la renovación de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática se realizó para dar cumplimiento a la resolución incidental de once de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-633/2017. En esa resolución se evidenció que fue el partido político quien generó un retraso injustificado en la renovación de su dirigencia, lo que provocó que dicho proceso coincidiera temporalmente con los procesos electorales constitucionales.

En este sentido, esta Sala Superior precisó que dicha circunstancia no podía generar el incumplimiento del principio de renovación periódica de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, dado que este supuesto el propio instituto político debió prever, planear y ejecutar en ejercicio de su propia autonomía, sin que ello genere perjuicio a la militancia.

De ahí que resultaba imperioso que se garantizara el derecho de la militancia y se efectuara con la mayor inmediatez la renovación.

Una vez realizada la renovación, en los términos ordenados por esta Sala Superior, y atendiendo a la propia normativa partidista, dicho instituto político ha estado en posibilidad de participar en la preparación de la elección de los procesos electorales en curso.

Es decir, la renovación que tuvo lugar en el mes de diciembre de dos mil diecisiete, se efectuó una vez iniciados los procesos electorales federal y locales, dado que **el propio partido político generó** dicha irregularidad, siendo imperioso lograr el cumplimiento de las disposiciones estatutarias; así como de las resoluciones dictadas por esta Sala Superior.

Efectuada la renovación, se alcanza un estado de orden en el cumplimiento de la norma interna, que permite generar certeza dentro del instituto político en la determinación de quienes integran sus órganos de dirección, permitiendo que desplieguen sus facultades en el contexto del proceso electoral.

Empero, hay que destacar que, con independencia a que el emparejamiento con el proceso electoral atendió principalmente a la conducta contumaz de los órganos de dirección del propio partido, el grado de incidencia respecto de los procesos comiciales fue mínimo, dado que el plazo de sesenta días para la renovación ordenado por esta Sala Superior se cumplía el once de diciembre del año en curso, momento que se ubicó incluso al inicio de la precampaña en el caso del proceso federal (catorce de diciembre de dos mil diecisiete).

A partir de la experiencia que dan los diversos precedentes en esta cadena impugnativa, podría considerarse que el plazo mínimo en el que el partido político está en posibilidad de organizar nuevamente un proceso de renovación de sus órganos de dirección, en el que se respeten los derechos de sus militantes y las etapas y requisitos previstos en su normativa, sería de sesenta días naturales.

En esa lógica, de ordenar de nueva cuenta la renovación de dirigentes, ello implicaría que tuviera lugar en el mes de abril, cuando están en curso las campañas electorales en el proceso federal, lo cual no garantizaría la adecuada participación del partido, en dichos procesos.

En este sentido, ante el avance actual de los procesos comiciales, es claro que ordenar que inicien un proceso de renovación implicaría afectar al instituto político en las etapas que se encuentran en curso, como el registro de los candidatos y el desarrollo de sus respectivas campañas.

Por todo lo anterior, es que se considera que en estos momentos no es dable ordenar al Partido de la Revolución Democrática que lleve a cabo un nuevo proceso de elección de sus dirigentes.

De ahí que el Presidente y el Secretario General deben permanecer en sus cargos por el periodo extraordinario de un año por el que fueron designados, porque, conforme a lo razonado, ese es el tiempo necesario para que el Partido de la Revolución Democrática participe efectivamente en los procesos electorales (federal y locales) que se encuentran en curso y para que, una vez concluidos dichos procesos, se lleve a cabo la renovación de la dirigencia con base en sus propias normas estatutarias, poniendo especial atención al principio de paridad de género.

Por tanto, precede **confirmar** la resolución impugnada por las razones que se han expuesto.

Por lo expuesto y fundado, se

**RESUELVE**

**ÚNICO.** Se **confirma** la resolución impugnada por las razones expuestas en la presente ejecutoria**.**

**Notifíquese** conforme a Derecho.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por **mayoría** de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los Magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, quienes formulan voto en contra, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADA PRESIDENTA**  **JANINE M. OTÁLORA MALASSIS** | |
| **MAGISTRADO**  **FELIPE DE LA MATA**  **PIZAÑA** | **MAGISTRADO**  **FELIPE ALFREDO**  **FUENTES BARRERA** |
| **MAGISTRADO**  **INDALFER INFANTE GONZALES** | **MAGISTRADO**  **REYES RODRÍGUEZ**  **MONDRAGÓN** |
| **MAGISTRADA**  **MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO** | **MAGISTRADO**  **JOSÉ LUIS**  **VARGAS VALDEZ** |
| **SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**  **MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO** | |

**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN EN RELACIÓN CON EL JUICIO CIUDADANO SUP-JDC-20/2018[[47]](#footnote-47)**

Formulo el presente voto particular, ya que, si bien comparto la premisa normativa de la sentencia, no coincido con el efecto que se propone en la decisión aprobada por la mayoría en el sentido de confirmar el acto reclamado. Desde mi perspectiva es correcto el argumento central de sentencia en tanto que le otorga la razón a la actora porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está obligado por sus propios Estatutos a observar el principio de paridad en la postulación e integración de la fórmula del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de su Secretario General. Sin embargo, me aparto del efecto que propone la sentencia porque, desde mi perspectiva, sí es posible reparar la violación advertida en este proceso ya que el partido está en posibilidades de hacerlo sin que se le genere una afectación desproporcionada.

Para exponer mi posición, primero explicaré la posición mayoritaria y las razones que me llevan a compartir la premisa de la que parte. Después expondré por qué me aparto de las consideraciones en relación a que no es viable la pretensión en este momento y cuáles son las razones por las que, desde mi perspectiva, se debe cumplir con la paridad en este momento.

**1. Posición mayoritaria**

La mayoría determinó que el agravio de la actora era **fundado** porque no se garantizó el principio de paridad de género en la elección de los cargos mencionados. De acuerdo con el artículo 8, inciso e) de los propios Estatutos del PRD la fórmula electa de presidente y secretario general debió de haberse integrado por un hombre y una mujer.

Lo anterior porque esa norma impone la obligación al Partido de garantizar la paridad de género vertical y horizontal, **tanto en los órganos de dirección -en todos sus niveles-, así como en las Comisiones dependientes del CEN, en los** órganos autónomos y en todas las candidaturas de elección popular, garantizando en todos los casos la paridad.

Por lo tanto, el proyecto concluye que sí existe expresamente la obligación de garantizar la paridad vertical de género en los órganos de dirección de todos los niveles, lo que incluye a la Presidencia y la Secretaría General porque: a) la forma de elección (fórmula única) permite aplicar el principio de paridad b) las funciones de los cargos permiten que les sea aplicable el principio de paridad, al ser ambos cargos los de mayor liderazgo dentro del partido.

Sin embargo, la mayoría sostiene que la pretensión de revocar los nombramientos de presidente y secretario general es **inviable**, porque afectaría los principios que rigen los procesos electorales y la seguridad jurídica, de manera que esa obligación se debe concretar en la próxima elección de la dirigencia partidista, tomando en cuenta que los actuales dirigentes durarán únicamente un año en su puesto.

La sentencia sostiene que con ello se privilegia que los partidos políticos persigan las actividades fundamentales relacionadas con su participación en los procesos electorales de este año (presidencia, senadurías, diputaciones, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos).

La posición mayoritaria sostiene que es preferible que no existan procedimientos partidistas y constitucionales simultáneos, sino que se debe asegurar que el partido se enfoque a la elección y participación de las candidaturas de elección popular y no desvíe su atención en la elección de una dirigencia partidista que es compleja y que implica la actuación de los órganos directivos del PRD.

**2. Razones de mi voto**

Desde mi perspectiva la paridad de género, en la postulación e integración de la Presidencia y Secretaría General del CEN del Partido, es una obligación que el PRD tiene que observar, sin que haya razones que justifiquen que en el caso concreto deba dejarse esa norma sin efectos. Por el contrario, considero que debe buscarse el cumplimiento de la paridad y ordenar un procedimiento de nombramiento o sustitución que evite la menor intervención posible en el derecho de auto organización.

**2.1. El PRD tiene la obligación de postular e integrar paritariamente los cargos de la Presidencia y Secretaría General de su Comité Ejecutivo Nacional**

Comparto la premisa normativa del proyecto porque las normas fundamentales y la normativa partidista del PRD obligan a que la Presidencia y la Secretaría General del CEN se integren con la regla de paridad.

En efecto, el artículo 41 de la Constitución Federal, establece el principio de paridad en materia electoral, el cual es un subprincipio del derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres establecido en el artículo 4° Constitucional. En ese sentido, la paridad de género es una medida que busca garantizar condiciones igualitarias a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Los partidos políticos desempeñan un papel primordial en la participación política de las mujeres, pues son instancias encargadas de reclutar, crear, desarrollar e impulsar los liderazgos de las mujeres para participar en la vida política del país y para tener acceso a los cargos de elección popular.

De esta manera, conforme a una interpretación de la normas nacionales e internacionales, esta Sala Superior ha establecido que el derecho de las mujeres a participar en la vida política del país en condiciones de igualdad no se limita a la postulación de candidaturas y acceso a los cargos de elección popular, sino también aplica en la integración de los órganos de dirección al interior de un partido político.[[48]](#footnote-48)

Bajo esa lógica el PRD ha asumido el deber de impulsar el principio de igualdad sustantiva y paridad de género de manera amplia, pues en su declaración de principios reitera el compromiso “[d]e respetar los principios en todos los niveles de la organización partidaria, en su representación popular y en la elección de candidaturas, oponiéndose a cualquier conducta engañosa y simuladora que impida el avance a una verdadera equidad entre mujeres y hombres.”[[49]](#footnote-49)

En ese sentido, la sola previsión de impulsar el principio de igualdad sustantiva y paridad de género al interior de los partidos políticos es insuficiente para garantizar su ejercicio, por lo que además es necesario establecer mecanismos o medidas que busquen garantizarlo sustancial o estructuralmente.

Para atender esa obligación, el PRD contempló en su Estatuto (artículo 8, inciso e) la paridad de género horizontal y vertical tanto en los órganos de dirección en todos sus niveles, como en las Comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos autónomos y en todas las candidaturas de elección popular.

En el caso concreto, conforme al deber de los partidos políticos de darle un efecto útil a la paridad de género, la paridad horizontal contemplada en los estatutos del PRD garantiza que al menos el 50 % de los órganos de dirección, comisiones y órganos autónomos sean dirigidos por mujeres; y, la paridad vertical garantiza que, al menos el 50 % de los cargos al interior de cada órgano, sean integrados en su mayoría por personas del género femenino.

De acuerdo al artículo 101 de los Estatutos del PRD, el CEN, como órgano de dirección, se integra por el titular de la presidencia nacional, el titular de Secretaría General, veintiún integrantes y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del partido en el Congreso de la Unión.[[50]](#footnote-50)

Además, en el inciso d) el artículo 101 de los Estatutos indica que en el caso de los veintiún integrantes del CEN siempre se respetará la paridad de género, por lo que se considera un mandato estatuario permanente que el partido deberá tomar en cuenta para la conformación del CEN.

Sin embargo, esa última disposición no debe leerse como una norma que se aplica solo a esos 21 miembros y que excluye la paridad del resto de los integrantes del CEN. Esa norma únicamente hace referencia a que en esos órganos no hay excepciones para una integración no paritaria.

Asimismo, la necesidad de integración paritaria de la Presidencia y la Secretaría General deriva de que, al postularse por fórmulas, es el único supuesto en el que se pude aplicar la paridad vertical dentro del CEN. Para explicar lo anterior conviene hacer referencia a los métodos de elección respecto de cada uno de los integrantes es del CEN.

* *La Presidencia Nacional y Secretaría General*

Se utiliza el registro por fórmulas y en el proceso electivo correspondiente pueden elegirse los siguientes mecanismos:[[51]](#footnote-51)

* Registro de dos o más formulas cuyo límite será el número de corrientes de opinión registradas existentes y se aplica el voto universal, directo y secreto de la totalidad de afiliados.
* Registro múltiple de fórmulas con base en lo señalado en el párrafo que antecede, pero en este caso quienes eligen son los consejeros nacionales.
* Candidatura única que se refiere al registro de una sola fórmula.
* *Coordinadores de grupos parlamentarios*

Se eligen por los integrantes de los grupos parlamentarios del partido de ambas cámaras en las asambleas que para el efecto se realicen.

* *Veintiún integrantes que elige el Consejo Nacional*

El titular de la Secretaría de Jóvenes deberá ser electo por las dos terceras partes de los congresistas jóvenes, o en su caso, por las dos terceras partes de los consejeros jóvenes.

La elección de las veinte personas restantes se realizará conforme a listas que registren las distintas corrientes de opinión, utilizando para la asignación el mecanismo de representación proporcional. Las listas se integran respetando la paridad de género.[[52]](#footnote-52)

Así, del análisis de los diversos métodos de elección de la totalidad de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, se desprende que las únicas figuras electivas a las que les es aplicable la paridad vertical **es a la Presidencia Nacional y a la Secretaría General, esto en virtud de la modalidad de registro de fórmulas que se adopta para elegirlos**, que es a través fórmulas y con cargos distintos ordenados verticalmente.

En efecto, dada su naturaleza, es viable registrar a personas de distinto género en una misma fórmula y, además, es posible establecer mecanismos de postulación e integración paritaria en los casos en los que compiten dos o más fórmulas, como reglas de alternancia asociadas al resultado obtenido en las distintas rondas de votación previstas.

Bajo esa lógica, la paridad vertical contemplada en el artículo 8 inciso e) de los estatutos contempla la titularidad de la Presidencia Nacional y la Secretaría General, pues esta medida exige que, de los dos cargos, al menos uno se ejerza por una mujer. De esta manera, al ser estos cargos postulados a través de fórmulas, la paridad vertical garantiza que al menos una mujer ejerza uno de los dos cargos de mayor relevancia al interior del partido.

Adicionalmente, esta lectura de las normas partidistas corresponde con la necesidad de promover la participación de las mujeres al interior del partido en los cargos de mayor relevancia en la toma de decisiones y desarrollo de liderazgo político a través de medidas como la paridad vertical. De hecho, el propio partido ha realizado recientes esfuerzos para cumplir con la paridad.

Al respecto, del análisis de la historia del PRD, se advierte que dicho partido ha tenido en el cargo de la presidencia a cuatro mujeres, y quince hombres.[[53]](#footnote-53) En este sentido, si la paridad tiende a maximizar el derecho fundamental a la igualdad al interior de los partidos políticos, así como a generar órganos que se integren de forma más equilibrada entre hombres y mujeres, es consecuente que, atendiendo a una perspectiva contextual, se incremente la eficacia, la dinámica de trabajo y los fines que persiguen esos grupos.

Diversos estudios sobre el tema han demostrado que cuando los equipos son mixtos se incrementa la inteligencia colectiva y mejora la calidad de los resultados.[[54]](#footnote-54) No puede considerarse que la obligación de integración paritaria genere perjuicios al interior del partido, pues los órganos de dirección mixtos, tenderán, en principio, a la consecución de los fines del propio partido político.

**2.2. Disenso. No hay razones que justifiquen no aplicar la norma de paridad en el caso concreto**

Aun cuando estos razonamientos me llevan a compartir la premisa normativa de la sentencia, no comparto la argumentación de la posición de la mayoría porque en mi opinión, ordenar un proceso para lograr la integración paritaria de los cargos partidistas mencionados en este momento no supone necesariamente una intervención inviable, injustificada o desproporcionada en la auto organización del PRD.

Como punto de partida considero que no se trata de imponer una medida o acción afirmativa externa al partido político o que provenga de una decisión que no haya sido tomada por sus órganos internos. El caso concreto se encuadra desde la solicitud de una militante de hacer efectiva una norma partidista que se encuentra en una jerarquía superior al interior del instituto político, es decir en sus estatutos y atendiendo al contexto del propio partido.

Ese encuadre cambia la perspectiva de argumentación. No se trata de justificar una decisión externa, no prevista o novedosa para el instituto político. Desde mi perspectiva se trata de hacer efectiva una norma jurídica partidista, previa y que el propio PRD, en ejercicio de su autogobierno, ha establecido en su normativa de mayor jerarquía.

Lo ordinario es que cuando una norma es válida y se ha justificado su aplicación al caso concreto, no se necesita argumentar razones para cumplirla y ordenar su efectividad. En todo caso, la carga de la argumentación es para la postura que sostenga que una norma debe incumplirse en algún caso o cuando se considera que no debe hacerse efectiva.

Desde ese punto de partida, considero que las razones que sostuvo la mayoría no justifican el incumplimiento de la paridad, ni que la norma pierda efectividad en el caso concreto, tal como las desarrollo a continuación.

**2.2.1. La Sala Superior ya ordenó la renovación de la dirigencia partidista del PRD en el desarrollo del presente proceso electoral**

El veinticuatro de agosto, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-633/2017, en el que resolvió que: *a)* la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD había sido omisa en vigilar el cumplimiento de sus sentencias y, por lo tanto, *b)* ordenó a la Mesa Directiva del Consejo Nacional y al CEN del PRD cumplir con lo ordenado por la Comisión Jurisdiccional; esto es, realizar los actos tendentes a la elaboración, emisión y publicación de la Convocatoria relacionada con el proceso de renovación de cargos de dirección de dicho instituto político.

Ante la sentencia de la Sala Superior, el presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional presentó un escrito de imposibilidad de cumplimiento de sentencia. Desde su punto de vista, había circunstancias extraordinarias y transitorias que impedían llevar a cabo el proceso de renovación partidaria. Entre otras cosas, el PRD argumentó que **el inminente inicio del proceso electoral 2017 – 2018** -que comenzó **el siete de septiembre de** **dos mil diecisiete­**-, era una justificación válida para aplazar el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional**.**

La Sala Superior resolvió el incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia el **once de octubre de dos mil diecisiete**, en el sentido de declararlo **infundado.**

Las razones expuestas por la Sala Superior para desestimar el inicio del proceso electoral 2017–2018 como una justificación para incumplir la normativa partidista y la sentencia dictada en el SUP-JDC-633/2017, fueron las siguientes:

1. El partido político se había puesto en una situación que tuvo como consecuencia que temporalmente se empatara su elección interna con el proceso electoral federal.

En ese sentido, la Sala Superior consideró que lasomisiones atribuibles al partido político, no podían ser opuestas como una justificación válida para incumplir con el marco normativo.

1. Por otra parte, se consideró que “no era factible evitar el cumplimiento del principio de renovación periódica de sus dirigentes por haber iniciado el proceso electoral federal”. En ese caso, se estimó que el partido político debió prever, planear y ejecutar -en ejercicio de su propia autonomía-, todo lo necesario para estar en posibilidad de cumplir con el marco normativo y evitar un detrimento a los derechos de la militancia.
2. Por último, el PRD también manifestó que su situación económica le impedía repetir el proceso de renovación de sus órganos de dirección, al no contar con los recursos financieros contemplados para ese fin.

Con esto en mente, estimo que las razones expuestas por la Sala Superior en el incidente sobre cumplimiento de sentencia del SUP-JDC-633/2017, también son aplicables al caso que se resuelve y justifican la viabilidad de reponer el procedimiento de renovación de la Presidencia y la Secretaría General del Consejo Nacional del PRD.

En primer lugar, es pertinente recordar que ese precedente forma parte de la secuela procesal que dio origen al caso que se resuelve; la elección de la Presidencia y Secretaría General que confirma la mayoría, se da a partir de la decisión que tomó la Sala Superior en ese precedente.

Por ello, en principio, sería incongruente con lo sostenido en el SUP-JDC-633/2017 concluir que no es posible renovar los órganos de dirección de un partido político, simplemente porque ya ha comenzado un proceso electoral. Para apartarse de ese criterio, habría que demostrar que las razones que llevaron a la Sala Superior a resolver en ese sentido no son aplicables al presente caso.

Sin embargo, estimo que la racionalidad con base en la cual se concluyó que el inicio del proceso electoral 2017-2018 no era una razón válida que justificara el incumplimiento de una sentencia de la Sala Superior o, en todo caso, del marco normativo que rige la renovación de los cargos hacia dentro del PRD, también debe ser aplicada al caso concreto.

Por ello, argumentaré que las razones ofrecidas por la Sala Superior en ese caso, son similares a las de este caso, a saber: *a)* la violación al principio de paridad de género es una situación atribuible de manera exclusiva al PRD y no es una situación externa a la voluntad del partido y *b)* la satisfacción del principio de paridad de género no puede ser aplazado por el inicio del proceso de elección federal, en detrimento de los derechos de la militancia de ese partido político.

Tal como se razonó en el incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia SUP-JDC-633/2017, el PRD generó la situación que tiene como consecuencia de que su proceso de renovación de órganos de dirección se empate con el proceso federal electoral 2017-2018.

En ese sentido, el cumplimiento del principio de paridad de género, previsto desde la Constitución hasta los documentos internos del PRD, es una obligación que el partido político debe observar en la renovación de todos sus órganos y cuyo cumplimiento no depende de factores externos que escapen de su control o decisión.

Es decir, si al resolver el citado incidente en el SUP-JDC-633/2017 la Sala Superior consideró que era imperioso respetar la renovación periódica de sus militantes en cumplimiento de sus Estatutos y de una sentencia de este órgano jurisdiccional -por encima de las consideraciones prácticas relacionadas con el proceso electoral curso-, en este momento tampoco debe perder vigencia la observancia al principio de legalidad y de certeza que debe regir la vida interna de los partidos políticos.

En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral debe garantizar la certeza y la seguridad jurídica de los actos válidamente celebrados; sin embargo, ello no significa que debe convalidar una integración indebida de los órganos del PRD. Por el contrario, en este caso garantizar la certeza y la seguridad jurídica exige que se respeten los Estatutos que ese partido político se dio a sí mismo en la elección de sus órganos de dirección y, por lo tanto, respetar el principio de paridad de género previsto en el artículo 8 del Estatuto.

Es decir, la protección de la seguridad jurídica debe de partir del cumplimiento de la legalidad. Por lo que en el caso concreto lo que generaría mayor certeza incluso es asegurar el cumplimiento de la norma referida

Por lo tanto, la situación de irregularidad generada por el incumplimiento de esa obligación no puede ser tomada en cuenta como una razón que le permita al partido político incumplir el principio de paridad de género.

Por otra parte, si el principio de paridad de género es un principio, este permea todo el marco normativo que rige la renovación de los órganos del PRD, ya que conforme al artículo 8 de sus Estatutos, el partido político debió de prever, planear y ejecutar -en ejercicio de su propia autonomía-, todo lo necesario para cumplir con el marco normativo y evitar el detrimento a los derechos de la militancia.

En ese orden de ideas, al resolver el incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia del SUP-JDC-633/2017, la Sala Superior consideró que el PRD no podía oponer su situación financiera como una justificación para incumplir con su Estatuto y con una ejecutoria de este órgano jurisdiccional, porque había recibido una cantidad cierta y determinada de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año dos mil diecisiete, en la que debió prever sus procesos de renovación.

Por ello, si en este caso el PRD no ha opuesto su situación financiera como una justificante que le impida cumplir con el marco normativo que rige la renovación de sus órganos, considero que la Sala Superior no debería ponderar esa situación al decidir sobre la viabilidad de repetir el proceso de renovación de órganos, máxime que en el precedente inmediatamente referido consideró que ello no justificaba incumplir con su Estatuto.

Por lo tanto, es preciso concluir que las razones que la Sala Superior sostuvo al resolver el incidente sobre imposibilidad de cumplimiento de sentencia en el SUP-JDC-633/2017 son igualmente aplicables al caso concreto. Por ello, si en aquel caso este órgano jurisdiccional estimó que el proceso electoral 2017-2018 no era un impedimento para repetir el proceso de renovación de los órganos del PRD -para proteger el principio de renovación periódica de sus dirigentes-, en este caso debe privilegiarse el respeto al principio de paridad de género.

Lo anterior, con la finalidad de evitar que se genere un perjuicio a los militantes que intentan participar en los procedimientos internos del partido político, así como para garantizar el principio de paridad de género en la integración de los órganos de dirección de ese partido político.

**2.2.2. La estructura del PRD como partido nacional permite un cambio en su dirigencia sin poner en riesgo las funciones electorales**

No estoy de acuerdo con las afirmaciones del proyecto en el sentido de que el cambio que se ordene en la dirigencia compromete las funciones electorales del PRD, pues al ser un partido político nacional tiene la infraestructura suficiente para desarrollar sus funciones en los procesos electorales del siguiente año y procesar ese cambio al mismo tiempo.

De acuerdo con su estructura orgánica, el PRD cuenta con diversos órganos de dirección. A saber, en el ámbito estatal y municipal el PRD cuenta con comités ejecutivos municipales; consejos municipales; comités ejecutivos estatales; consejos estatales; y en el orden nacional, con el Comité Ejecutivo en el Exterior; el Consejo en el Exterior; el Comité Ejecutivo Nacional; el Consejo Nacional; y el Congreso Nacional.[[55]](#footnote-55)

El CEN, como se precisó, se integra por 25 militantes, de entre quienes están aquellas personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría General.

De igual forma, a nivel nacional el PRD organiza comisiones para llevar a cabo las labores y objetivos partidistas, esas comisiones son a) La Comisión Nacional Jurisdiccional; b) La Comisión Electoral; c) La Comisión de Auditoría; d) La Comisión de Afiliación; y e) La Comisión de Vigilancia y Ética.[[56]](#footnote-56)

Asimismo, el CEN cuenta con al menos **trece secretarías**, entre las que se incluyen la de organización y la electoral,[[57]](#footnote-57) cuyas funciones son las de ejecutar y llevar a cabo las tareas partidistas.

De esa manera, puede advertirse que el partido político distribuye sus funciones en una diversidad de órganos y autoridades que en conjunto cumplen con sus tareas y fines. Así, no todas las actividades electorales recaen en las personas que ocupan la Presidencia o la Secretaría General del partido, y ni siquiera todas las funciones o competencias están a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.

Con base en ello, no es factible observar al PRD como un partido político cuyas funciones y tareas estén concentradas en una única persona o en un solo órgano, sino que, por la magnitud propia de un partido político nacional, al tener diversas tareas y objetivos que cumplir, tiene una división orgánica y funcional en la que están involucradas una multitud de militantes, autoridades y órganos.

Así considero que la estructura del PRD puede soportar el cumplimiento de la paridad de género al encomendar a algunos órganos a organizar la sustitución de alguno de sus dirigentes de más alto rango, mientras el resto de la estructura partidista y sus militantes no pierden la concentración respecto de las funciones electorales propias del proceso electoral nacional o de las entidades federativas que se desarrollarán en este año.

Si bien, es deseable, como lo sostiene la mayoría, que todo el partido esté concentrado en el proceso electoral, lo cierto es que la aplicación de una orden que implica cumplir con la paridad de género al elegir ya sea a una presidenta o una secretaria general, no compromete la función electoral del partido, pues esta función está soportada por diversos órganos y autoridades partidistas.

**2.2.3. El cambio de la Presidencia o Secretaría General no implica necesariamente un procedimiento que distraiga desproporcionadamente la actividad del partido**

Tampoco comparto el argumento de la mayoría en el sentido de que la complejidad del procedimiento de designación sea una circunstancia que haga imposible o desproporcionado el cambio en la Presidencia o en la Secretaría General del partido político.

Ese argumento parte de una premisa que no es necesariamente verdadera, ya que no es indispensable que se siga un procedimiento de elección que contemple la complejidad que sostiene la sentencia, con campañas, publicidad, etapa de resultados, calificación, etcétera.

Por ejemplo, el PRD podría optar válidamente por el método de candidatura única, que quedó precisada y que prevé el propio Estatuto. Ese fue el método por el cual eligieron a las personas que actualmente ocupan el cargo.

Asimismo, el propio Estatuto del PRD, en su artículo 93, inciso r) prevé que, en caso de vacantes por renuncia, remoción o ausencia, el Consejo Nacional podrá nombrar a sus sustitutos con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de las consejerías presentes.

Éste es un método que podría utilizar el partido, para que cumpla con la paridad exigida y designe al menos a una mujer en algún cargo de dirección de mayor jerarquía, sin llevar a cabo un proceso complejo de elección. Este método, que involucra una actuación del Consejo Nacional, no resulta en una distracción o una exigencia irrazonable o desproporcionada, sino que se justifica en tanto que se estaría satisfaciendo el principio de igualdad y requeriría la actuación de su órgano máximo, que sesiona regularmente cada tres meses.[[58]](#footnote-58)

**2.2.4. El propio partido ha ordenado un cambio en su comisión de elecciones**

Un argumento que favorece la postura de que el cumplimiento con la paridad de género no le resulta gravoso o imposible al partido, es que el PRD, ha ordenado que el Consejo Nacional regularice la integración de la Comisión Electoral, precisamente para cumplir con la paridad de género.

Es un hecho notorio lo resuelto por la Comisión Nacional Jurisdiccional en la queja contra órgano QO/NAL/354/2017 y su acumulado QO/NAL/15/2018, porque es el acto reclamado en el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-31/2018, que se analiza por la Sala Superior en la misma sesión en que se resuelve el presente asunto.

En esa resolución partidista se determinó que el PRD no respetó la paridad de género en la integración de la Comisión Electoral y ordenó al presidente y al Consejo Nacional regularizar la integración en la próxima sesión.

De esa resolución advierto que uno de los órganos del propio partido considera que sí es factible ordenar la sesión del Consejo Nacional a efecto de modificar la integración de un órgano de dirección partidista como sería la Comisión Electoral, órgano que además tiene la facultad de organizar todos los procesos de elección, incluidos los de los candidatos a los cargos de elección popular.[[59]](#footnote-59)

De manera que, si un órgano del propio partido, como lo es la Comisión Jurisdiccional, ha sostenido que es viable actualmente modificar el órgano que se encarga de organizar las elecciones de los candidatos, desde mi perspectiva eso supone que es viable realizar un proceso interno para nombrar a una mujer en la presidencia o en la secretaría general.

**3. Efectos que se derivan de mi postura**

En atención a lo manifestado en el presente voto particular, considero que los efectos de la determinación que propongo, en cumplimiento al principio de autodeterminación de los partidos políticos que implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa interna y que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en sus asuntos internos en términos de lo que señalen la Constitución General y las leyes respectivas, deben ser los siguientes:

Vincular al Consejo Nacional del PRD para que realice la convocatoria respectiva con el fin de elegir al presidente y secretario general del CEN debiendo cumplir con la regla de paridad vertical prevista en el Estatuto del partido, en términos de lo establecido en el artículo 93, inciso r) del referido documento básico, o, en su caso, designe a la sustituta de la Presidencia Nacional o de la Secretaría General con el fin de dar cumplimiento a la integración paritaria correspondiente.

En el supuesto de que se opte por convocar a un nuevo proceso electivo de presidente y secretario general, no obstante, el método que se elija, tanto en la convocatoria como en el procedimiento de registro de fórmulas, deberán realizarse los actos necesarios para garantizar que la integración obedezca a las reglas de paridad vertical adoptada por el partido en sus documentos básicos.

Por lo tanto, puesto que desde mi argumentación llego a una conclusión opuesta a la de la mayoría, no comparto su sentido y por ello emito el presente voto particular.

**MAGISTRADO**

**REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN**

**VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO Y EL MAGISTRADO JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 199, FRACCIONES I, VI Y XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA APROBADA EN EL JUCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-20/2018.**

Con el respeto a la Señora y Señores Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, nos apartamos de algunas de las consideraciones sustentadas en el presente asunto, en el que se confirma, por razones diversas a las establecidas en la resolución impugnada, la determinación por la cual la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática declaró infundada la queja QO/NAL/347/2017 y confirmó la validez de la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político, de acuerdo con lo siguiente:

En el incidente de imposibilidad de incumplimiento de sentencia dictado dentro de las actuaciones del SUP-JDC-633/2017, esta Sala Superior mandató a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática a que llevara a cabo la renovación de sus diversos órganos de dirección y, de manera particular, se renovara la Presidencia y Secretaría General de su Comité Ejecutivo Nacional. En cumplimiento a lo ordenado, el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el Décimo Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, con carácter electivo, del Partido de la Revolución Democrática, en el que se eligió a la dirigencia nacional e integrantes de las comisiones del citado instituto político.

A su vez, la actora controvierte, ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido, la validez de esta elección, al considerar que en la designación hecha por el Consejo Nacional se inobservó el principio de paridad de género dispuesto por el artículo 8, inciso e) de los Estatutos que rigen la vida interna de ese instituto político.

Por su parte, el órgano partidista responsable consideró que no le asistía razón a la actora, ya que estimaba –de acuerdo con lo dispuesto en la ejecutoria recaída al SUP-JDC-832/2013 dictada por esta Sala Superior- que no operaban las reglas de paridad de género en la elección de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del CEN, al tratarse de cargos unipersonales con funciones diferenciadas y cuya designación dependía de los resultados obtenidos en un proceso electivo. Además, estableció que, desde su perspectiva, la correcta intelección del artículo 8, inciso e) en relación con el 101 de los Estatutos llevaba a concluir que el principio de paridad sólo resultaba aplicable a los veintiún miembros del Comité Ejecutivo Nacional que integran sus diversas carteras.

En el presente juicio ciudadano, la actora controvierte la determinación adoptada por el órgano de justicia intrapartidario, esencialmente, porque considera que la resolución se apartó de los principios constitucionales y obligaciones convencionales que tiene el Estado Mexicano y que tienen por objeto garantizar el derecho a la igualdad y a la paridad de género.

1. **CRITERIO MAYORITARIO**

En el proyecto se considera que le asiste la razón a la actora porque en la integración y elección de la fórmula para la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática no se garantizó el principio de paridad de género dispuesto por el artículo 8, inciso e), del Estatuto de ese partido político, cuando con motivo de la reforma estatutaria hecha en dos mil quince, se puede advertir que su intención fue garantizar en la mayor medida posible la paridad de género, no sólo en la postulación de cargos de elección popular, sino en la integración de todos sus órganos de dirección; circunstancia que, necesariamente, incluye a los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, al ser postulados mediante fórmula que debe estar compuesta por un hombre y una mujer.

Así, no obstante que se consideran fundados los agravios expresados por la actora, el criterio sustentado por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior considera que es inviable su pretensión de que se revoquen los nombramientos de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional porque se debe garantizar el cumplimiento de los principios que rigen a los procesos electorales que actualmente se desarrollan, por lo que hasta el próximo proceso de renovación de la dirigencia nacional será exigible el cumplimiento al principio de paridad de género.

A juicio de la mayoría, esta determinación le permitirá al partido que continué con la ejecución de las actividades propias y necesarias para el desarrollo de los procesos electorales porque se considera que ordenar una renovación a la dirigencia del partido implicaría una carga excesiva y una distracción en el cumplimiento de los fines constitucionales que subyacen en los procesos electorales para la renovación de cargos de elección popular.

Para sustentar lo anterior, en el proyecto se incluye una disertación de diversos precedentes establecidos por la anterior integración del Pleno de esta Sala Superior y, que a juicio del ponente, permiten concluir que cuando exista la concurrencia de diversos procedimientos electorales de índole constitucional y de manera concomitante una elección de dirigencia intrapartidaria, se debe privilegiar que la militancia se concentre en el procedimiento de elección constitucional, lo que se traduce en un estado temporal de excepción que le da al partido la posibilidad de participar en la preparación de las elecciones atinentes.

1. **MOTIVOS DEL DISENSO**

Si bien compartimos las consideraciones relativas a que le asiste razón a la enjuiciante porque el partido se encontraba obligado a garantizar el principio de paridad de género en la integración de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional llevada a cabo por el Consejo Nacional, nos apartamos de las razones por la cuales se estima que no es viable ordenar un reajuste a la dirigencia recién nombrada.

Ello, en atención a las consideraciones siguientes:

En el caso concreto, es incuestionable que respetar y garantizar la paridad de género en la integración de todos los órganos de dirección del partido político y, especialmente, en la conformación de su Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, es una obligación de cumplimiento inexcusable, que no puede quedar supeditada a consideraciones jurídicas o fácticas que, desde nuestra perspectiva, no justifican la inobservancia a la norma intrapartidaria.

Al respecto, es importante considerar que, en relación con el principio de paridad en la integración de órganos partidistas, esta Sala Superior determinó, al resolver el diverso SUP-JDC-369/2017, que de una interpretación sistemática de los artículos 1º, 4° y, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, los partidos políticos tienen, entre otras cuestiones, la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y garantizar una representación equilibrada en las estructuras de los órganos de dirección partidista.

Asimismo, que los partidos políticos se encuentran obligados a observar la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección partidista, a efecto de garantizar una participación efectiva de las mujeres en los mismos, sin que sea necesario que las reglas de paridad estén contenidas necesariamente en los Estatutos, pues basta que se enuncien en su normativa.

En efecto, en criterios aún más recientes, esta Sala Superior, determinó en el SUP-REC-1319/2017, que fue correcta la actuación tanto del Tribunal Electoral de Tlaxcala, como de la Sala Regional responsable al ordenar que los órganos de dirección del Partido Socialista se debían conformar de manera paritaria, al tratarse de cargos hechos mediante una designación.

Por otra parte, no se comparte la consideración de que ordenar en estos momentos al partido que ajuste la integración de su Presidencia o Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional conllevaría que ello tuviera lugar en el mes de abril de este año -cuando están en curso las campañas electorales en el proceso federal- aspecto que no garantizaría la adecuada participación del partido; porque en el caso no estamos ante un esquema de renovación de dirigencia producto de una elección interna.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente, se puede advertir que la renovación de la dirigencia hecha en cumplimiento a la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, se llevó a cabo a través de una designación directa hecha por el Consejo Nacional, por lo que no necesariamente es cierto que para ajustar la integración de su dirigencia se deba desplegar un procedimiento interno de corte electivo.

Al respecto, en el Reglamento de Elecciones y Consultas, se advierte que el Partido cuenta con tres métodos para elegir a sus dirigentes nacionales, a saber:

a) Por votación universal, directa y secreta de todas las personas afiliadas al Partido del ámbito correspondiente.

b) Por votación de los Consejeros del ámbito que le corresponda.

c) Por candidatura única presentada ante el Consejo.

En el caso, la designación hecha en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal fue por “candidatura única presentada ante el Consejo” de hecho, en las constancias que integran el expediente en que se actúa, se puede advertir que la Convocatoria aprobada por el Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, estableció en su Base Octava que los aspirantes no podrían realizar actos de campaña interna, toda vez que en la misma sesión en que se llevaría a cabo la elección, la Comisión Electoral notificaría a la Mesa Directiva del Consejo Nacional el acuerdo de otorgamiento de registros a los aspirantes interesados; es decir, en la misma sesión se otorgaría el registro y se llevaría a cabo el nombramiento.

Aunado a lo anterior, es importante añadir que en el caso de que el partido decidera no llevar a cabo un proceso electivo para el ajuste que ordenara esta Sala Superior, el artículo 93 inciso s) de los Estatutos, prevé como atribución del Consejo Nacional, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus consejeros presentes, el nombrar a los titulares de la Presidencia o la Secretaría General sustitutos en caso de renuncia, remoción, ausencia o, como ocurre en el presente caso, por determinación judicial.

En este orden de ideas, si los Estatutos establecen mecanismos que le permiten al partido adoptar decisiones de carácter extraordinario para la renovación o integración de su dirigencia, precisamente, a consecuencia de los diversos criterios sostenidos por esta Sala Superior que han considerado vital el correcto funcionamiento de sus órganos internos, es que no puede ampararse en una situación extraordinaria e insuperable para el incumplimiento contumaz a su normativa interna y a sus obligaciones constitucionales.

Es nuestra convicción que sí existen condiciones jurídicas y materiales que no colocan al partido en un estado de incertidumbre o desventaja frente a los procesos electorales en curso si esta Sala ordena que se ajuste la integración de la Presidencia o la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional porque cuenta con mecanismos extraordinarios que le permitirían no desplegar un proceso electivo, por lo que no se considera que, en el caso, se justifique el incumplimiento a la normatividad que el propio partido se ha dado, sobre la base de evitarle distracciones innecesarias en la consecución de sus fines constitucionales.

Máxime si, a partir de la conducta contumaz del partido en la renovación de su dirigencia, en el incidente de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia dictado dentro del SUP-JDC-633-2017, esta Sala Superior consideró que tampoco era factible evitar el cumplimiento del principio de renovación periódica de sus dirigentes por haber iniciado el proceso electoral federal, dado que este supuesto, al igual que el relativo a la falta de recursos económicos estaban dentro de la esfera interna del partido político, mismos que debió prever, planear y ejecutar en ejercicio de su propia autonomía y autoorganización, por lo que en el presente caso no podría dispensarse el cumplimiento temporal a sus obligaciones si el partido fue negligente o hizo una interpretación indebida de su reglas internas que lo llevaron a proponer al Consejo Nacional una fórmula única para ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General en contravención a su norma estatutaria.

De ahí que, si el partido tiene la obligación de garantizar una representación paritaria en la fórmula para la renovación de la Presidencia y la Secretaría General de su Comité Ejecutivo Nacional, a nuestro juicio se debe ordenar el ajuste respectivo, con independencia de que actualmente se encuentren en curso los procesos electorales 2017-2018 o del tiempo o los recursos humanos o materiales que se encuentren implicados para su designación.

Por las razones expuestas, es que respetuosamente disentimos del criterio adoptado por la mayoría de los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADA**  **MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO** | **MAGISTRADO**  **JOSÉ LUIS**  **VARGAS VALDEZ** |

1. En lo sucesivo el PT. [↑](#footnote-ref-1)
2. En lo sucesivo la Comisión. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lo que equivale al 67% de sus integrantes, toda vez que tal órgano lo integran 125 personas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 37 Bis. Se convocará y notificará a las reuniones a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, por uno o más de los siguientes medios: se dirigirá a la sede Estatal del PT, en la entidad que corresponda, por vía telefónica, vía fax, telégrafo, correo certificado, página web oficial del PT, publicación de la convocatoria en el periódico oficial del Partido: "Unidad Nacional", publicación de la convocatoria en un medio impreso de circulación nacional, por medio de la dirección o correo electrónico que cada integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional tenga asignado. Una vez realizada la notificación de la convocatoria de que se trata, por cualquiera de las vías señaladas con antelación, surtirá sus efectos legales.

   Artículo 37 Bis 1. La Comisión Ejecutiva Nacional designará, un Secretario Técnico que tendrá [↑](#footnote-ref-4)
5. Motivo de inconformidad hecho valer sólo el SUP-JDC-369/2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Cfr.:* Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, p 17. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Cfr.:* Tesis P./J. 14/2013 (9a.), en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, pág. 155, Jurisprudencia(Constitucional), con título: “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LOS ARTÍCULOS 16, NUMERAL 3, PÁRRAFO SEGUNDO Y 131, NUMERAL 3, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL SEÑALAR QUE QUEDAN EXCEPTUADAS DEL PORCENTAJE DE CUOTAS DE GÉNERO AQUELLAS CANDIDATURAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROCESO DE ELECCIÓN DEMOCRÁTICO, CONFORME A LOS ESTATUTOS DE CADA PARTIDO, NO VULNERAN ESOS PRINCIPIOS.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. Documento electrónico <http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/9_gvulnerables_archivos/G_vulnerables/d_gvulnerables.htm#[Citar_como>] [↑](#footnote-ref-8)
9. “Artículo 3.

   …

   3. Los institutos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, **y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos**.” [↑](#footnote-ref-9)
10. *Cfr.:* Jurisprudencia 24/2002, consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 19 y 20, bajo el rubro: “DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.” [↑](#footnote-ref-10)
11. 11 Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia en materia común, de rubro: **HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓNDEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.** Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470. [↑](#footnote-ref-11)
12. 13 Ídem [↑](#footnote-ref-12)
13. 14Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia en materia común, de rubro: **HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE EQUIVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.** Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470. [↑](#footnote-ref-13)
14. Similares consideraciones se sostuvieron en el SUP-REC-3/2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Véase la jurisprudencia de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO”. [↑](#footnote-ref-15)
16. **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

    I. **Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden**.

    Los partidos políticos **tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática**, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

    […] [↑](#footnote-ref-16)
17. **Artículo 3.**

    […]

    **3**. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

    […] [↑](#footnote-ref-17)
18. **Artículo 37.**

    1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

    […]

    e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. [↑](#footnote-ref-18)
19. De conformidad con los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 79 y 83 párrafo 1, inciso a). [↑](#footnote-ref-19)
20. Cabe mencionar que esta Sala Superior ha tomado medidas similares en circunstancias extraordinarias y transitorias cuando acontecen en el marco de renovación de dirigencias partidistas. Al efecto véase el SUP-JDC-1131/2017, así como la jurisprudencia 48/2013 de rubro: **DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA SU PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DE SU CARGO CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS, POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS.** [↑](#footnote-ref-20)
21. **Artículo 1o.**- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [↑](#footnote-ref-21)
22. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. [↑](#footnote-ref-22)
23. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. [↑](#footnote-ref-23)
24. **Artículo 1.** La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

    **Artículo 2.-** Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Artículo 35.**- Son derechos del ciudadano:

    I. Votar en las elecciones populares;

    II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

    III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

    IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

    […] [↑](#footnote-ref-25)
26. Jurisprudencia visible en:

    http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=DERECHO,DE,AFILIACI%c3%93N,EN,MATERIA,POL%c3%8dTICO-ELECTORAL.,CONTENIDO,Y,ALCANCES. [↑](#footnote-ref-26)
27. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e IDEA Internacional realizaron una investigación denominado Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente, mediante el cual diagnosticaron la situación de las mujeres al interior de las estructuras paritarias y el grado en que los partidos promueven el ejercicio de sus derechos desde una perspectiva de igualdad, del cual se advierte que México no llega ni al 20% de presencia de mujeres en las dirigencias de los partidos políticos. Documento consultable en: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/partidos\_politicos\_y\_paridad.pdf [↑](#footnote-ref-27)
28. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene reglas del principio de paridad en candidaturas para cargos de elección popular como: derecho al sufragio (artículo 7: votar en las elecciones constituye un derecho de hombres y mujeres y una obligación de los partidos políticos de garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad para tener acceso a cargos de elección popular); tipo de candidaturas (artículos 14, 233 y 234: aplicación del principio de paridad para candidaturas a cargos de elección popular para integrar ambas Cámaras, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; obligación aplicable a los partidos políticos y coaliciones); suplencia de género [↑](#footnote-ref-28)
29. **Artículo 35.-** La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

    **Artículo 36.-** Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

    […]

    **IV.** Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; [↑](#footnote-ref-29)
30. Al respecto, revísese el objetivo estratégico G1, punto 191 de la Plataforma de Acción de Beijing. [↑](#footnote-ref-30)
31. Al respecto, revísese el Consenso de Quito, puntos viii y ix. [↑](#footnote-ref-31)
32. Emitida el veintidós de junio de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados. [↑](#footnote-ref-32)
33. En concreto de los artículos 1°, 4°, primer párrafo y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 3 y 37, párrafo 1, inciso e), de la ley General de Partidos Políticos; 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; III, de la Convención Americana sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); 3 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Recomendación General 25 formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Artículo 41.** […] Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. [↑](#footnote-ref-34)
35. **Artículo 41.** […]  **I.** Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

    […]

    Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. [↑](#footnote-ref-35)
36. **Artículo 43.**

    **1.** Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

    **[…]**

    **b)** Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas; [↑](#footnote-ref-36)
37. **Artículo 3.**

    **Párrafo 3.** Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

    **Artículo 37.**

    **1.** La declaración de principios contendrá, por lo menos:

    **e)** La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

    **Artículo 39.**

    **1.** Los estatutos establecerán:

    **d)** La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;

    **e)** Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos; [↑](#footnote-ref-37)
38. SUP-JDC-3151/2012. [↑](#footnote-ref-38)
39. **Artículo 104.** El titular de la Presidencia Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

    a) Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y conducir los trabajos de éste;

    b) Convocar a las reuniones de los órganos señalados en el inciso anterior;

    c) Ser el vocero del Partido a nivel nacional;

    d) Presentar al Consejo Nacional, por lo menos cada tres meses, los informes de actividades del Comité Ejecutivo Nacional; para el caso el titular de la Presidencia Nacional presentará el informe correspondiente en el Consejo Nacional posterior a la celebración de la sesión de esta última;

    e) Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación;

    f) Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional e informar a los integrantes del mismo en su sesión siguiente, procurando siempre consultar a sus integrantes;

    g) Presentar ante el Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional en pleno los casos políticos de urgente resolución;

    h) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional, así como las emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional;

    i) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las finanzas del Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con el titular de la Secretaría de Finanzas;

    j) Convocar a dirigentes, legisladores y representantes populares emanados del Partido a Consejos Consultivos a efecto de buscar la construcción de consensos, políticas públicas, propuestas y proyectos de trabajo, fortaleciendo la visión ideológica y programática del Partido, estableciendo vínculos con diferentes sectores de la sociedad mexicana y la comunidad internacional;

    k) Invitar a reuniones del Consejo Consultivo con el Comité Ejecutivo Nacional a intelectuales, profesionistas, expertos u organizaciones sociales expertas en diversos temas de trascendencia nacional o temas especializados a efecto de apoyar y orientar los trabajos y prioridades del propio Comité Ejecutivo Nacional;

    l) Convocar, al menos cada tres meses, a los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales a reuniones de trabajo y coordinación para implementar acciones conjuntas y fomentar el crecimiento presencial y electoral del Partido; y

    m) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. [↑](#footnote-ref-39)
40. **Artículo 105.** El Titular de la Secretaría General Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

    a) Coordinar y organizar, en acuerdo con el Presidente Nacional, el trabajo de las Secretarías y comisiones del Comité Ejecutivo Nacional;

    b) Sustituir al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo en sus ausencias temporales, mientras éstas no sean mayores de un mes;

    c) Coordinar la actividad interna del Partido en a nivel nacional;

    d) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas del Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con el titular de la Secretaría de Finanzas; y

    e) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y el Reglamento de Comités Ejecutivos que para el efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional. [↑](#footnote-ref-40)
41. **Artículo 269.** Para la elección de la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivos en sus respectivos ámbitos, los Consejos correspondientes deberán decidir con al menos el sesenta por ciento de votos aprobatorios de los Consejeros presentes, el método electivo por el cual serán electos dichos cargos, el cual podrá ser cualquiera de los siguientes métodos:

    **a)** Por votación universal, directa y secreta de todos los afiliados del ámbito correspondiente.

    La fórmula que obtenga al menos el sesenta por ciento de la votación válida le corresponderá la asignación de ambos cargos directivos.

    De no ser el caso, ocupará la Presidencia quien obtenga la mayoría de los votos y la Secretaría General quien obtenga la primera minoría de votos;

    **b)** Por votación de los Consejeros del ámbito que le corresponda.

    En el caso de este método la elección los titulares de la Presidencia y Secretaría General de los Comités Ejecutivos, ya sea Nacional, Estatal o Municipal serán electos por medio de votación libre, directa y secreta en urna por los Consejeros del ámbito respectivo por al menos el sesenta por ciento de los Consejeros presentes y mediante el sistema de rondas. Si en la primera ronda ninguna fórmula obtiene el porcentaje establecido por el presente inciso, se procederá a realizar nuevas rondas de votación hasta que se alcance el citado porcentaje de votación. No se contarán las abstenciones; y

    **c)** Por candidatura única presentada ante el Consejo.

    En todos estos métodos de elección los candidatos a dichos cargos se registrarán y postularán al cargo que deseen ocupar en fórmulas. [↑](#footnote-ref-41)
42. Cfr. Cuadro comparativo de la reforma al Estatuto del partido político nacional denominado “Partido de la Revolución Democrática”, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Nacional Electoral, publicado en el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Anexo 6). [↑](#footnote-ref-42)
43. Publicado en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral (Anexo Único de la Resolución INE/CG731/2016 aprobada en sesión extraordinaria el 14 de octubre de 2016). [↑](#footnote-ref-43)
44. Así como para elegir a los integrantes de la Comisiones Nacionales del partido político, establecidas en el artículo 130 del Estatuto y del instituto nacional de investigaciones, formación política y capacitación en políticas públicas y gobierno. [↑](#footnote-ref-44)
45. **Artículo 269.** Para la elección de la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivos en sus respectivos ámbitos, los Consejos correspondientes deberán decidir con al menos el sesenta por ciento de votos aprobatorios de los Consejeros presentes, el método electivo por el cual serán electos dichos cargos, el cual podrá ser cualquiera de los siguientes métodos:

    **c)** Por candidatura única presentada ante el Consejo. [↑](#footnote-ref-45)
46. Recuérdese que, para dar cumplimiento a la resolución incidental de cumplimiento de sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-633/2017, el Partido de la Revolución Democrática renovó su dirigencia nacional el nueve de diciembre de dos mil diecisiete y los dirigentes designados durarán en el cargo un año. [↑](#footnote-ref-46)
47. Elaboraron: Juan Guillermo Casillas Guevara, Olivia Yanely Valdez Zamudio, Bruno Alejandro Acevedo Nuevo, Alejandro Arturo Martínez Flores y José Neguib Beltrán Fernández. [↑](#footnote-ref-47)
48. Véase la sentencia de Sala Superior SUP-JDC-369/2017 y acumulados, dictada el 22 de junio de 2017. [↑](#footnote-ref-48)
49. Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática. 4.3.1. El partido y las mujeres. [↑](#footnote-ref-49)
50. Artículo 101. El Comité Ejecutivo Nacional se integrará por: a) Un titular de la Presidencia Nacional; b) Un titular de la Secretaría General; c) Por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido en el Congreso de la Unión; y d) Veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional, mediante el sistema de Planillas. Dichos integrantes serán asignados bajo el principio de representación proporcional pura. En esta integración se considerará al titular de la Secretaría de Jóvenes. Para efectos del inciso d) de este artículo siempre se respetará la paridad de género. [↑](#footnote-ref-50)
51. En los casos de elecciones con múltiples fórmulas registradas, si en una primera ronda de votación no hay fórmula que alcance por lo menos el 60 % de votación, se llevará a cabo una segunda ronda en la que participarán las dos fórmulas que obtengan mayor votación.

    Si en la segunda ronda no hay fórmula que obtenga por lo menos el 60 % de votación, se llevará a cabo una tercera ronda en la que participarán las dos fórmulas que obtuvieron mayor votación en la primer ronda.

    Si en la tercera ronda de votación no hay planilla que obtenga por lo menos el 60 % de votación, la presidencia será asignada a la planilla que obtenga la mayoría relativa, y la Secretaría general se asignará a la planilla que obtenga la primera minoría.

    En todos los casos, si alguna planilla obtiene por lo menos el 60 % de votación, se le asignarán ambos cargos. [↑](#footnote-ref-51)
52. Artículos 31, 32, 33 y 41 inciso h) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democráctica. [↑](#footnote-ref-52)
53. Información tomada del portal de internet official del PRD <http://www.prd.org.mx/documentos/prd_historia_pagina.docx> [↑](#footnote-ref-53)
54. Unión Europea, *Structural change in research institutions: Enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation,* 2012. Consultado en <https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/structural-changes-final-report_en.pdf> [↑](#footnote-ref-54)
55. Véase artículo 34 de los Estatutos del PRD. [↑](#footnote-ref-55)
56. Véase artículo 130, Ibidem. [↑](#footnote-ref-56)
57. Véase artículo 102 Ibidem. [↑](#footnote-ref-57)
58. Véase artículo 91, Ibidem. [↑](#footnote-ref-58)
59. Véanse artículos 148 y 149 Ibidem [↑](#footnote-ref-59)